



Asamblea General

Distr. general
8 de agosto de 2011
Español
Original: inglés

Sexagésimo sexto período de sesiones

Tema 83 del programa provisional*

El estado de derecho en los planos nacional e internacional

El fortalecimiento y la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho

Informe del Secretario General

Resumen

Este es el tercer informe anual del Secretario General sobre el fortalecimiento y la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho, un proceso continuo y esencial para la Organización. El informe se presenta de conformidad con lo dispuesto en la resolución 65/32 de la Asamblea General.

El Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, que preside la Vicesecretaría General y recibe el apoyo de la Dependencia sobre el Estado de Derecho, sigue conduciendo a la Organización hacia una asistencia más estratégica y eficaz en el ámbito del estado de derecho, para lo cual vela por mejorar la calidad, coordinación y coherencia generales de las actividades de las Naciones Unidas.

En el presente informe se ilustran los avances y problemas principales observados durante el pasado año en cuanto al fortalecimiento del estado de derecho en los planos nacional e internacional. Se hace hincapié en el constante progreso hacia un enfoque más amplio y coordinado de las Naciones Unidas en apoyo a las prioridades y los planes nacionales y, al propio tiempo, se señalan las medidas que se pueden adoptar en el futuro.

* A/66/150.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
II. Promoción del estado de derecho en el plano internacional	4
A. Codificación, desarrollo, promoción y aplicación de un marco internacional de normas y principios	4
B. Cortes y tribunales internacionales e híbridos	6
C. Mecanismos no judiciales	7
III. Enfoque de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho en el plano nacional	8
A. Marco para el fortalecimiento del estado de derecho	9
B. Medidas para hacer frente a los desafíos críticos en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos	14
IV. Coordinación y coherencia generales	17
A. Labor de orientación y ejecución del plan estratégico conjunto	17
B. Extensión a todo el sistema	19
C. Participación estratégica conjunta en el plano nacional	19
D. Medición de la eficacia y evaluación de los efectos	21
E. Fortalecimiento del estado de derecho en la Organización	22
F. Expansión de las asociaciones	22
V. Construcción de un mundo justo, seguro y pacífico regido por el estado de derecho	24
Anexo	
Opiniones expresadas por los Estados Miembros	25

I. Introducción

1. En el Oriente Medio y África Septentrional han sobrevenido profundas transformaciones políticas en respuesta a los llamamientos populares en favor de realzar la rendición de cuentas, la transparencia y el estado de derecho. Esta evolución pone claramente de relieve la importancia de las actividades de las Naciones Unidas en un proceso continuo orientado a promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional. El presente informe ofrece la oportunidad, por un lado, de hacer un seguimiento de los avances logrados en la realización de este programa amplio y ambicioso y, por el otro, de reflexionar sobre los problemas actuales. El informe se basa en los hitos logrados hasta la fecha en este proceso: la Declaración del Milenio (resolución 55/2 de la Asamblea General); el informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616); el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General); el informe del Secretario General sobre el fortalecimiento del apoyo de las Naciones Unidas al estado de derecho (A/61/636-S/2006/980 y Corr.1) y la creación de nuevos mecanismos a nivel de todo el sistema, como el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, que recibe asistencia de la Dependencia sobre el Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General, y un sistema de entidades principales no exclusivas en diversos subsectores del estado de derecho; la lista de actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el estado de derecho (A/63/64); el informe del Secretario General sobre fortalecimiento y coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho (A/63/226); y los informes anuales primero y segundo del Secretario General sobre el tema (A/64/298 y A/65/318).

2. Las Naciones Unidas suministran asistencia para la promoción del estado de derecho a más de 150 Estados Miembros en todas las regiones del mundo. Estas actividades se llevan a cabo en dos contextos, incluidos el desarrollo, la fragilidad, el conflicto y la consolidación de la paz. Tres o más entidades del sistema de las Naciones Unidas realizan actividades relacionadas con el estado de derecho en por lo menos 70 países y cinco o más entidades lo hacen en más de 35 países. Los datos probatorios sustentan la tendencia hacia un mayor número de iniciativas conjuntas y amplias por parte de las entidades operacionales clave en el ámbito del estado de derecho, en particular en contextos que sufren o han sufrido conflictos, donde se llevan a cabo 17 operaciones de paz con mandatos relacionados con el estado de derecho.

3. El Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, que preside la Vicesecretaría General y recibe asistencia de la Dependencia sobre el Estado de Derecho, sigue avanzando en la coordinación y coherencia estratégicas de las actividades de la Organización a nivel de todo el sistema. Se han hecho avances en la racionalización de las políticas y la orientación, el apoyo a medidas coherentes en los países y la ampliación de las asociaciones con miras a situar las perspectivas nacionales en el centro de la asistencia para la promoción del estado de derecho.

4. Sin embargo, las Naciones Unidas siguen experimentando problemas por lo que respecta a suministrar una asistencia eficaz para la promoción del estado de derecho. Entre esos problemas se cuentan la necesidad de fomentar la voluntad y la dirección políticas necesarias para que el estado de derecho pase a ser una prioridad nacional e impulse las actividades de reforma y la ausencia de una coordinación

general entre los actores nacionales e internacionales pertinentes. Es preciso resolver esos problemas a fin de reducir la disparidad que existe entre las normas y principios internacionales y su aplicación efectiva en el plano nacional.

5. Este informe se presenta de conformidad con lo dispuesto en la resolución 65/32, de la Asamblea General en la que la Asamblea solicitó al Secretario General que presentara su informe anual sobre las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho, en particular la labor del Grupo y la Dependencia, con especial referencia a la mejora de la coordinación, la coherencia y la eficacia de estas actividades. En el anexo del presente informe figuran las opiniones comunicadas al Secretario General por los Estados Miembros sobre el estado de derecho y la justicia de transición en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. Dada la amplitud de este subtema, se facilita información al respecto a lo largo de todo el informe, de conformidad con lo dispuesto en la resolución.

II. Promoción del estado de derecho en el plano internacional

A. Codificación, desarrollo, promoción y aplicación de un marco internacional de normas y principios

6. El estado de derecho en el plano internacional es el fundamento mismo de la Carta de las Naciones Unidas. En la consecución de ese ideal, uno de los propósitos de la Organización es crear condiciones con arreglo a las cuales se respeten la justicia y las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. En mayo de 2011, el Secretario General emitió una nota de orientación sobre el enfoque de las Naciones Unidas respecto de la asistencia para la promoción del estado de derecho en el plano internacional. En la nota se enuncian los principios rectores y el marco para la promoción del estado de derecho en las relaciones entre los Estados, entre los Estados y las organizaciones internacionales y entre las organizaciones internacionales. Se señalan los principales instrumentos jurídicos que norman las actividades de la Organización. Se describe la forma en que sus principios se aplican en esferas específicas de la asistencia para la promoción del estado de derecho en el plano nacional. La nota declara que las actividades de las Naciones Unidas en la promoción del estado de derecho en el plano internacional se sustentan en el reconocimiento de que es de vital importancia contar con un sistema multilateral eficaz, en consonancia con el derecho internacional, para enfrentar los problemas y las amenazas que afectan a nuestro mundo.

7. La solución de la apatridia es una parte fundamental e integral de las iniciativas de las Naciones Unidas para fortalecer el estado de derecho. Se estima que hay 12 millones de apátridas en todo el mundo. La posesión de la nacionalidad es esencial para una participación cabal en la sociedad y el disfrute de los derechos humanos fundamentales. Son muy pocos los Estados que son partes en la Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961, y en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, que son los instrumentos jurídicos esenciales para la protección de los apátridas y la prevención y la reducción de la apatridia. Con ocasión del cincuentenario de la Convención de 1961, la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a la que la Asamblea General había confiado el mandato de determinar, prevenir y reducir la apatridia y proteger a los apátridas, ha redoblado sus esfuerzos por promover tanto la adhesión a las dos convenciones esenciales sobre la apatridia como su aplicación. La ceremonia de firma de tratados de las Naciones Unidas de 2011, organizada por la Oficina de Asuntos Jurídicos, brinda a los Estados Miembros la oportunidad de adherirse a esas convenciones o ratificarlas. Para focalizar el apoyo de la Organización a los Estados Miembros en la prevención y la reducción de la apatridia, el Secretario General emitió una nota de orientación sobre las Naciones Unidas y la apatridia en junio de 2011. En la nota se hace hincapié en que la adquisición de nacionalidad es la solución primaria para la apatridia, y se alienta a los Estados a que garanticen la igualdad entre los géneros en las leyes sobre nacionalidad y en su aplicación, a fin de prevenir la apatridia. Aunque es esencial asimismo en las actividades de prevención de conflictos y brinda apoyo al desarrollo social y económico, la solución eficaz del problema de la apatridia requiere la acción de todas las partes interesadas, incluidos los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y las comunidades afectadas.

8. Durante el período que se examina, las Naciones Unidas continuaron prestando asistencia a la elaboración y aplicación de normas y principios internacionales en el ámbito del estado de derecho. Se elaboraron nuevos principios en la esfera de la justicia penal, incluidas las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal (resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok) (resolución 65/229 de la Asamblea General, anexo). La Asamblea General celebró una reunión de alto nivel para conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y una ceremonia especial de firma de tratados, que culminó en nuevas ratificaciones, adhesiones o aceptaciones, a saber, ocho en relación con la Convención, nueve en relación con el Protocolo relativo a la trata de personas, seis en relación con el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y nueve en relación con el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. Como continuación de un proyecto piloto, la Conferencia de las Partes en la Convención estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre posibles mecanismos para examinar la aplicación de la Convención y sus protocolos. Todo mecanismo de examen que se establezca en el futuro debiera poner a los países participantes en condiciones de intercambiar conocimientos especializados y mejores prácticas en la aplicación de la Convención y facilitar la determinación de las necesidades de asistencia técnica a fin de tener la certeza de que los programas de asistencia estén mejor focalizados.

9. Entre los aspectos salientes en la esfera del desarme cabe mencionar la exitosa Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, acogida por las Naciones Unidas en mayo de 2010. En dicha Conferencia se aprobó un plan de acción de 64 puntos para dar efecto al Tratado y se pidió al Secretario General que organizara una conferencia en 2012 sobre el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva en el Oriente Medio. Otros aspectos salientes son la entrada en vigor, el 1 de agosto de

2010, de la Convención sobre Municiones en Racimo, que es esencial para contrarrestar el padecimiento generalizado que esas armas causan a la población civil, incluidos los niños. El Secretario General convocó asimismo una reunión de alto nivel en septiembre de 2010 sobre la revitalización de la labor de la Conferencia de Desarme, el único foro multilateral de negociación sobre desarme del mundo, que ha estado inactivo durante los pasados 12 años.

10. En la esfera de los acuerdos internacionales sobre inversiones y libre comercio, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) está formulando una norma jurídica sobre la transparencia en la solución de controversias, en el marco de un tratado, entre inversionistas y un Estado.

B. Cortes y tribunales internacionales e híbridos

11. La Corte Internacional de Justicia continuó contribuyendo al estado de derecho en el plano internacional mediante la recepción de nuevas causas. Actualmente la Corte tiene ante sí 14 causas contenciosas y una solicitud de opinión consultiva. En julio de 2011 dictó una providencia de medidas provisionales en virtud de la petición de interpretación del fallo de 15 junio de 1962 en la causa titulada *Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia)*. Esa causa ilustra la función que la Corte desempeña en la solución pacífica de controversias que dan lugar a tensiones entre los Estados. Entre las iniciativas de la Oficina de Asuntos Jurídicos encaminadas a fortalecer la función de la Corte cabe mencionar la de alentar a los Estados a formular declaraciones de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte en las ceremonias anuales de firma de tratados de 2010 y 2011 y un seminario en Nueva York sobre la jurisdicción contenciosa de la Corte, al que asistieron los asesores jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores, junto con el Presidente y otros miembros de la Corte.

12. Las detenciones de Ratko Mladić y Goran Hadžić son hitos en la historia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En el Tribunal Internacional para Rwanda, sin embargo, todavía hay nueve acusados prófugos. Ambos Tribunales llevaron adelante sus estrategias de conclusión, que incluyen la sensibilización de las administraciones de justicia nacionales, por ejemplo, por conducto del Proyecto de justicia para los crímenes de guerra, organizado juntamente por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. En virtud de la resolución 1966 (2010) del Consejo de Seguridad se estableció un mecanismo residual con subdivisiones en Arusha para Rwanda y en La Haya para la ex Yugoslavia, que comenzarán sus actividades el 1 de julio de 2012 y el 1 de julio de 2013, respectivamente. Este mecanismo continuará la jurisdicción y las funciones residuales esenciales de ambos tribunales, incluidos el enjuiciamiento de prófugos, la protección de los testigos, la supervisión de la aplicación de las condenas a reclusión y la gestión de los archivos. Análogamente, el Tribunal Especial de Liquidación para Sierra Leona, establecido en virtud de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, cumplirá las funciones residuales del Tribunal Especial para Sierra Leona una vez que concluya la causa contra Charles Taylor.

13. Las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya dan oportunidad a las víctimas de tener una participación amplia y sustantiva. En un estudio independiente se comprobó que la mayoría de las víctimas que habían participado en las actuaciones aparentemente estaban satisfechas con las Salas Extraordinarias y el veredicto contra Duch de julio de 2010. Actualmente se está incoando el segundo juicio contra los cuatro dirigentes máximos sobrevivientes del Khmer Rouge, a saber, Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan e Ieng Thirith. El Tribunal Especial para el Líbano, el más reciente de los tribunales patrocinados por las Naciones Unidas, transmitió a las autoridades libanesas, el 30 de junio de 2011, un acta de acusación y las órdenes de detención conexas en relación con el asesinato en 2005 del antiguo Primer Ministro Hariri y otros. Se trata de un paso importante para dar cumplimiento al singular mandato del Tribunal de enjuiciar delitos de terrorismo, tipificados como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

14. La Corte Penal Internacional, el primer tribunal penal internacional permanente, cuenta en la actualidad con 116 Estados partes. Las Naciones Unidas, que siguen brindando apoyo a la Corte, continuaron cooperando con ella mediante la prestación de apoyo logístico a sus operaciones sobre el terreno y la presentación de documentos a la Fiscalía y a los abogados defensores. La Corte completó su primer juicio en la causa contra Lubanga, y se espera que el fallo se pronuncie para finales de 2011. Tras una remisión del Consejo de Seguridad de la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, en virtud de la resolución 1970 (2011), la Fiscalía inició una investigación y la Corte expidió órdenes de detención contra Muammar Al-Qadhafi, su hijo Saif Al-Islam Al-Qadhafi y Abdullah Al-Senussi por crímenes contra la humanidad. La Fiscalía también solicitó autorización para iniciar una investigación, a raíz de la petición del Presidente Alassane Ouattara, de graves crímenes cometidos después de las elecciones en Côte d'Ivoire en noviembre de 2010. La cooperación de los Estados en relación con la ejecución de las órdenes de detención de la Corte sigue siendo problemática: de las 26 personas contra las que se han expedido órdenes de detención o de comparecencia, 10 están todavía en libertad. El año próximo la composición de la Corte se modificará debido a la elección de un tercio de sus 18 magistrados y de un nuevo Fiscal.

C. Mecanismos no judiciales

15. El envío de comisiones internacionales de investigación o de misiones de determinación de los hechos, que sean creíbles e independientes y estén sujetas a un régimen de rendición de cuentas, es un importante catalizador en la lucha contra la impunidad. Han servido para poner de relieve las violaciones de que han sido víctimas las mujeres y los niños, por ejemplo mediante la comprobación de la comisión de delitos de violencia sexual y por motivos de género durante un conflicto, delitos que muchas veces no se denuncian en grado suficiente y quedan excluidos de la aplicación de medidas de justicia y reparación. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos recibió los informes de las comisiones de investigación internacionales sobre la Jamahiriya Árabe Libia (A/HRC/17/44) y Côte d'Ivoire (A/HRC/17/48). Para asegurar que se preste la debida atención a los delitos de violencia sexual y por motivos de género, las Naciones Unidas adscribieron un experto a esta última comisión. En abril de 2011, el Grupo de Expertos del Secretario General sobre la rendición de cuentas en Sri Lanka llegó a la conclusión de que existían denuncias fiables de una amplia gama de violaciones

graves del derecho internacional cometidas por las fuerzas del Gobierno y los Tigres tamiles en las etapas finales del conflicto. En abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que enviara, con carácter urgente, una misión a la República Árabe Siria para investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y determinar los hechos y las circunstancias de esas violaciones y de los delitos cometidos (resolución S/16-1). Es preciso empeñar más esfuerzos para asegurar que esas comisiones puedan recoger la información necesaria de manera oportuna y que se dé seguimiento a sus recomendaciones.

16. Entre los mecanismos no judiciales para promover el cumplimiento de las normas y principios internacionales cabe mencionar el mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con violaciones graves contra los niños en situaciones de conflicto armado, establecido en virtud de la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad, que se aplicó en 13 países afectados por conflictos en 2010. Esta aplicación focalizada de la presión internacional se tradujo, entre otras cosas, en la liberación de 2.973 menores de los acantonamientos maoístas en Nepal y en la reunificación de 568 niños, entre ellos 201 niñas, con sus familias en Sri Lanka. Siguiendo este modelo, el Consejo de Seguridad, en su resolución 1960 (2010), pidió que se establecieran disposiciones de vigilancia, análisis y presentación de informes como parte de la respuesta de las Naciones Unidas frente a los actos de violencia sexual relacionados con conflictos. De esta manera se podrán incluir en las listas o excluir de ellas a personas sobre las que existan sospechas fundadas de que han cometido actos de violencia sexual y se facilitaran los compromisos de las partes en un conflicto de prevenir y reprimir esas violaciones.

17. Los procesos de registro de infracciones han sido útiles también para establecer una constancia de las violaciones y ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones de investigación y enjuiciamiento, como lo demuestra el proceso de registro de infracciones del ACNUDH, que documentó las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en la República Democrática del Congo entre marzo de 1993 y junio de 2003. En el informe sobre el proceso de registro se formularon opciones para establecer mecanismos de justicia de transición apropiados, que fueron seguidos recientemente por el anuncio del Gobierno sobre la creación de salas especializadas y la elaboración de un proyecto de ley para su examen por el Parlamento.

III. Enfoque de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho en el plano nacional

18. El enfoque de las Naciones Unidas para el fortalecimiento del estado de derecho implica, entre otras cosas, el fortalecimiento de la implicación nacional de las iniciativas de reforma, el apoyo a grupos nacionales interesados en la reforma, la formulación de enfoques estratégicos en consonancia con las evaluaciones en el país y la coordinación de actividades en colaboración con las partes interesadas, incluidas la sociedad civil (véase A/63/226, párrs. 17 a 21). El marco de la Organización para las actividades relacionadas con el estado de derecho comprende la redacción de proyectos de constitución, la reforma legislativa, la asistencia y las garantías electorales, el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de

justicia y seguridad, los procesos y mecanismos de la justicia de transición y las actividades con la sociedad civil.

A. Marco para el fortalecimiento del estado de derecho

1. Redacción de proyectos de constitución

19. Las constituciones o leyes supremas equivalentes son el fundamento de un Estado basado en el estado de derecho. Si se lo formula de manera adecuada e inclusiva, el proceso constituyente puede desempeñar un papel importante en las transiciones políticas pacíficas y en la consolidación de la paz después de un conflicto, así como en la prevención de conflictos mediante la garantía de la igualdad de derechos para los grupos marginados. En el transcurso del pasado año, las Naciones Unidas prestaron apoyo en relación con cuestiones constitucionales en Bhután, Indonesia, la Jamahiriya Árabe Libia, Kirguistán, Madagascar, Maldivas, Nepal, Somalia, Sudán del Sur y Zimbabwe. En Sudán del Sur, ONU-Mujeres y la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS) aseguraron la participación de dirigentes femeninas en la redacción de la constitución de transición de Sudán del Sur, y se asesoró al Gobierno sobre la inclusión de fundamentos sólidos para ayudar a prevenir y combatir la violencia sexual. En agosto de 2010, el proceso de revisión constitucional en Kenya, con el apoyo de las Naciones Unidas, culminó en la promulgación de la nueva Constitución de Kenya.

20. De resultados de la transformación política en el Oriente Medio y África Septentrional, la reforma constitucional ha pasado a ser una prioridad para muchas naciones. Para atender a las solicitudes de asistencia de una manera amplia y coherente, la Organización tiene que sacar provecho, de manera más sistemática, de las lecciones aprendidas y de sus capacidades internas, tales como el equipo de reserva de expertos en mediación en el Departamento de Asuntos Políticos, y el concurso de especialistas externos.

2. El ordenamiento jurídico nacional

21. Las Naciones Unidas siguen prestando asistencia a los Estados para que incorporen sus obligaciones jurídicas internacionales a la legislación nacional y sienten las bases jurídicas para la gobernanza, la supervisión y la rendición de cuentas de las instituciones de la justicia y la seguridad.

22. Entre los logros en la esfera de la justicia penal, cabe mencionar la asistencia al Ministerio de Justicia de la República Centroafricana en la redacción de un nuevo código penal y un nuevo código de procedimiento en lo penal. En Nepal, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó la redacción del código penal, el código de procedimiento en lo penal, el código civil y el código de procedimiento en lo civil.

23. En Malawi, Rwanda, Liberia, Turkmenistán, Mauritania, el Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Túnez, Chile y Colombia se sancionaron o reformaron leyes que incorporan los principios de la justicia para los niños. Mediante actividades de promoción selectiva, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) logró un aumento de la edad mínima de responsabilidad penal en Georgia, Kazajstán y Bolivia. Un documento de orientación reciente del UNICEF

sobre la reforma legislativa de la justicia de menores debiera servir para encaminar esas actividades en el futuro.

24. Un estudio conjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la trata de personas en África Occidental plasmó en la formulación de directrices para la sanción de legislación nacional en consonancia con las normas y principios internacionales y regionales de derechos humanos. Para reprimir contra la piratería, la Oficina de Asuntos Jurídicos, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Organización Marítima Internacional, elaboró una guía para la legislación nacional sobre la piratería de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros instrumentos (véase www.un.org/Depts/los/piracy/piracy.htm).

3. Instituciones de justicia, gobernanza, seguridad y derechos humanos

25. La asistencia de las Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho fortalece la capacidad institucional necesaria para impartir vigencia y valor a las garantías constitucionales, leyes, políticas y reglamentos. Por ejemplo, para que los ciudadanos tengan confianza en el estado de derecho, los recursos por irregularidades electorales se deben tramitar de manera justa, imparcial y expeditiva de acuerdo con la legislación nacional. Las Naciones Unidas han prestado apoyo para fortalecer los mecanismos para dirimir los litigios por irregularidades electorales, en Burundi, Haití, Kirguistán y el Iraq, entre otros países.

26. La experiencia demuestra que las necesidades de la policía, la administración de justicia y los establecimientos penitenciarios se deben encarar de manera coordinada para mejorar la justicia y la seguridad. Mediante enfoques innovadores se trata de mejorar el desempeño de las instituciones de la administración de justicia. Por ejemplo, el establecimiento de células de apoyo a la fiscalía en la República Democrática del Congo facilita la investigación y el enjuiciamiento de delitos penales graves. En Liberia, el establecimiento de un centro para la justicia y la seguridad podría servir de modelo para actividades en otros contextos. En Burundi, las mentorías y otras actividades de creación de capacidad de las Naciones Unidas, incluido el establecimiento de un grupo de secretarios y magistrados judiciales formados en la administración y gestión de tribunales, produjo una notable mejora de la transparencia y el desempeño en las actuaciones judiciales. En Sierra Leona, los tribunales itinerantes financiados con recursos del PNUD llevaron la presencia de magistrados judiciales a tres pueblos nuevos en la Provincia Meridional. En Timor-Leste, el PNUD apoyó la creación de un cargo de inspector judicial para ayudar a asegurar la calidad de los servicios; por otra parte, el establecimiento de un nuevo sistema integrado de gestión de causas debería mejorar la eficiencia en la tramitación de las causas.

27. Reconociendo el potencial de los mecanismos oficiosos para fortalecer el acceso a la justicia, la Organización colaboró en actividades relacionadas con los sistemas de justicia oficiosas, por ejemplo, en el Afganistán, Bangladesh, Nepal, el territorio palestino ocupado, Timor-Leste, Sudán del Sur, Somalia e Indonesia. El PNUD, el UNICEF y ONU-Mujeres dieron a conocer conjuntamente un estudio exhaustivo a fin de determinar los puntos de partida para las actividades con los sistemas de justicia oficiosas, con miras a fortalecer la protección y la observancia

de los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y los niños, en la programación futura. En Uganda y Sudán del Sur se dio apoyo a la codificación del derecho consuetudinario, con el fin, entre otras cosas, de garantizar la protección de los derechos de propiedad de la mujer en el matrimonio y la sucesión y atender mejor a los problemas de la violencia sexual y por motivos de género. En Darfur, Indonesia y el Afganistán se hizo hincapié en sensibilizar a los dirigentes religiosos y a los responsables de la administración de justicia oficiosa sobre cuestiones como los derechos de la mujer y la relación entre la justicia oficial y oficiosa. En Somalia, un sistema de remisión de litigios apoyado con recursos del PNUD en Somalilandia permitió que los ancianos de los clanes pudieran remitir causas por violencia sexual y por motivos de género a los tribunales oficiales, de resultas de lo cual aumento en 44% el número de causas de esa índole de las que conocieron los tribunales oficiales en 2010.

28. La ONUDD y el UNICEF siguieron facilitando la transición conceptual y programática de la justicia de menores a la esfera más amplia de la justicia para los niños. Las actividades de creación de capacidad del UNICEF se centraron en la policía en más de 30 países y en los jueces en 25 países. En 2010, aproximadamente 45 países de todas las regiones del mundo tomaron medidas concretas para aplicar las directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos relacionados con los niños víctimas y testigos de delitos. Entre los avances notables cabe mencionar la repetición de los comités de justicia juvenil de Mongolia en cinco provincias y el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores sociales, la policía y los tribunales en Kiribati para atender a menores infractores. En el Afganistán, la UNODD ayudó a establecer un sistema independiente de justicia de menores. Para promover la “desjudicialización” de los menores y las medidas sustitutivas de detención, el UNICEF publicó en línea una guía que suministra tanto una orientación fácil y comprensible como herramientas prácticas. Los sistemas de desjudicialización de menores y los programas de medidas sustitutivas se están aplicando en más de 20 países, con el resultado, por ejemplo, de que alrededor de 1.600 niños se beneficiaron de programas de desjudicialización de menores en el Sudán en 2010.

29. El fortalecimiento de la capacidad de la policía para combatir la violencia sexual fue una importante esfera de actividad durante el pasado año. ONU-Mujeres y la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur impartieron formación a 500 agentes de policía femeninas en el Sudán en técnicas de investigación de incidentes de violencia sexual. El apoyo de ONU-Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el UNICEF dio como resultado la inclusión de contenidos sobre género, violencia sexual y por motivos de género y protección del niño en el plan de estudios de la policía nacional en Uganda. La policía especial de protección del niño y la mujer en la República Democrática del Congo recibió asistencia mediante la construcción y el equipamiento de oficinas. Un estudio y análisis de los efectos de los programas de seguridad cívica en Nicaragua, apoyado con recursos del PNUD, culminó en diversas reformas, entre ellas la creación de unidades comunitarias móviles en la oficina de la mujer de la policía nacional para atender a las cuestiones de género y violencia familiar.

30. La Organización ha seguido apoyando y promoviendo la priorización de las instituciones penitenciarias, incluso mediante la asistencia para las infraestructuras, la creación de capacidad y un mayor despliegue de oficiales penitenciarios en las operaciones de paz. En reconocimiento de esos esfuerzos, en 2010 se otorgó al

Servicio Penitenciario de Sudán del Sur y a la UNMIS el premio a la gestión y formación de personal de la Asociación Internacional de Instituciones Penitenciarias. En Haití se creó una base de datos penitenciarios para facilitar la identificación de detenidos prófugos. En la República Democrática del Congo y en Sierra Leona se impartió formación a oficiales penitenciarios en derechos humanos básicos y gestión de detenidos. En Burundi se procedió a la rehabilitación y el equipamiento de siete cárceles y se formuló un plan de seguridad penitenciaria.

31. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) continúa colaborando con sus homólogos guatemaltecos para enjuiciar los delitos de violencia cometidos por elementos de la delincuencia organizada. A pesar de los problemas operacionales y de seguridad, hay un consenso en el sentido de que la Comisión ha podido fortalecer a las instituciones de la justicia en Guatemala mediante la instrucción de varias causas de gran importancia, las iniciativas de verificación y otras modalidades de asistencia técnica. En consecuencia, la CICIG está atrayendo un creciente interés internacional, especialmente en Centroamérica.

4. Justicia de transición

32. Durante el pasado año, las Naciones Unidas siguieron prestando apoyo a los procesos de justicia de transición en el Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Colombia, Côte d'Ivoire, Guatemala, las Islas Salomón, Kenya, Liberia, Nepal, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Togo y Uganda. Se prevé una expansión de estas actividades a raíz de la transformación política sobrevinida en el Oriente Medio y África Septentrional. Para que las transiciones sean sostenibles se precisarán mecanismos destinados a poner fin a la impunidad y garantizar la responsabilización penal, la verdad, las reparaciones y otras garantías de que esos hechos no se repetirán.

33. Las consultas a nivel nacional son esenciales para garantizar que los mecanismos de la justicia de transición reflejen las necesidades específicas de las comunidades afectadas. En Burundi, el Presidente hizo suyo el informe final de las consultas nacionales, con el apoyo del ACNUDH y la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi (BNUB), y se encomendó a un comité técnico que estableciera los parámetros para establecer una comisión de la verdad y la reconciliación. Un fondo colectivo administrado por el PNUD asegurará que se coordine el apoyo internacional y se mancomunen los recursos. En Nepal, el ACNUDH facilitó la participación de las víctimas en los diálogos sobre la justicia de transición y celebró consultas sobre proyectos de ley relativos a los procesos para la averiguación de la verdad, que se habían formulado con la mira de atraer la participación nacional de los grupos de víctimas. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona dio apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona y persuadió a las autoridades locales de que aplicaran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire apoyó a la labor de la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación, establecida por el Gobierno de Côte d'Ivoire para promover la reconciliación nacional y la cohesión social.

34. Si bien en Colombia, Guatemala, Nepal, Sierra Leona, Timor-Leste y Uganda han prosperado las iniciativas para que se concedan indemnizaciones a los sobrevivientes de violaciones de los derechos humanos, es preciso prestar una mayor atención para garantizar su aplicación. La asistencia técnica se centró en la

elaboración y ejecución de programas de resarcimiento y en el apoyo a las víctimas y la sociedad civil en las deliberaciones sobre el resarcimiento. En la República Democrática del Congo, el ACNUDH y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) ayudan a las autoridades nacionales y a otras partes interesadas a formular opciones para el resarcimiento de las víctimas de la violencia sexual. En Uganda, se presentaron al Gobierno, los donantes y la sociedad civil los resultados de la investigación de campo especializada sobre género y resarcimiento emprendida por el ACNUDH y la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, con el apoyo de ONU-Mujeres. En Colombia, la participación de ONU-Mujeres en los debates legislativos aseguró que se incorporara una perspectiva de género a la Ley de víctimas y restitución de tierras, de resultados de lo cual, por ejemplo, se incluyó entre los beneficiarios de la ley a los niños nacidos como consecuencia de una violación. Si bien asegurar una reparación adecuada para las víctimas de violaciones relacionadas con conflictos es una obligación del Estado, conforme al derecho internacional, las concatenaciones entre las reparaciones y los programas de desarrollo pueden fortalecer la sostenibilidad y el potencial transformador del resarcimiento, sobre todo en lo que respecta a las mujeres.

35. El establecimiento de programas de protección de víctimas y testigos de acuerdo con las normas y principios internacionales obtuvo apoyo en la Argentina, Nepal, Kenya, la República Unida de Tanzania, Rwanda, y Togo. En un seminario de expertos de alto nivel del ACNUR y la ONUDD en Uganda, organizado en cooperación con la Comisión de Reforma Legislativa de Uganda, y en un seminario regional para Asia Meridional en Nepal, hubo un intercambio de mejores prácticas en ese ámbito. También se organizó un seminario para la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación en Togo. La capacitación para el poder judicial y los organismos encargados de hacer aplicar la ley en Rwanda en materia de protección y gestión de testigos tiene por objeto desarrollar la capacidad nacional para recibir las causas remitidas por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda.

36. Las opiniones y experiencias de los niños aportan contribuciones singulares e importantes a los procesos de la justicia de transición. Los agentes de la protección de menores, por lo tanto, abogan en pro de procedimientos de protección y salvaguardias jurídicas que permitan que los niños participen en todos los aspectos de la justicia de transición. Los principios esenciales relativos a los niños y la justicia de transición (véase A/65/219, párrs. 47 a 50) que sirven de fundamento general para la participación de los niños, aportan directrices específicas para los mecanismos judiciales, las comisiones de la verdad y los mecanismos para la averiguación de la verdad, los procesos judiciales locales, tradicionales y restitutivos, el resarcimiento de los niños y la reforma institucional. El informe del UNICEF titulado *Children and Truth Commissions* ofrece directrices para este tipo de iniciativas en que los niños son, a la vez, víctimas y testigos en causas relacionadas con delitos graves.

5. Empoderamiento de las personas y de la sociedad civil

37. La colaboración con el público y la sociedad civil es un componente importante del enfoque de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento del estado de derecho. La Organización promueve la divulgación de información sobre derechos para sensibilizar al público y propiciar la cultura del estado de derecho. En Burundi, por ejemplo, la BNUB brindó asistencia para traducir el nuevo código

penal al kirundi y aseguró su amplia distribución. En Georgia, las peticiones de asistencia letrada al Servicio de Asistencia Letrada aumentaron mucho, especialmente entre los desplazados internos y las minorías, a raíz de una campaña de sensibilización legal patrocinada por el PNUD.

38. En los programas de las Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho se sigue atribuyendo prioridad a facilitar un amplio acceso a la justicia para los grupos vulnerables, y se están realizando actividades en más de 22 países en todo el mundo. Por ejemplo, en Somalia, el PNUD ayudó a las víctimas de violaciones a interponer recursos ante la justicia; anteriormente, la autoridad de los ancianos de los clanes frustraba esas acciones. En el Afganistán, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán ha fortalecido la capacidad del Ministerio de Justicia para ofrecer asistencia letrada.

39. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante para ayudar a superar las barreras que muchas veces se interponen entre los ciudadanos, especialmente los más marginados y vulnerables, y las instituciones del Estado. En Indonesia, el PNUD apoya a las organizaciones de base de la sociedad civil mediante la sensibilización jurídica y los servicios de asistencia parajurídica en tres provincias. En colaboración con la Comisión Huairou, se han establecido vínculos entre las organizaciones femeninas populares en seis países africanos, con la mira de reforzar su capacidad para vigilar y proteger los derechos de sucesión y propiedad de la tierra de las mujeres en el contexto de los sistemas de justicia oficiosa. Con financiación del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, las iniciativas relacionadas con la sociedad civil ayudaron a los grupos marginados en el Gabón y Guatemala a obtener documentos de identidad y ampliaron la participación en los procesos de reforma constitucional en Bolivia, Ghana y Nepal.

B. Medidas para hacer frente a los desafíos críticos en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos

40. Los conflictos socavan el estado de derecho, incluso porque reducen la capacidad de las instituciones de justicia y seguridad. Esta situación, que es un factor importante en la perpetuación de la impunidad, fomenta la inestabilidad y demora la recuperación. Las instituciones carecen, muchas veces, de infraestructura básica, sistemas administrativos, recursos financieros, recursos humanos calificados y regímenes de fiscalización y gobierno. Los profesionales de la justicia y la seguridad pueden ser corrompidos o ser objeto de amenazas, circunstancias que obran en detrimento de la independencia y la integridad institucionales. La impunidad de los perpetradores de violaciones de los derechos humanos menoscaba la confianza en los dirigentes y las instituciones gubernamentales y, en consecuencia, impide la creación de una cultura de respeto del estado de derecho. Las situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, pues, son uno de los ejes principales de la asistencia de las Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho, y presentan problemas y prioridades especiales.

1. El logro de resultados rápidos y visibles

41. La asistencia de las Naciones Unidas se encamina a restaurar gradualmente la confianza en el estado de derecho, especialmente entre los grupos de personas desplazadas y vulnerables, que muchas veces son los más afectados por un

conflicto. A ese fin, las Naciones Unidas tratan de lograr resultados rápidos y visibles en la atención de las necesidades inmediatas de amparo jurídico y en la ampliación del acceso a los servicios de justicia y seguridad, al tiempo que se sientan las bases para las reformas y el fortalecimiento institucional a largo plazo. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, las Naciones Unidas han prestado apoyo a la instrucción de diversas causas notorias por actos de violencia sexual y por motivos de género, y simultáneamente han colaborado con las autoridades nacionales para echar las bases de una reforma institucional a largo plazo. Un paso importante ha sido el establecimiento de un Servicio Permanente sobre Justicia e Instituciones Penitenciarias en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que ayudará a poner en marcha componentes de justicia o establecimientos penitenciarios y/o reforzar esos componentes en las operaciones actualmente sobre el terreno.

2. La formulación de enfoques sectoriales

42. El apoyo técnico y financiero desigual y carente de coordinación para el sector del estado de derecho puede dar lugar a una disfunción sistémica. Por ejemplo, la concentración de la asistencia en el sector de la policía puede sobrecargar a la justicia y a los establecimientos penitenciarios, a medida que las detenciones se traducen en mayor número de detenciones y en una privación más prolongada de la libertad antes del juicio. En consecuencia, muchas veces se produce una gran acumulación de causas en los tribunales y el hacinamiento en las cárceles se traduce en un empeoramiento de las condiciones de higiene, motines y fugas, situaciones que plantean serios problemas de seguridad.

43. Se debiera aplicar, toda vez que sea posible, un enfoque sectorial, y se deben enunciar claramente las prioridades para determinar la secuencia de las intervenciones relacionadas con el estado de derecho. En Guinea-Bissau, las Naciones Unidas han fortalecido los vínculos entre las autoridades policiales, el ministerio público y la administración de justicia. Este enfoque facilita la implicación nacional y la coherencia, pues conjuga la acción de las instituciones de la justicia y la seguridad en el contexto de un programa general de reforma, realizando así la sostenibilidad de las mejoras. En Uganda, se atribuyen al enfoque sectorial las mejoras mensurables en el sector de los establecimientos penitenciarios. En cambio, la falta de un enfoque sectorial, por ejemplo, en Liberia se ha traducido en una asignación desigual de recursos en toda la cadena penal, y ha dejado sin atender las necesidades de los establecimientos penitenciarios.

3. El fortalecimiento de la voluntad política y la implicación nacional

44. La voluntad política es un elemento esencial para garantizar el entorno propicio y el apoyo sostenible que requieren las reformas para promover el estado de derecho. Sin embargo, en muchas situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, las iniciativas encaminadas a fortalecer el estado de derecho suscitan indiferencia o sospechas. Ante necesidades competitivas y desafíos formidables, los gobiernos rara vez atribuyen máxima prioridad al estado de derecho. La promoción sostenida y sistemática por parte de los líderes, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el diálogo bilateral de alto nivel con altos funcionarios de gobierno son elementos esenciales para asegurar que se preste la debida atención al estado de derecho y se le reconozca un espacio político suficiente para que pueda arraigar. Después de una sensibilización y apoyo concentrados, el

nuevo Gobierno de Haití ha declarado que el estado de derecho es una de sus cuatro prioridades máximas. Con respecto a la violencia sexual en la República Democrática del Congo, la participación de la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos, junto con un diálogo político y una cooperación mayores entre la MONUSCO, el PNUD y el Gobierno, ha llevado a un creciente número de condenas penales pronunciadas contra miembros de las fuerzas de seguridad.

45. Es preciso alentar a las autoridades nacionales y a la sociedad civil a asumir una función ampliada en la formulación y ejecución de programas de promoción del estado de derecho a fin de reforzar su interés en el éxito de esos programas. Los gobiernos nacionales pueden poner de manifiesto su compromiso uniéndose a los donantes para invertir recursos financieros en los programas de promoción del estado de derecho. En Kenya, el Gobierno es la principal fuente de financiación de un programa en el sector.

4. Actividades para asegurar la rendición de cuentas en el plano nacional por los crímenes internacionales

46. El derecho internacional exige que los Estados desarrollen y refuercen sus capacidades nacionales para investigar y enjuiciar crímenes internacionales. Los Estados partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional han reconocido tanto la conveniencia de que los Estados se presten ayuda mutua para fortalecer esa capacidad interna como la necesidad de que las organizaciones internacionales respalden esas actividades¹. Las Naciones Unidas han realizado actividades para crear la capacidad de enjuiciamiento necesaria en varias jurisdicciones, incluidas Bosnia y Herzegovina, Colombia, Kenya, Kosovo, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, el Sudán, Timor-Leste y Uganda.

47. Actualmente no hay, sin embargo, una forma sistemática para propiciar la voluntad política necesaria para que los Estados incorporen el Estatuto de Roma a sus ordenamientos internos y para poner en contacto a los Estados que necesitan ayuda con los actores internacionales dispuestos a financiar o prestar dicha asistencia. Para comenzar a superar esa carencia, las Naciones Unidas apoyaron un retiro, organizado por el Centro Internacional para la Justicia de Transición, a fin de iniciar las deliberaciones entre los actores pertinentes, incluidas las Naciones Unidas, de las comunidades de la justicia penal internacional, el fomento del desarrollo y la profesión de la abogacía. El próximo paso será forjar vínculos más estrechos entre los asociados para el desarrollo y las partes interesadas nacionales, con miras a elaborar un plan de acción para la creación de capacidad, que se vincule a las iniciativas existentes, como el conjunto de herramientas preparado por la Open Society Justice Initiative, en colaboración con la Unión Europea.

5. El fortalecimiento de las concatenaciones entre el estado de derecho y la recuperación económica

48. Gran parte de las actividades de las Naciones Unidas en pro del estado de derecho en situaciones de conflicto y después de conflictos se centra en los problemas de seguridad iniciales. Sin embargo, el estado de derecho también desempeña un papel importante en la recuperación económica. La confianza mutua

¹ Resolución RC/Res.1, aprobada por la Conferencia de Revisión el 8 de junio de 2010.

y la confianza de los inversionistas se ven facilitadas por el funcionamiento de las instituciones de justicia y seguridad, así como por un sólido ordenamiento legislativo, sustentado en normas y principios internacionales, incluido el derecho mercantil internacional (véase la resolución 65/21 de la Asamblea General). Las soluciones de problemas complejos relacionados con la tenencia de tierras o la extracción de recursos naturales requieren, muchas veces, una reforma legislativa y la resolución de litigios jurídicos. La detención preventiva excesiva, especialmente frecuente en las situaciones posteriores a conflictos, puede tener importantes consecuencias socioeconómicas para las personas físicas, las familias y las comunidades y frustrar los esfuerzos nacionales para lograr los objetivos de desarrollo².

49. La Organización, pues, procura fortalecer de manera más sistemática los vínculos entre el estado de derecho y la recuperación económica en las situaciones posteriores a conflictos. Por ejemplo, el plan de aplicación de la política de recuperación rápida del PNUD en el Sudán tuvo como pilares principales de la programación para la recuperación los temas del “estado de derecho y acceso a la justicia” y los “medios de subsistencia”. En la República Democrática del Congo, el proyecto del PNUD para la seguridad y la reintegración socioeconómica de las sobrevivientes de la violencia sexual y por motivos de género en Kivu del Norte y Kivu del Sur está formulado para conjugar los medios de subsistencia con el acceso a la justicia. En el Iraq, la secretaría de la CNUDMI cooperó con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) a fin de dar apoyo a la redacción de la nueva legislación sobre la contratación pública y la resolución alternativa de conflictos en el contexto de un programa más amplio de desarrollo del sector privado. Esas iniciativas prometedoras que vinculan el estado de derecho con la recuperación económica y el desarrollo humano se deben afianzar y repetir, según proceda.

IV. Coordinación y coherencia generales

A. Labor de orientación y ejecución del plan estratégico conjunto

50. En consonancia con el plan estratégico conjunto para 2009-2011 del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, se continúan las actividades encaminadas a reforzar la coherencia, calidad y coordinación de las políticas y la orientación en la promoción del estado de derecho. La revisión anual de la documentación actual y proyectada indica que se han hecho progresos notables en la elaboración de materiales de orientación. El afianzamiento de las asociaciones podría armonizar mejor los enfoques normativos, especialmente en esferas en las cuales muchas entidades, individual o colectivamente, están elaborando materiales de orientación como la justicia de transición, la violencia sexual y por motivos de género y la detención preventiva y medidas sustitutivas. Otras esferas en las cuales la elaboración actual o prevista de materiales de orientación es exigua, tales como la actividad legislativa, la reforma legislativa y la justicia social y económica bien pueden requerir una mayor atención. Un estudio de las necesidades de orientación

² Open Society Foundations y PNUD, *The Socioeconomic Impact of Pretrial Detention*, 2011, se puede consultar en www.soros.org.

sobre el terreno ayudará a determinar las prioridades y a asegurar que la elaboración de materiales de orientación esté en armonía con las necesidades de los profesionales.

51. El sistema complementario del Grupo para la aprobación de los materiales de orientación de interés para todo el sistema se ha usado para aprobar los indicadores de las Naciones Unidas para el estado de derecho y el Manual del instructor para el programa de capacitación del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz sobre el estado de derecho para oficiales de asuntos judiciales en las operaciones de mantenimiento de la paz. Este proceso ayudará a maximizar los conocimientos y las mejores prácticas en todo el sistema de las Naciones Unidas, armonizará los enfoques y minimizará la duplicación de esfuerzos.

52. Recientemente el Grupo puso a prueba el programa de capacitación unificada de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho juntamente con la Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas en Turín. Este programa a nivel de todo el sistema, que complementa módulos existentes más focalizados, asegurará que los funcionarios competentes se familiaricen con el enfoque unificado de la Organización sobre el estado de derecho y lo promuevan en sus relaciones con los Estados Miembros. El siguiente paso consiste en institucionalizar la capacitación, para lo cual se necesitarán recursos adicionales y el compromiso permanente de todos los asociados.

53. El segundo objetivo del plan estratégico conjunto es aplicar el enfoque común de la Organización a la asistencia para la promoción del estado de derecho en el plano nacional en Nepal y Liberia. Además de la adición de Liberia al programa de la Comisión de Consolidación de la Paz en septiembre de 2010, la programación relativa al estado de derecho se está reforzando y armonizando en el contexto del plan prioritario de consolidación de la paz, que se centra en los tres pilares de la justicia, la seguridad y la reconciliación nacional. Con el apoyo conjunto de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) y el PNUD, el Gobierno de Liberia presentó un programa de consolidación de la paz, basado en el plan prioritario de consolidación de la paz, para atender las necesidades apremiantes del país en materia de justicia, seguridad y reconciliación nacional. En Nepal, después de una catalogación inicial de las evaluaciones internacionales, las estrategias gubernamentales y la asistencia en curso, una actividad conjunta de los donantes y las Naciones Unidas está determinando las opciones para mejorar el apoyo internacional a mediano plazo.

54. Conforme lo previsto en el tercer objetivo principal del plan estratégico conjunto del grupo, en el sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General se celebrará una reunión de alto nivel durante la serie de sesiones de alto nivel sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (resolución 65/32 de la Asamblea General, párr. 13). Las modalidades de dicha reunión se concretarán durante el sexagésimo sexto período de sesiones. A fin de centrar la atención de los Estados Miembros con anterioridad a la reunión de alto nivel, el Presidente de la Asamblea General convocó a un debate temático oficioso sobre el estado de derecho y los problemas mundiales el 11 de abril de 2011. El Secretario General está dispuesto a apoyar a los Estados Miembros en la preparación del documento de la reunión de alto nivel que asegure que el estado de derecho siga siendo una de las prioridades en el programa de los Estados Miembros.

B. Extensión a todo el sistema

55. La labor de coordinación y coherencia sigue teniendo como una de sus prioridades la colaboración a nivel de todo el sistema con las entidades de las Naciones Unidas (ahora más de 40) que participan en las actividades de promoción del estado de derecho. Las entidades del sistema de las Naciones Unidas participaron en la tercera reunión anual a nivel de todo el sistema para examinar las formas de fortalecer la programación conjunta en relación con el estado de derecho. Los participantes examinaron las herramientas y prácticas actuales para determinar el avance del desarrollo del estado de derecho y los efectos de la asistencia. Examinaron el informe de ONU-Mujeres titulado *El progreso de las mujeres en el mundo: en busca de la justicia* con el fin de explorar la aplicación de sus recomendaciones a nivel de todo el sistema.

56. El sitio web de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho y el archivo de documentos (www.unrol.org) sigue siendo el portal de acceso central a la información sobre las actividades de las Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho y pone a disposición del personal y del público más de 900 documentos, junto con una gama de recursos de conocimiento, noticias y artículos sobre las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el estado de derecho.

57. Una prioridad importante es la cooperación entre las Naciones Unidas y el Banco Mundial en la promoción del estado de derecho. Los actores del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de la promoción del estado de derecho han hecho contribuciones importantes al *Informe sobre el desarrollo mundial* de 2011, del Banco Mundial, que está dedicado a los temas del conflicto, la seguridad y el desarrollo. En el informe se destaca la importancia de hacer justicia, establecer un entorno de seguridad y crear puestos de trabajo para quebrar los ciclos recurrentes de violencia que impiden el desarrollo.

58. En el informe se señala también la importancia de abordar los temas de la justicia social y económica a fin de prevenir conflictos y garantizar el desarrollo a largo plazo. Para las Naciones Unidas, esta es una invitación a participar de manera más coherente en estas actividades. En el próximo informe del Secretario General sobre el empoderamiento jurídico y la erradicación de la pobreza, solicitado por la Asamblea General en su resolución 64/215, se debieran examinar más a fondo el importante nexo entre el estado de derecho, el acceso a la justicia y la reducción de la pobreza y se debieran señalar los enfoques prometedores en esa esfera.

C. Participación estratégica conjunta en el plano nacional

59. Las asociaciones de las Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho se han seguido afianzando sobre el terreno, gracias al consenso de que la programación conjunta es una forma eficaz de aprovechar las ventajas comparativas de los actores intervinientes. La colaboración no se ha conformado a un patrón único, y ello ha brindado una mayor flexibilidad a los actores nacionales e internacionales. Para profundizar la cooperación, sin embargo, será preciso superar obstáculos institucionales y crear incentivos para la programación conjunta a nivel de todo el sistema.

60. Durante el pasado año, las oficinas del PNUD en los países y las misiones de mantenimiento de la paz han ampliado su programación conjunta, tanto en número

como en volumen, con nuevas iniciativas en Haití, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y el Chad. Por ejemplo, el PNUD y la policía de las Naciones Unidas han ampliado su cooperación en la capacitación de la policía nacional en el distrito de Ituri de la República Democrática del Congo. En el proceso de la reducción de la MINURCAT, la estrategia conjunta de traspaso se sustenta en los logros colectivos de la Misión y el PNUD en el ámbito del fortalecimiento del acceso a la justicia. Actualmente se está ampliando la colaboración entre el PNUD y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en la promoción del estado de derecho, por ejemplo, mediante un programa conjunto sobre policía en Timor-Leste para facilitar la transición después del cierre de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste en 2012. En Liberia, la UNMIL y el PNUD están armonizando el apoyo a la Policía Nacional de Liberia, la Dirección de Cárceles y Rehabilitación y la Dirección de Inmigración y Naturalización, en el marco de una conducción nacional.

61. En Burundi, se reforzaron los efectos y la coherencia mediante la integración del personal del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el ACNUDH y el PNUD en una dependencia conjunta para la justicia, y sus intervenciones se consolidaron en un solo programa de derechos humanos y justicia. La capacitación focalizada y un proyecto piloto sobre administración de tribunales en cuatro jurisdicciones se han traducido en un rápido aumento del desempeño judicial en los tribunales del proyecto piloto, considerado ahora los más elevados del país, y los asociados bilaterales han decidido repetir el proyecto en otras cuatro jurisdicciones. El PNUD y ONU-Mujeres han continuado su experimento de programación conjunta en el acceso de las mujeres a la justicia en situaciones posteriores a conflictos en Nepal, Colombia y Uganda, en estrecha colaboración con el ACNUDH en cuestiones de género y resarcimiento.

62. La creciente sensibilización sobre los efectos de los delitos transnacionales en la justicia y la seguridad afianza y refina el enfoque de la programación conjunta a nivel regional. En la Iniciativa de la Costa de África Occidental, la UNOWA, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la ONUDD y la Organización Internacional de Policía Criminal están realizando actividades conjuntas de creación de capacidad para el cumplimiento de la ley y la reforma de la justicia penal en Guinea-Bissau, Sierra Leona, Cote d'Ivoire y Liberia en apoyo del plan de acción regional de la CEDEAO. En tres de estos países se establecieron dependencias para combatir la delincuencia transnacional. Cada vez más, la ONUDD formula sus programas regionales en la forma de plataformas de acción común con los asociados nacionales, regionales y multilaterales. El establecimiento de un nuevo grupo de tareas entre organismos, copresidido por el Departamento de Asuntos Políticos y la ONUDD, refuerza la respuesta del sistema de las Naciones Unidas frente a la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de estupefacientes. Para velar por la coherencia, el grupo de tareas informará periódicamente al Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho de sus iniciativas relacionadas con el estado de derecho.

63. Como ejemplo de una respuesta armonizada frente a la violencia sexual en los conflictos cabe mencionar al equipo de expertos sobre el estado de derecho sobre la cuestión de la violencia sexual en los conflictos, establecido en virtud de la resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad. Compuesto de un jefe de equipo basado en la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos y representantes del Departamento de Operaciones

de Mantenimiento de la Paz, el ACNUDH y el PNUD, el equipo, por ejemplo, ha facilitado la elaboración de programas en la República Democrática del Congo para impartir capacitación a las fuerzas armadas, incorporar expertos sobre la violencia sexual en las células de apoyo a la fiscalía y desplegar magistradas en la parte oriental del país.

D. Medición de la eficacia y evaluación de los efectos

64. Las Naciones Unidas deben basar su asistencia para la promoción del estado de derecho en evaluaciones exhaustivas, parámetros de referencia básicos y una actividad permanente de vigilancia y evaluación. La medición de la eficacia de la asistencia ampliará el reconocimiento de los métodos satisfactorios y alentará nuevos enfoques para mejorar los resultados.

65. La Organización ha hecho progresos en la elaboración de herramientas para ayudar a los gobiernos nacionales a recoger los datos necesarios para orientar las iniciativas de reforma. Lanzados oficialmente en julio de 2011, los indicadores de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho, elaborados conjuntamente por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el ACNUR, son una herramienta para efectuar el seguimiento de los cambios en el desempeño y las características de las instituciones nacionales de justicia penal. Como lo demuestran los proyectos pilotos en Haití y Liberia, los gobiernos nacionales pueden desempeñar un papel directriz en la aplicación de esta herramienta. Se espera que los gobiernos que adopten los indicadores los sigan utilizando como mecanismo de supervisión permanente. La ONUDD y el UNICEF continuaron colaborando con los países para elaborar sistemas de reunión de datos sobre la justicia de menores con arreglo al Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores. Entre otras cosas, los indicadores ayudaron a determinar los parámetros de referencia básicos de la reforma de la justicia de menores en Guinea-Bissau y elaborar una base de datos unificada sobre justicia de menores en la República Árabe Siria.

66. Sobre la base de esas experiencias, la Organización está empeñada en mejorar su conocimiento de cómo y cuándo integrar las mediciones de los progresos en las intervenciones relacionadas con el estado de derecho, como lo ilustra el actual proyecto del PNUD para redactar una guía del usuario para la medición de la justicia. Es preciso tratar de establecer mecanismos comunes de cuantificación de los efectos en estrecha colaboración con los Estados Miembros. Solo si llevamos a cabo nuestra acción con referencia a una serie común de objetivos e indicadores, que ilustren el progreso conjunto en el cumplimiento de los mandatos y los hitos operacionales, podremos realmente decir que actuamos de consuno. En el ámbito de la justicia de menores, el reciente establecimiento de un Grupo de referencia entre organismos para el seguimiento y la evaluación de la protección de los niños es una medida prometedora hacia la coordinación de iniciativas de seguimiento y evaluación entre los asociados en la protección de los niños y a nivel de esferas temáticas. Estas iniciativas se deben inspirar en la promoción del estado de derecho y se deben adoptar de manera más general al ámbito del estado de derecho a fin de reforzar la rendición de cuentas y mejorar la asistencia prestada a los Estados Miembros.

E. Fortalecimiento del estado de derecho en la Organización

67. El sistema de administración de justicia ha continuado su cometido esencial de salvaguardar un régimen de estado de derecho entre la Organización y sus funcionarios, que ahora tienen acceso a un sistema judicial profesionalizado de dos instancias para entender en sus recursos contra las decisiones administrativas de la Organización. Al 17 de junio de 2011, el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas había dictado 416 fallos y el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, que recientemente completó su cuarto período de sesiones, había dictado 126 fallos.

68. Se ha avanzado en materia de equidad y transparencia en los procedimientos relacionados con el régimen de sanciones contra Al-Qaida. En su resolución 1989 (2011), el Consejo de Seguridad incorporó dos mecanismos de “extinción”, que conducen a la supresión automática en lista de los nombres de los autores de solicitudes, salvo que el Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo decida mantener un nombre en la lista. En uno de esos mecanismos interviene el Ombudsman, nombrado en 2010, que ahora tiene encomendado el mandato de formular recomendaciones al Comité sobre el mantenimiento o la supresión de los nombres de los autores de solicitudes.

F. Expansión de las asociaciones

69. Las Naciones Unidas no pueden lograr sus objetivos trabajando aisladamente. Un objetivo esencial de los esfuerzos de coordinación y coherencia de las Naciones Unidas, por lo tanto, es forjar asociaciones útiles con todas las partes interesadas para promover satisfactoriamente el estado de derecho y fortalecer la asistencia prestada a los Estados Miembros.

70. La financiación disponible para el fortalecimiento del estado de derecho está todavía muy fragmentada entre los donantes, y el apoyo bilateral tiene más preponderancia que la asistencia multilateral, en una proporción significativa. Como ya se señaló (véase A/64/298), el compromiso declarado en favor de la implicación nacional queda muchas veces desvirtuado por la intervención de los donantes en la dirección de los proyectos y la carencia de coordinación en una programación que importa soluciones foráneas y la ejecución a cargo de asociados nacionales de los donantes. Los donantes clasifican y encaran de manera diferente las mismas cuestiones relacionadas con la promoción del estado de derecho. Si bien existen mecanismos de coordinación a nivel nacional, hay pocos análisis comparativos de la práctica de la coordinación y de la uniformidad metodológica. La necesidad de una mayor coherencia es más marcada en las situaciones de conflicto en las que hay muchos actores presentes.

71. Con el fin de examinar las prácticas y los desafíos observados sobre el terreno, por un lado, y de promover un consenso sobre las formas de responder a esos desafíos, por el otro, las Naciones Unidas participaron en la organización de una conferencia en 2009 a la que asistieron 70 representantes de donantes bilaterales, países receptores, organizaciones internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales. Para armonizar los enfoques, llegó a la conclusión de que se debía instituir un sistema mediante el cual los donantes multilaterales y bilaterales llevaran a cabo su gestión de manera coordinada y en colaboración con los países y

profesionales asociados, a fin de orientar y administrar actividades encaminadas a mejorar la eficacia de la asistencia para la promoción del estado de derecho.

72. Otro problema de larga data que se opone al progreso en esta esfera ha sido la relativa ausencia de partes interesadas nacionales y de experiencias de base en los debates normativos de alto nivel. Con objeto de coadyuvar a rectificar ese desequilibrio, el Secretario General recomendó en 2008 que se creara un foro en el que los actores nacionales de los países beneficiarios pudieran expresar sus opiniones sobre la eficacia de la asistencia para promover el estado de derecho (A/63/226, párr. 78). El informe titulado “New voices: national perspectives on rule of law assistance”³, publicado en abril de 2011, fue el fruto del proceso de consulta convocada por la Dependencia sobre el Estado de Derecho en 2009 y 2010, con el concurso de 16 expertos nacionales en estado de derecho de 13 países y la participación de entidades de las Naciones Unidas y asociados para el desarrollo. Una recomendación común fue que era preciso crear mecanismos para propiciar una coordinación y una coherencia mayores y más adecuadas de los enfoques de la asistencia para promover el estado de derecho entre los asociados y donantes nacionales.

73. En el mismo sentido, el debate temático oficioso sobre el estado de derecho y los desafíos mundiales, celebrado por la Asamblea General el 11 de abril de 2011, puso de relieve que, con demasiada frecuencia, el apoyo prestado por la comunidad internacional, incluidos los donantes bilaterales y los proveedores de asistencia, no ha producido los resultados previstos a nivel nacional y que se debe hacer esfuerzos para asegurar que las voces de los actores nacionales informen de manera más sistemática el debate global sobre la asistencia para promover el estado de derecho.

74. Análogamente, el *Informe sobre el desarrollo mundial*, publicado por el Banco Mundial, hace ver la dificultad que tienen los países para obtener apoyo externo en las esferas de la justicia y la seguridad y la fragmentación de la asistencia y hace hincapié en la necesidad de una respuesta internacional mejor coordinada para atender las necesidades de justicia y seguridad de los países atrapados en ciclos de fragilidad y conflicto.

75. El historial hasta la fecha, pues, sugiere claramente la necesidad de establecer un foro internacional inclusivo para celebrar un debate normativo en el que intervengan todas las partes interesadas y las Naciones Unidas parecen el ámbito más apropiado para acoger a ese foro. El foro daría a los gobiernos donantes y receptores, las organizaciones multilaterales, las organizaciones no gubernamentales y los actores pertinentes del sector privado, incluidas las fundaciones, la oportunidad de coordinar estrategias, compartir información sobre los proyectos en curso e intercambiar las mejores prácticas y los conocimientos y experiencias nacionales. Podría vincularse a otras iniciativas globales, como el Foro Mundial sobre Derecho, Justicia y Desarrollo, una asociación de múltiples partes interesadas que en breve lanzará el Banco Mundial.

³ Véase www.unrol.org/files/FINAL%20National%20Perspectives%20Report.pdf.

V. Construcción de un mundo justo, seguro y pacífico regido por el estado de derecho

76. El fortalecimiento del estado de derecho en los planos nacional e internacional es un proyecto a largo plazo. Las recomendaciones formuladas anteriormente⁴ son una hoja de ruta importante para el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y la Dependencia sobre el Estado de Derecho. Además, con la dirección de la Vicesecretaría General, el Grupo y la Dependencia, dentro del marco del plan estratégico conjunto para 2012-2014, tratarán de:

- a) Ampliar el uso de la programación conjunta en las misiones de mantenimiento de la paz y en las misiones políticas especiales mediante un aumento de los esfuerzos para evaluar, planificar y ejecutar en forma conjunta (desde un principio);
- b) Mejorar la colaboración entre las entidades de las Naciones Unidas presentes en contextos distintos de las misiones mediante la evaluación y la planificación conjuntas en respuesta a las solicitudes de asistencia de los Estados Miembros;
- c) Establecer incentivos a nivel de todo el sistema para la programación conjunta, con la mira de superar los obstáculos de carácter institucional;
- d) Fortalecer el enfoque de la Organización para la medición de la eficacia de la asistencia para promover el estado de derecho;
- e) Continuar y fortalecer la capacitación conjunta de los profesionales de las Naciones Unidas especializados en el ámbito del estado de derecho;
- f) Convocar a los actores pertinentes a intercambiar las prácticas y fomentar las políticas para ayudar mejor a los Estados Miembros en su acción en pro de la justicia social y económica mediante el estado de derecho.

77. Siete años después de la Cumbre Mundial, la reunión de alto nivel sobre el estado de derecho, convocada en virtud de la resolución 65/32 de la Asamblea General para el inicio de su sexagésimo séptimo período de sesiones en 2012, será una oportunidad para renovar su compromiso y el respeto y la aplicación universales del estado de derecho en los planos nacional e internacional y hacer una relación de los progresos realizados. En vista de esta importante oportunidad, recomiendo que los Estados Miembros traten de:

- a) Brindar apoyo a las Naciones Unidas en sus esfuerzos encaminados a realzar la coherencia, la coordinación y la eficacia de su asistencia, como se indica en el párrafo 76; y
- b) Reflexionar de manera original sobre las formas en que la comunidad internacional puede realzar y coordinar mejor sus iniciativas encaminadas a fortalecer el estado de derecho, incluso mediante un foro normativo internacional, de carácter inclusivo, sobre el estado de derecho, para el cual las Naciones Unidas parecen el ámbito de acogida más natural.

⁴ Véanse A/63/226, párrs. 76 y 78, y A/64/298, párr. 97.

Anexo

Opiniones expresadas por los Estados Miembros

1. La Asamblea General, en su resolución 65/32, solicitó al Secretario General que recabara las opiniones de los Estados Miembros antes de preparar el presente informe.
2. El Secretario General, en una nota verbal de fecha 7 de febrero 2011, invitó a los gobiernos a presentar, a más tardar el 22 de abril de 2011, sus opiniones sobre el subtema de la Sexta Comisión titulado “El estado de derecho y la justicia de transición en situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto”, e instó a los Estados Miembros a que, al elaborar sus presentaciones, prestaran especial atención a “cuestiones como la lucha contra la impunidad y el reforzamiento de la justicia penal, la función y el futuro de los mecanismos nacionales e internacionales de justicia de transición y rendición de cuentas, los sistemas oficiosos de justicia, etc.” (A/C.6/63/L.23, párr. 4).
3. El Secretario General recibió las opiniones expresadas por Australia (21 de abril de 2011), Austria (5 de mayo de 2011), la República Checa (23 de abril de 2011), Dinamarca (31 de mayo de 2011), Finlandia (21 de abril de 2011), Kenya (3 de mayo de 2011), Nueva Zelandia (12 de mayo de 2011), Omán (8 de abril de 2011), Qatar (19 de mayo de 2011), Eslovenia (25 de abril de 2011), Suecia (17 de mayo de 2011), Suiza (25 de abril de 2011), Turkmenistán (2 de mayo de 2011) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (5 de mayo de 2011), que se presentan a continuación.

Australia

[Original: inglés]

Australia celebra la importante labor que están llevando a cabo diversos organismos y entidades de las Naciones Unidas para promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional, especialmente en situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto. Esas situaciones —que son siempre complejas— exigen respuestas sofisticadas y multidimensionales que abarquen todo el espectro de las medidas de asistencia, incluido el mantenimiento de la paz, la reforma del sector político y de seguridad, la aplicación de mecanismos de justicia de transición, el fomento de la capacidad y la asistencia técnica. El estado de derecho, fundamental en toda estrategia encaminada a crear una sociedad próspera y estable, constituye un requisito esencial para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como se señaló en el *Informe sobre el desarrollo mundial 2011*, los países con un gobierno poco eficiente, y en los que el estado de derecho y el control de la corrupción son débiles, tienen entre un 30% y un 45% más de riesgo de guerra civil, y un riesgo considerablemente más elevado de violencia criminal. En los últimos años, Australia ha invertido considerables recursos y cooperado activamente con la comunidad internacional para avanzar en esta importante agenda. En nuestro informe detallamos algunas de las principales esferas de actividad.

A. La asistencia para promover el estado de derecho en contextos frágiles y después de un conflicto

El enfoque de Australia en relación con la reforma del sector de la justicia y la seguridad consiste en reconocer las graves dificultades de desarrollo de los Estados frágiles y que acaban de salir de un conflicto, a saber, una gobernanza débil, una capacidad administrativa limitada, crisis humanitarias crónicas, violencia y tensiones sociales persistentes. Australia adopta un enfoque integrado en relación con la reforma de la administración de justicia y sus intervenciones tienen por finalidad fortalecer la relación entre las instituciones clave del sistema de justicia oficial (como la policía, los establecimientos penitenciarios y los tribunales). Australia también reconoce el importante papel que desempeñan a veces los sistemas de justicia consuetudinarios y comunitarios con posterioridad a los conflictos y la importancia de garantizar que esos sistemas funcionen en un marco de derechos humanos. Al prestar apoyo a la reforma del sistema de justicia, Australia busca alcanzar un equilibrio entre cumplir con los objetivos de largo plazo (por ejemplo, la construcción del Estado y el desarrollo económico) y dar respuesta a las necesidades inmediatas de la población afectada por la inseguridad. Para resolver o evitar nuevos conflictos es fundamental abordar los factores que los producen, por ejemplo, apoyando los sistemas de justicia locales que sean legítimos y accesibles, como lo destacó también el Banco Mundial en la edición del *Informe sobre el desarrollo mundial* de 2011.

Australia hace hincapié, en primer lugar, en asegurar que los Estados cuenten con regímenes jurídicos apropiados para combatir la corrupción y la delincuencia transnacional organizada, el terrorismo, el blanqueo de dinero, el producto del delito, los delitos cibernéticos, el contrabando y trata de personas, así como en mejorar los marcos de cooperación jurídica internacional, como la extradición y la asistencia recíproca. Sin embargo, también reconoce la importancia de prestar asistencia técnica y fomentar la capacidad en otras esferas de la justicia penal, en particular, respecto del dictado de sentencias y la legislación sobre la protección de las víctimas. Los proyectos de Australia orientados a fomentar la capacidad consisten en dictar cursos prácticos e impartir capacitación para funcionarios que trabajen en ámbito jurídico, judicial o para las fuerzas de seguridad; acoger encuentros de intercambio sobre asuntos jurídicos; ejecutar programas de mentoría y homólogos destinados a fomentar la capacidad natural, elaborar directrices y marcos jurídicos y colaborar con países asociados para prestar asesoramiento jurídico y normativo; y en prestar asistencia para promulgar legislación.

Dos ejemplos recientes ponen de manifiesto los avances realizados en esas esferas y la eficacia de esas asociaciones.

En primer lugar, los organismos australianos y sus homólogos neozelandeses vienen cooperando con Tonga desde mediados de 2009 para asistir a ese país en la revisión y reforma de su legislación sobre policía. El 14 de septiembre de 2010, después de recibir esa asistencia, Tonga aprobó la Ley de Policía, que entró en vigor el 2 de febrero de 2011. Estamos colaborando con el país en la elaboración de normas y procedimientos que aseguren la aplicación eficaz de esa Ley.

En segundo lugar, Australia envió en 2009 a Papua Nueva Guinea funcionarios australianos en el marco de su programa “Strongim Gavman” o “Fortalecimiento del Gobierno”, que prestaron asistencia en el establecimiento de la Dependencia de

Cooperación en materia de Delitos Internacionales y el Producto del Delito, en la Fiscalía General de Papua Nueva Guinea, gracias a lo cual se dictó en julio de 2010 la primera orden civil de decomiso relacionada con una causa incoada en virtud de la Ley sobre el Producto del Delito de Papua Nueva Guinea.

En un sentido más general, Australia apoya la reforma del sector de la justicia y la seguridad respecto de una serie de situaciones frágiles, como quedó demostrado con sus actividades en Timor-Leste (en que actuó bajo la dirección de las Naciones Unidas) y las Islas Salomón (en que actuó bajo la dirección de la Misión de Asistencia Regional a las Islas Salomón (RAMSI), así como con su participación más reciente en el Afganistán. Australia también presta una asistencia considerable en relación con el fomento de la capacidad, así como asistencia jurídica técnica a los países del sur y el sudeste asiático (Indonesia y Camboya), África y el Pacífico (Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón, Vanuatu, Samoa, Tonga y Nauru) con objeto de fortalecer el estado de derecho y afianzar la seguridad y estabilidad de esos países.

En consonancia con los principios relativos a la eficacia de la ayuda, Australia procura alentar el liderazgo y la implicación nacionales en los programas de reforma del sector de la justicia, armonizando su asistencia con las políticas y los sistemas de los gobiernos asociados. En los Estados frágiles, Australia apoya procesos que promueven la implicación y la inclusión en los proyectos de un sector más amplio de la población, y, cuando ello es factible desde el punto de vista político, de los grupos marginados.

La experiencia de Australia en una variedad de contextos dejó en claro la importancia de que los países donantes y los organismos públicos intervinientes de Australia lleguen a una comprensión común de los problemas de desarrollo concretos en materia de justicia y seguridad que se afrontan cuando se presta asistencia para el desarrollo. Al respecto, el apoyo que presta Australia al RAMSI se ha caracterizado por un intenso diálogo entre los departamentos de los distintos organismos públicos de Australia en las sedes y sobre el terreno, la celebración de un acuerdo intergubernamental sobre los objetivos y la secuenciación de actividades, marcos comunes de planificación y supervisión y acuerdos prácticos de coordinación.

B. Justicia de transición

Los mecanismos de justicia de transición desempeñan un papel integral para poner a los países que han pasado por conflictos en condiciones de salir adelante y lograr una paz duradera. En particular, esos mecanismos pueden constituir un instrumento fundamental para restablecer la legitimidad y la confianza en las instituciones públicas que son necesarias para fomentar la seguridad y el desarrollo. Esos mecanismos comprenden una amplia variedad de medidas judiciales y no judiciales adaptadas al contexto específico de las sociedades que han salido de un conflicto. Esas medidas deben fundarse en la perspectiva de las víctimas, en particular las pertenecientes a grupos marginados, tener en cuenta las causas profundas del conflicto y ajustarse a las normas internacionales. Deben asimismo tener en cuenta los problemas que conlleva el hacer frente a una herencia de violaciones de derechos humanos cometidas en gran escala y el papel que

posiblemente hayan desempeñado el gobierno del país y sus servicios militares o de seguridad durante el conflicto.

Cabe mencionar que no puede adoptarse un enfoque único en relación con la justicia de transición. En un contexto posterior a un conflicto se requiere la aplicación de distintas estrategias sociales y económicas y de gestión para apoyar al régimen sucesor de un régimen autoritario. Cada situación es singular, y es necesario que se celebren estrechas consultas con la comunidad afectada para diseñar la respuesta más eficaz (lo que el *Informe sobre el desarrollo mundial* describe como “el mejor [enfoque] que podría adoptarse en ese contexto” para fomentar el fortalecimiento institucional). Esa respuesta podría incluir una combinación de medidas, a saber, procesos penales y de averiguación de la verdad, programas de reparaciones, justicia de género, reforma del sector de la seguridad y medidas tendientes a conservar la memoria histórica. La experiencia ha demostrado que la adopción de una combinación de esas medidas es mucho más eficaz que la adopción de cualquier medida aislada.

Australia siempre ha sido una firme defensora de los esfuerzos orientados a combatir la impunidad de los acusados de los crímenes más horrendos. Al respecto, apoya desde hace tiempo la existencia de la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales.

Las amnistías y la inmunidad generalizada contra posibles enjuiciamientos no deben impedir que rindan cuentas quienes más responsabilidad tengan por la comisión de esos crímenes. Los tribunales internacionales especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda, así como el Tribunal Especial para Sierra Leona, han hecho una contribución sin precedentes al objetivo de la comunidad internacional de poner fin a la impunidad por la comisión de crímenes internacionales graves. Su jurisprudencia ha enriquecido nuestra comprensión del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, así como la práctica y los procedimientos del derecho penal internacional.

Conviene que la justicia, de ser posible, se administre a nivel nacional. El desafío para los tribunales internacionales es dejar como legado a los países una mayor capacidad jurídica. Por ejemplo, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia ha fomentado el desarrollo de los tribunales nacionales mediante la remisión de causas de acusados de bajo perfil a las autoridades nacionales competentes. Asimismo, se espera que con el tiempo las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, que forman parte del sistema jurídico de ese país y que participan en los órganos de ese sistema jurídico hagan aportaciones al desarrollo de la capacidad judicial y administrativa nacional.

Mediante sus actividades de divulgación, esos tribunales han creado un espacio de compromiso público respecto de cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas y han demostrado que la búsqueda de la justicia no constituye una amenaza para la paz.

El Gobierno de Australia sigue apoyando firmemente los esfuerzos de los tribunales internacionales, entre otras cosas mediante la provisión de fondos, el distinguido servicio de sus profesionales y su labor en la comunidad internacional para alentar la cooperación con esos tribunales.

Es igualmente importante que existan procesos de averiguación de la verdad o mecanismos “tradicionales” de justicia, que constituyen un complemento importante

de los mecanismos judiciales, al promover la rendición de cuentas a nivel comunitario. Esos mecanismos de justicia de transición deben diseñarse de modo que se fortalezcan la democracia y la paz en la comunidad y se haga participar y se empodere a la sociedad civil. El desarrollo de instituciones sólidas, durables, con mecanismos de supervisión adecuados, organizaciones de la sociedad civil que permiten que las víctimas y los marginados puedan expresarse, y funcionarios públicos debidamente instruidos y capacitados son todos elementos necesarios para hacer la transición de un entorno posterior a un conflicto, a un futuro estable.

C. Despliegue de la capacidad civil

Es importante que se haga una intervención temprana en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto. Deben adoptarse cuanto antes medidas para preparar el terreno con objeto de que se produzca una recuperación de largo plazo. Es necesario que exista una capacidad permanente que posibilite el rápido despliegue de los conocimientos necesarios para actuar en entornos afectados por un conflicto. Con esa finalidad, Australia ha creado un grupo de especialistas civiles que puede desplegarse rápidamente para asistir con la urgencia necesaria en los esfuerzos de estabilización y recuperación de países afectados por conflictos.

El Cuerpo de Especialistas Civiles de Australia complementa la contribución de efectivos policiales y militares de Australia a las Naciones Unidas y otras misiones. Australia reconoce que las intervenciones militares y policiales o de asistencia humanitaria, si bien son esenciales, no pueden por sí solas hacer que se obtengan logros de seguridad o desarrollo duraderos. Las funciones de los especialistas civiles, además de las que cumple la policía, son necesarias para generar y mantener la paz y la estabilidad. En los países afectados por conflictos los gobiernos tienen una capacidad limitada para prestar servicios de seguridad y servicios básicos a sus ciudadanos. Asimismo, es necesario que se prioricen la administración pública, la reforma del sector de la seguridad y la recuperación económica si se quiere apoyar la prestación de servicios básicos con objeto de forjar una paz duradera.

El Cuerpo de Especialistas Civiles de Australia, que emplea expertos en agricultura, derecho, justicia, administración de la educación, ingeniería, gestión financiera, evaluación de necesidades y coordinación de donantes, proporciona una respuesta civil integral para abordar las cuestiones que surjan en situaciones posteriores a los conflictos. Esos especialistas colaboran con una variedad de interesados, entre ellos los beneficiarios locales, los funcionarios de gobierno y otros donantes o especialistas civiles de otros países, con objeto de prestar asesoramiento sobre estabilización, asistencia técnica y fomento de la capacidad, según progrese la situación humanitaria y de seguridad y se haga una transición a la construcción y reconstrucción del Estado. A juicio de Australia, esta puede ser una respuesta necesaria para lograr resultados inmediatos y tangibles sobre el terreno.

El Grupo Internacional de Despliegue de la Policía Federal de Australia gestiona el envío de su personal policial al exterior a misiones de fomento de la capacidad, misiones de reconstrucción regional posteriores al conflicto y misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y a veces tiene a aproximadamente 350 efectivos cumpliendo funciones en el exterior. Además, la asistencia que se presta por conducto de la Red Internacional de la Policía Federal

de Australia se centra en fomentar la capacidad de la policía local para combatir el crimen transnacional y, especialmente, en apoyar la cooperación entre servicios de policía, la reunión de información de inteligencia para respaldar la labor de las fuerzas de seguridad internacionales, la capacitación y otros tipos de asistencia técnica. En menor escala, el Centro de datos y servicios forenses presta varios servicios de asistencia especializados.

D. Protección de los civiles

La protección de los civiles es una función central de las operaciones de paz regionales y de las Naciones Unidas que plantea complejas cuestiones operacionales y normativas que deben abordarse para que las misiones cumplan con éxito sus mandatos. Aunque subsisten algunos problemas, las Naciones Unidas y la Unión Africana han logrado considerables avances en lo que respecta a reforzar la protección de los civiles.

El reciente proyecto de un Marco estratégico para elaborar estrategias amplias para la protección de los civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas constituye un importante avance dado que armoniza las estrategias que se utilizan en una misión con objeto de maximizar su capacidad de proteger mejor a los civiles, aumentando la coherencia de las medidas que adopta la misión para cumplir las tareas que le fueron encomendadas y fortaleciendo la rendición de cuentas y las vías jerárquicas.

Reconociendo la importancia primordial de las actividades de mantenimiento y consolidación de la paz en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos, Australia, por intermedio del Centro de Excelencia Cívico-Militar de Asia y el Pacífico y su participación en la asociación Challenges, está comprometida a aumentar la eficiencia de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas haciendo hincapié en el componente de protección de la población civil.

En abril de 2010, el Centro acogió en Australia al Tercer Foro Internacional sobre los desafíos que enfrentan las operaciones de paz y abordó el problema de la protección de los civiles en las operaciones de paz multidimensionales. En febrero de 2011, se presentó un informe en el Challenges Forum Seminar, coorganizado por Australia, en que se señalaron las principales conclusiones del Foro Internacional.

Si bien se ha avanzado considerablemente en la doctrina de la protección de los civiles a nivel estratégico, es necesario seguir trabajando a nivel operacional en la elaboración de estrategias militares y policiales de apoyo.

Australia ha comenzado a elaborar una doctrina de la protección de los civiles para la Fuerza de Defensa de Australia. Tiene el agrado de compartir el proceso de esa labor y aprender de las experiencias de otros países; a ese fin, acogerá una conferencia de alto nivel sobre asuntos civiles y militares titulada “Fomento de la protección de los civiles en las operaciones de paz: de la política a la práctica”, que se celebrará del 24 al 26 de mayo de 2011. En esa conferencia se examinarán los acontecimientos recientes a nivel estratégico y operacional, se estudiarán más de cerca las cuestiones puntuales de la inclusión de las mujeres y los niños en el programa de protección de los civiles y se considerarán posibles iniciativas de capacitación.

Como parte de nuestra labor más amplia para mejorar la capacidad del personal de mantenimiento de la paz en la protección de los civiles, Australia considera que algunos grupos de la sociedad, en particular las mujeres y las niñas, siguen siendo particularmente vulnerables durante un conflicto y después de él. Australia apoya la inclusión de las mujeres en todos los esfuerzos de prevención y solución de controversias, así como en las medidas de rehabilitación y consolidación de la paz, conforme a la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad relativa a las mujeres y la paz y la seguridad. En 2010 Australia anunció que proporcionaría fondos para que se diera capacitación adicional al personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con anterioridad al despliegue o en el país sobre formas de proteger a las mujeres de la violencia sexual en situaciones de conflicto o después de un conflicto.

Australia también estima que las mujeres deben estar mejor representadas en los procesos de reconstrucción posteriores a los conflictos para garantizar una paz estable. Como parte de su apoyo a la resolución 1325 (2000), Australia también ha abogado por aumentar la participación de las mujeres en las actividades de consolidación de la paz y la reconstrucción de las comunidades. Así lo pone de manifiesto nuestro apoyo a las mujeres en el proceso electoral del Afganistán. El personal de mantenimiento de la paz y el personal desplegado a la RAMSI también consideran que la resolución 1325 (2000) es un instrumento esencial para promover la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones. Es preciso proseguir esta labor, y Australia está ahora elaborando un plan de acción nacional para la aplicación de la resolución 1325 (2000).

Como lo demuestran estas iniciativas, Australia sigue comprometida a colaborar con las Naciones Unidas y los Estados Miembros para asegurar la equidad, igualdad, rendición de cuentas y justicia para todos, mediante la promoción del estado de derecho. En ningún caso es esto más importante que en las sociedades en conflicto o después de un conflicto. En muchos casos, se tratará de un proyecto a largo plazo, aunque esencial, para asegurar una paz y prosperidad duraderas.

Austria

[Original: inglés]

Austria reafirma su fuerte compromiso con un orden internacional sustentado en el derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos y el estado de derecho, cuyo núcleo básico son las Naciones Unidas. El derecho internacional y el estado de derecho son el fundamento del sistema internacional. La existencia de normas claras y predecibles, el respeto de esas normas y la adhesión a ellas y un sistema multilateral eficaz para prevenir o sancionar las infracciones son las condiciones previas para una paz y seguridad internacionales duraderas. En nuestra opinión, es fundamental fortalecer el estado de derecho en todas sus dimensiones, a saber, en los planos nacional, internacional e institucional.

La comunidad internacional ha prestado una creciente atención en los últimos años a la promoción de la justicia y el estado de derecho, en particular, en situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto. Esas experiencias nos han dejado enseñanzas importantes, que deberían moldear nuestras actividades futuras en la esfera de la justicia de transición y el estado de derecho, en particular en el marco de las Naciones Unidas. Las principales de esas enseñanzas son la necesidad

de asegurar un fundamento común de normas y principios internacionales y la movilización de los recursos necesarios para hacer inversiones en la justicia. En su informe de 2004 sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616), el Secretario General dio orientaciones útiles sobre cómo focalizar y simplificar nuestros esfuerzos para obtener resultados. El Secretario General destacó la necesidad de reforzar la coordinación y la cooperación con las Naciones Unidas en todos sus niveles así como con agentes ajenos a la Organización. Hay que perseverar en esa labor. Las recomendaciones contenidas en el informe de 2004 siguen siendo válidas y es necesario que se las aplique plenamente.

Los esfuerzos de las Naciones Unidas por fortalecer el estado de derecho en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto deben basarse en las evaluaciones nacionales, la participación nacional y las necesidades y aspiraciones nacionales. Si bien las normas jurídicas fundamentales son de carácter universal y no son negociables, no existe una fórmula única para todas las situaciones frágiles. Para que sean eficaces, nuestras estrategias tienen que inculcar un sentimiento de implicación nacional, dar apoyo a los grupos nacionales interesados en la reforma y adaptarse a las realidades sobre el terreno.

Como se destaca en el informe de 2004, debe adoptarse un planteamiento cabal de la justicia de transición (véase S/2004/616, párr. 64 k)). Debemos prestar cuidadosa atención a las necesidades de las víctimas y la sociedad civil y tener en cuenta que los distintos mecanismos de justicia de transición deben complementarse entre sí. Las estrategias de las Naciones Unidas para asegurar la rendición de cuentas en situaciones posteriores a un conflicto no deben limitarse a los tribunales internacionales, sino abarcar todo el espectro de mecanismos de justicia de transición disponibles para lograr la justicia, la reconciliación y la restauración sostenible de la paz y la seguridad en sociedades desgarradas por conflictos.

La intervención de las Naciones Unidas en sociedades frágiles y de transición debería centrarse, en primer lugar, en fortalecer los sectores de la justicia y la seguridad para que rindan cuentas con arreglo a las normas internacionales, con objeto de evitar así nuevos conflictos. Nuestras actividades deben estar orientadas a lograr que las sociedades desgarradas por un conflicto tengan una mayor capacidad de recuperación, a promover la comprensión y el reconocimiento del estado de derecho y a dar la perspectiva de largo plazo de que se alcanzará una paz sostenible. Para ser eficaces, nuestras actividades deben fortalecer el papel de la sociedad civil y fomentar la función directiva de las mujeres en el proceso de recuperación.

Austria celebra el creciente apoyo de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad al fortalecimiento del estado de derecho y sus actividades al respecto. En la Cumbre Mundial 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la necesidad de una adhesión universal al estado de derecho y su aplicación, en los planos tanto nacional como internacional, y reafirmaron su compromiso con un orden internacional basado en el estado de derecho y el derecho internacional. En 2006, por iniciativa de Liechtenstein y México, la Asamblea General incluyó un nuevo tema en su programa titulado “El estado de derecho en los planos nacional e internacional”. Desde entonces, el Secretario General prepara los informes anuales sobre el estado de derecho, que se debaten en la Sexta Comisión.

Austria apoya enérgicamente la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho prevista para principios del sexagésimo séptimo período

de sesiones, que se celebrará en septiembre de 2012 (resolución 65/32 de la Asamblea General). Si bien las modalidades de esta reunión se discutirán y definirán en el sexagésimo sexto período de sesiones, Austria encomia especialmente la iniciativa del Presidente del sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea, Sr. Joseph Deiss, de entablar un debate y reorientar la atención de los Estados Miembros hacia el estado de derecho, mediante un debate temático interactivo en la Asamblea sobre el estado de derecho y los desafíos mundiales el 11 de abril de 2011. El debate, en que se destacó la importancia del estado de derecho en relación con situaciones de conflicto y con el desarrollo, suscitó gran interés en los Estados Miembros y constituyó un importante paso en la preparación de la reunión de alto nivel. El Ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Sr. Michael Spindelegger, uno de los principales oradores en ese debate, señaló que, si bien las Naciones Unidas habían progresado considerablemente desde la Cumbre Mundial 2005, debían extraerse enseñanzas de hechos recientes, hacer más hincapié en la prevención de conflictos y, la implicación nacional y mejorar la cooperación y la coordinación con respecto a todas las actividades relacionadas con la promoción del estado de derecho. Al respecto, celebró la idea del Secretario General de iniciar un nuevo foro de diálogo sobre el estado de derecho con los auspicios de las Naciones Unidas (el texto completo del discurso se puede consultar en <http://www.un.org/en/ga/president/65/initiatives/Rule%20of%20Law/Austria%20-%20FM.pdf>).

Por su parte, el Consejo de Seguridad viene prestando creciente atención al estado de derecho. Entre 2004 y 2008, Austria organizó una serie de mesas redondas y una reunión de expertos para analizar el papel del Consejo de Seguridad en el fortalecimiento de un orden internacional basado en normas. En abril de 2008 se publicó el informe anual sobre esa iniciativa (A/63/69-S/2008/270), en el que figuran 17 recomendaciones sobre la forma en que el Consejo podría apoyar el estado de derecho en las distintas esferas de su labor. El Consejo celebró dos debates abiertos y aprobó dos declaraciones de la Presidencia sobre el estado de derecho en 2006 y 2010, respectivamente. Austria, cuando ocupó un asiento en el Consejo de Seguridad, colaboró constantemente con países de ideas afines para incorporar la promoción del estado de derecho en la labor cotidiana del Consejo y sus órganos subsidiarios y para mejorar los métodos de trabajo del Consejo. El Consejo aprobó importantes resoluciones en distintas esferas relacionadas con el estado de derecho, como la protección de la población civil, los niños en los conflictos armados y las mujeres y la paz y la seguridad. También cabe mencionar las resoluciones sobre el establecimiento del Ombudsman del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) y el mecanismo residual para los tribunales especiales de las Naciones Unidas, así como distintas resoluciones en que se establecieron misiones de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad debería continuar esa labor dado su papel fundamental en la restauración y el respeto del estado de derecho y su apoyo a los mecanismos de justicia de transición (véase S/2004/616, párr.64 a)).

A. La lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia penal

1. Tribunales internacionales y mixtos

A juicio de Austria, las iniciativas para combatir la impunidad y fortalecer la justicia penal en el plano internacional constituyen un pilar importante del estado de derecho y contribuyen considerablemente a la prevención de los conflictos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, Austria apoya firmemente a la Corte Penal Internacional, los tribunales especiales y mixtos y otros mecanismos de justicia penal internacional, como las medidas para poner fin a la impunidad por los delitos más graves de trascendencia internacional. Dado que estos mecanismos desempeñan un papel importante en relación con el estado de derecho y la justicia de transición, pues aseguran la rendición de cuentas y las garantías y salvaguardas procesales, así como los derechos de las víctimas y la justicia de género, el Consejo de Seguridad debiera insistir en la necesidad de que se preste una plena cooperación a los tribunales internacionales y mixtos, incluso en la entrega de acusados cuando sea solicitada (véase S/2004/616, párr. 64 j)).

Austria está firmemente convencida de que la Corte Penal Internacional es uno de los instrumentos más eficaces para apuntalar el estado de derecho y combatir la impunidad. Al respecto, encomia el examen de la justicia penal internacional llevado a cabo por la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala por invitación del Gobierno de Uganda, del 31 de mayo al 11 de junio de 2011. Austria fue uno de los patrocinadores de la enmienda del artículo 8 del Estatuto de Roma y apoyó la enmienda relativa al crimen de agresión. Además, apoya a la Corte de muchas otras maneras pues, por ejemplo, fue el primer país en concluir un acuerdo con la Corte sobre la ejecución de sentencias. En fecha más reciente, inició conversaciones con la Corte sobre la firma de un memorando para el traslado de testigos. En reconocimiento de la necesidad de resarcir a las víctimas, Austria ha hecho contribuciones sustanciales al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Para combatir la impunidad y fortalecer la justicia penal, es necesario hacer hincapié en el importante papel de la sociedad civil. A fin de alentar los esfuerzos de la sociedad civil al respecto, Austria hace contribuciones sustanciales a la Coalición para la Corte Penal Internacional.

Austria sigue comprometida a apoyar a los tribunales especiales de las Naciones Unidas, como el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya y el Tribunal Especial para el Líbano, que han hecho avances considerables en su labor y que desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la justicia penal internacional. Además, Austria promueve el tribunal de Bosnia y Herzegovina establecido para el enjuiciamiento de criminales de guerra y la delincuencia organizada, en que se asignan magistrados y fiscales internacionales para incoar las actuaciones por crímenes de guerra y se encomienda a expertos internacionales la tarea de prestar asesoramiento en relación con el juzgamiento y la sanción de los delitos de corrupción y la delincuencia organizada.

2. Administraciones de justicia nacionales

Si bien los tribunales internacionales han influido decisivamente en el desarrollo del derecho penal internacional y se han convertido en pilares del estado de derecho, ni los esfuerzos ni los recursos deberían centrarse exclusivamente en esas instituciones. En el caso de las sociedades frágiles y de transición, en las iniciativas de las Naciones Unidas se debe aumentar el apoyo a favor de las administraciones de justicia nacionales y de los grupos interesados en la reforma interna, así como en el fortalecimiento de la legislación nacional, teniendo en cuenta las normas y principios internacionales.

A ese respecto, Austria aplica resueltamente las medidas necesarias en el plano nacional y ha sancionado legislación sobre la cooperación con la Corte Penal Internacional, por ejemplo, sobre la cooperación judicial y la ejecución de sentencias en el ordenamiento jurídico interno. En consonancia con el compromiso de Austria con el estado de derecho y la lucha contra la impunidad, el Código Penal de Austria tipifica delito de genocidio y los crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Sin embargo, a fin de cumplir expresamente los requisitos que dimanaban del principio de complementariedad consagrado en el Estatuto de Roma, y de conformidad con la resolución ICC-ASP/5/Res.3 de la Corte, Austria está tipificando explícitamente los crímenes de competencia de la Corte en su propio derecho penal. Austria complementa esta iniciativa con legislación orientada a tipificar expresamente en el derecho interno las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos, así como la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se prevé concluir esta labor para el fin de 2011.

B. La función y el futuro de los mecanismos nacionales e internacionales de justicia de transición y rendición de cuentas

En opinión de Austria, las crisis no se resolverán de modo sostenible a menos que se preste oportuna y adecuada atención a la justicia, la reconciliación, la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo. A ese respecto, el apoyo de la comunidad internacional es esencial. Debemos asegurar que las consideraciones sobre el estado de derecho y la justicia de transición se integren en la planificación estratégica y operacional de las operaciones de paz de las Naciones Unidas (véase S/2004/616, párr. 64 b)). En todo enfoque que se adopte orientado a la reconciliación con el pasado se deben tener en cuenta la situación y el contexto específicos y toda la variedad posible de mecanismos de justicia y reconciliación, como las actividades orientadas al enjuiciamiento de los responsables, las comisiones de la verdad y la reconciliación, los programas nacionales de reparación para las víctimas y la reforma institucional, así como los mecanismos tradicionales de solución de controversias. En ese contexto, las Naciones Unidas deben intensificar sus esfuerzos por promover la cooperación respecto de los enjuiciamientos y la documentación, con la mira de fortalecer el papel de la sociedad civil, en particular de los grupos vulnerables, como las víctimas, los testigos y las mujeres, en la instrucción de las causas penales y promover la reconciliación mediante la averiguación de la verdad. En las sociedades que acaban

de salir de un conflicto a menudo parece que ser escuchado es más importante que el resultado que arrojen los procesos judiciales formales. Sin embargo, debe apoyarse la reconciliación en situaciones posteriores a los conflictos con el claro compromiso de poner fin a la impunidad por las violaciones graves del derecho humanitario internacional y las normas de derechos humanos y, en particular, de hacer rendir cuentas a los perpetradores principales. La solución eficaz de los conflictos y la reconciliación a largo plazo dependen de la paz y la justicia, dos conceptos que se refuerzan mutuamente. Además, aunque las amnistías permitan que se lleve a cabo un proceso de reconciliación respecto de algunos de los responsables, no deben otorgarse por violaciones graves del derecho internacional humanitario o las normas de derechos humanos.

1. Prevención

En los esfuerzos de la comunidad internacional para promover el estado de derecho se debe hacer más hincapié en la prevención. El estado de derecho cumple un papel fundamental en la prevención de conflictos y atrocidades en masa, la estabilización de las sociedades después de un conflicto y la prevención de nuevos estallidos. Como señaló el Secretario General en su informe de 2004 “en el ámbito de la justicia y el Estado de derecho, es mucho más efectivo prevenir que curar” (S/2004/616, párr. 4). Al respecto, Austria apoya a la labor del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, que tiene el mandato de recoger la información existente, en particular la del sistema de las Naciones Unidas, actuar como mecanismo de alerta temprana y formular recomendaciones al Consejo de Seguridad por conducto del Secretario General, lo que ilustra claramente que no se puede ignorar la relación entre las violaciones sistemáticas y en masa de los derechos humanos y las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. A juicio de Austria es importante que se exploren nuevas modalidades para fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas en la prevención del genocidio.

Las Naciones Unidas debieran intensificar sus esfuerzos por asistir a los Estados para que cada Estado proteja a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y mejore su capacidad de alerta temprana. En la Cumbre Mundial 2005, todos los Estados Miembros aceptaron esa responsabilidad y se comprometieron a actuar en consecuencia. Esa responsabilidad conlleva la prevención de esos crímenes, incluida la incitación a cometerlos, mediante la adopción de medidas apropiadas y necesarias. Austria apoya la estrategia de tres pilares propuesta por el Secretario General en su informe titulado “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger” (A/63/677). Más recientemente, el Consejo de Seguridad adoptó medidas decisivas para proteger a los civiles en los conflictos armados mediante la adopción de la resolución 1973 (2011).

Austria considera que el estado de derecho es fundamental para hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Es esencial entender la responsabilidad de proteger desde la perspectiva del estado de derecho, pues este es el tema transversal de los tres pilares. Austria apoya sin reservas la opinión del Secretario General de que el estado de derecho es “fundamental para impedir que se cometan crímenes relativos a la responsabilidad de proteger” y de que “el sistema de las Naciones Unidas debería incrementar la asistencia que presta en la materia a los Estados Miembros, por medios tales como la colaboración con los países donantes. Los objetivos deben ser asegurar el igual acceso a la justicia y mejorar los servicios judiciales, fiscales,

penales y policiales para todos. Esas medidas acrecentarían las posibilidades de que las disputas que surjan dentro de la sociedad se puedan resolver por medios legales y no violentos” (A/63/677, párr. 47).

2. Sensibilización

El conocimiento y la educación son la clave para prevenir la comisión de atrocidades en masa y su repetición. Austria ha extraído estas enseñanzas de su propia historia. Como miembro del Grupo de Trabajo para la cooperación internacional en la enseñanza, rememoración e investigación del Holocausto, está decididamente resuelta a promover la educación sobre el Holocausto en las escuelas, las universidades y las comunidades y alienta a otras instituciones a hacer lo mismo, como lo estipula la Declaración del Foro de Estocolmo sobre el Holocausto de enero de 2000. Si bien las formas de reconciliarse con la historia varían según la cultura, el conocimiento sobre el Holocausto, un hecho singular por su gravedad y la duración de sus efectos, puede coadyuvar a entender mejor las causas fundamentales del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras atrocidades en masa. Esa sensibilización preparará el terreno para que otras sociedades que hayan salido de un conflicto superen su propio pasado, para que las comunidades adopten medidas de respuesta al genocidio y los sobrevivientes intenten salir adelante, a pesar de sus experiencias. La sensibilización es un requisito importante para prevenir futuras violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Para cumplir con este compromiso, Austria contribuyó a una conferencia internacional sobre la prevención mundial del genocidio y las enseñanzas del Holocausto, organizada por el Seminario Mundial de Salzburgo en 2010, con miras a proporcionar un marco conceptual que vinculara la enseñanza, la rememoración y la investigación del Holocausto con los esfuerzos actuales de prevención del genocidio, la depuración étnica, el racismo, el antisemitismo y la xenofobia en el mundo. Se prevé celebrar una conferencia de seguimiento en el tercer trimestre de 2012, que organizarán el Seminario Mundial de Salzburgo, el Museo Nacional del Holocausto de los Estados Unidos de América y el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria. El objetivo de esta conferencia, destinada a los encargados de la adopción de decisiones en el ámbito de la educación (funcionarios de gobierno y otros encargados de la elaboración de políticas), será generar una mayor conciencia sobre el nexo entre la educación sobre el Holocausto y la prevención del genocidio.

3. Protección de la población civil

La protección eficaz de los civiles en los conflictos armados es otro elemento fundamental de la prevención. El firme compromiso internacional de Austria con la adopción de normas integrales para la protección de los civiles plasma en la resolución 1894 (2009) del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, aprobada por unanimidad cuando Austria ocupó la presidencia del Consejo en noviembre de 2009. Si bien en la última década ha habido avances considerables en esa esfera, la elaboración de normas internacionales para la protección de los civiles no ha ido acompañada de suficientes medidas sobre el terreno, por ejemplo, medidas para fortalecer el estado de derecho en las sociedades desgarradas por conflictos. En la resolución se reconoce que la protección es un concepto amplio que abarca el derecho internacional humanitario y

las normas de derechos humanos y excede la esfera de la protección física. Por lo tanto, el Consejo establece también que las operaciones de mantenimiento de la paz deben asistir a los Estados durante un conflicto y después de este en la creación de un entorno en que todos los agentes rindan cuentas de conformidad con leyes que se promulguen públicamente, se hagan cumplir por igual y se apliquen con independencia, y sean compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. En el párrafo 11 de la resolución el Consejo enumera por primera vez una lista completa de mecanismos de justicia de transición (enjuiciamientos, averiguación de la verdad, reparación y reformas institucionales), y por lo tanto, adopta un enfoque holístico sobre la cuestión de la lucha contra la impunidad por violaciones graves del derecho internacional, en particular, las violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, un enfoque que fue reiterado en la declaración de la Presidencia del Consejo de 22 de noviembre de 2010 (PRST/2010/25, párr. 9). El Consejo, en su resolución 1960 (2010), estableció claramente que “es imprescindible poner fin a la impunidad para que una sociedad en conflicto o que se está recuperando de un conflicto pueda enfrentar la realidad de los abusos cometidos en el pasado contra los civiles afectados por el conflicto armado y evitar esos abusos al futuro”, reafirmando así el nexo entre la adopción de medidas para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y la paz y la seguridad sostenibles. Con ocasión del décimo aniversario de la resolución 1325 (2000) sobre las mujeres y la paz y la seguridad, el Consejo elaboró indicadores concretos para hacer un seguimiento de la aplicación de esa resolución, por ejemplo, las instituciones y los procesos de justicia de transición, la reconciliación y la reconstrucción posteriores a los conflictos.

A fin de contribuir a que se aplique la resolución 1894 (2009) y realzar la sensibilización, Austria apoya el desarrollo de un curso de especialización sobre la protección de los civiles en los conflictos armados en África. El plan de estudio de este curso ha sido elaborado por el Centro Austríaco de Estudios para la Paz y la Solución de Conflictos de Schlaining, en cooperación con institutos de capacitación africanos. Los centros de capacitación africanos, las comunidades económicas regionales y la Unión Africana ofrecen ese curso de capacitación a profesionales con antecedentes de trabajo en las esferas civil, policial y militar.

4. Derechos humanos

El estado de derecho y la justicia de transición están firmemente arraigados en las normas de derechos humanos. El derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a interponer un recurso efectivo debe garantizarse en todo momento. El Consejo de Derechos Humanos desempeña un papel fundamental en la consolidación del estado de derecho en las sociedades que estén pasando o hayan pasado por un conflicto. El Consejo, mediante sus procedimientos especiales y sus expertos independientes, contribuye a seguir de cerca el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y el respeto de los principios del estado de derecho sobre el terreno y a informar de ellos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha elaborado instrumentos útiles en relación con el estado de derecho sobre cuestiones relacionadas con la justicia de transición, que deberían aplicarse en la labor de las Naciones Unidas sobre el terreno. El Consejo, en sus recientes periodos extraordinarios de sesiones sobre Libia y Côte d'Ivoire destacó inequívocamente la importancia de la necesidad de luchar contra la impunidad y enjuiciar a los responsables de ataques contra civiles.

Es necesario tener en cuenta y seguir examinando la práctica de establecer comisiones de investigación internacionales sobre las violaciones graves de los derechos humanos.

5. Cuestiones residuales

Una importante función de los mecanismos de justicia de transición y de rendición de cuentas en el futuro será la preservación del legado de esos mecanismos y cuestiones residuales como la supervisión y la ejecución de las sentencias, los indultos, la libertad condicional, la protección de los testigos, la revisión de las sentencias y la gestión y preservación de los archivos. La justicia no es algo que se imparta una sola vez cuando se crea un tribunal, se arresta a un prófugo o se dicta sentencia. Más bien, es un proceso que puede durar años o décadas.

En 2009 y 2010, Austria, en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo oficioso del Consejo de Seguridad sobre los tribunales internacionales orientó las negociaciones y facilitó la aprobación de la resolución 1966 (2010) sobre el establecimiento del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, que constituyó un hito en la esfera de la justicia penal internacional. El Consejo decidió establecer el Mecanismo Residual con dos subdivisiones, una en Arusha para el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y otra en La Haya para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, que comenzarán a funcionar el 1 de julio de 2012 y el 1 de julio de 2013, respectivamente. El Consejo de Seguridad, al establecer este Mecanismo, transmitió un fuerte mensaje contra la impunidad. Los prófugos de alto nivel acusados por los dos tribunales no pueden ocultarse ni eludir la acción de la justicia. El Mecanismo continuará la jurisdicción, los derechos, las obligaciones y las funciones esenciales de estos tribunales. Asimismo, en la resolución se envió una señal clara a los Tribunales de que debían adoptar todas las medidas posibles para concluir su labor a más tardar el 31 de diciembre de 2014, preparar su cierre y asegurar una transición fluida hacia el Mecanismo.

C. Mecanismos oficiosos

La adopción de un enfoque holístico e integral para restablecer el estado de derecho en situaciones posteriores a un conflicto requiere un mayor compromiso con los sistemas de justicia oficiosos para mejorar la rendición de cuentas de los perpetradores y el acceso a la justicia para las víctimas. Cuando los mecanismos oficiales de rendición de cuentas no puedan cumplir plenamente los objetivos de reconciliación y de una restauración sostenible de la paz y la seguridad en sociedades desgarradas por conflictos, esos mecanismos oficiosos pueden complementarse efectivamente con unos mecanismos tradicionales de solución de controversias que no forman parte de la administración de justicia oficial. Los mecanismos oficiosos son muchas veces más accesibles y pueden incluso ofrecer recursos rápidos, eficaces en función de los costos y pertinentes desde el punto de vista cultural. Es posible que funcionen más cerca de los interesados locales y que no se limiten a los responsables principales. Las actividades de las Naciones Unidas deberían, sin dejar de promover el estado de derecho y mejorar el funcionamiento de las instituciones de justicia oficiales, reconocer el potencial de esos sistemas oficiosos. Austria quisiera encomiar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por sus

señeras actividades en ese ámbito, en particular por el ofrecimiento de asistencia técnica con destino a actividades a nivel nacional en el sector de la justicia y la seguridad.

Los sistemas de justicia oficiosos, con todo, no constituyen una solución en todos los casos. A pesar de sus ventajas, en muchas situaciones esos sistemas no cumplen los objetivos de la justicia de transición y la reconciliación. Los sistemas de justicia oficiosos a menudo discriminan contra las mujeres y los grupos que se encuentran en una situación desventajosa, no siempre son conformes a las normas internacionales de derechos humanos y, a veces, perpetúan la violación de esos derechos. También pueden dar lugar a abusos de poder, y a veces carecen de independencia y los conocimientos y valores morales de las personas encargadas de su aplicación inciden en la calidad de la justicia. Por lo tanto, las iniciativas de las Naciones Unidas deberían estar orientadas a mejorar la calidad de la solución de controversias y a hacer frente a los problemas que presentan los sistemas de justicia oficiosos para asegurar la observancia de las normas internacionales de derechos humanos. Esas iniciativas deberían ser parte del enfoque que adopten las Naciones Unidas respecto de la justicia de transición y el estado de derecho, con el objetivo más general de asegurar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia mediante el recurso tanto a los sistemas de instituciones oficiales como a los sistemas de justicia oficiosos.

D. Proyectos para el fomento de la capacidad

Las actividades y los proyectos para el fomento de la capacidad y de asistencia para el restablecimiento del estado de derecho en sociedades que están pasando o han pasado por un conflicto constituyen una parte importante de los esfuerzos de Austria por promover el estado de derecho. Además, en los programas de Austria para la cooperación para el desarrollo que presta asistencia en las fases de transición en que deben resolverse cuestiones como el desarme, la desmovilización, la reintegración de los excombatientes, la reforma del sistema de seguridad y los problemas que afectan a los grupos vulnerables, como los niños soldados.

La Cooperación Austríaca de Desarrollo (ADC), por ejemplo, presta apoyo al Centro Internacional para la Justicia de Transición en lo que respecta al fortalecimiento del debate sobre la justicia de transición en la región de Uganda septentrional, donde se había librado un conflicto. El proyecto apunta especialmente a fortalecer el diálogo entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, integrando en él aspectos de averiguación de la verdad, reconciliación y rememoración y proporcionando a las instituciones pertinentes de los sectores de la justicia y el orden público la capacidad necesaria para ocuparse de cuestiones como la aplicación de la ley, la investigación de la verdad y la repatriación. Se presta especial atención a las necesidades específicas de las mujeres y otros grupos vulnerables en el contexto de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad.

En Uganda septentrional, la ADC también apoya al poder judicial en la aplicación del plan para la paz, la recuperación y el desarrollo, contribuyendo al establecimiento de la infraestructura necesaria (por ejemplo, edificios para los tribunales) y actividades en la esfera de la justicia de transición, así como mecanismos de justicia oficiales y oficiosos.

En Bosnia y Herzegovina, la ADC apoya las instituciones del Estado creadas en virtud del Acuerdo de Dayton en 1995, que procuran hacer frente a los crímenes de guerra cometidos en el pasado. La ADC, por ejemplo, promueve la labor del Tribunal de Bosnia y Herzegovina establecido para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y la delincuencia organizada (véase la secc. A.1. *supra*).

Aunque no en el contexto de situaciones posteriores a un conflicto, sino con miras a su prevención, la ADC, en un programa conjunto con el Organismo Suizo de Cooperación para el Desarrollo, apoyará los esfuerzos de Bhután para lograr un sistema judicial sostenible y eficaz que sea accesible, transparente, independiente y eficiente, y asegure los principios de la no discriminación y la igualdad ante la ley. Ese apoyo puede incluir actividades de capacitación, visitas de estudio o la financiación de una academia permanente de capacitación judicial.

República Checa

[Original: inglés]

A. Participación en misiones civiles

La República Checa envía periódicamente efectivos de policía y expertos jurídicos en estado de derecho y justicia de transición a participar en misiones civiles de la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). A ese fin, la policía de la República Checa posee un sistema eficiente para capacitar, equipar y mantener a su personal en el exterior. El Estado asigna los recursos necesarios de su presupuesto para asegurar que la República Checa cumpla plenamente con las obligaciones que dimanen de los tratados internacionales y de su condición de miembro de organizaciones internacionales.

Los efectivos de la policía checa participan principalmente en operaciones que implican seguir de cerca la situación de seguridad, fomentar la capacidad, fortalecer y apoyar a las fuerzas de seguridad locales y prestar asistencia para el fortalecimiento del estado de derecho. En ese contexto desempeñan una amplia variedad de funciones, por ejemplo, actúan como observadores, oficiales de enlace, asesores e instructores, y ejercen directamente funciones policiales.

Los efectivos de la policía checa fueron desplegados en 1999 en sus primeras misiones, a saber, la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina. En 2003, la República Checa comenzó a participar en la Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina. En el período correspondiente entre diciembre de 2003 y septiembre de 2005, la policía checa participó en la Misión de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia. En 2004 comenzó a colaborar en el Centro Internacional de Capacitación Policial de Jordania para impartir formación a policías jordanos; el proyecto concluyó en 2006. Desde 2005 la República Checa viene participando en la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en el Iraq. Desde 2006, la policía checa integra la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en la República de Moldova y Ucrania. En 2007 comenzó a participar en cuatro nuevas misiones: la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia, cuyo mandato concluyó en 2009,

la Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia, la Misión de Policía de la Unión Europea en el Afganistán^a y la Oficina de Coordinación de la Unión Europea para el apoyo a la policía palestina (EUPOL COPPS). Desde 2004 la policía checa ha participado en la Misión de las Naciones Unidas en Liberia^b, y actualmente existen planes para aportar un contingente de policía a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano y otras misiones de las Naciones Unidas en el Oriente Medio (la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación y el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua).

Al 1 de abril de 2011, 35 efectivos de la policía checa participaban en operaciones de paz: 8 en el Afganistán (13 en total desde 2008); 1 en Bosnia y Herzegovina (2 en total desde 2003); 4 en Georgia (6 en total desde 2008); 1 en el Iraq (2 en total desde 2005); 14 en la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (30 en total desde 2008, con participación en la UNMIK desde 1999); 5 en Liberia (5 en total desde 2004); 1 en EUPOL COPPS (3 en total desde 2007); y 1 en el mecanismo conjunto de prevención de incidentes y respuesta de Ginebra (desde 2010). El número de efectivos de policía que cumplen funciones en el exterior aumentará a 61 para el fin de mayo de 2011.

Un fiscal checo (especializado en delitos económicos) se ha estado desempeñando en el norte de Kosovska Mitrovica bajo la dirección de la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo desde el 1 de octubre de 2010. Además, la República Checa apoya activamente las operaciones de la OSCE sobre el terreno para promover la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. A esos fines, proporciona recursos financieros y humanos (expertos enviados a las misiones de la OSCE en Bosnia y Herzegovina, Albania y Macedonia).

B. Seminarios en la República Checa

En el cuarto trimestre de 2010, el Equipo provincial de reconstrucción en Logar (Afganistán) organizó una visita de estudio de 10 días de duración a la República Checa, destinada a altos funcionarios de la provincia de Logar, entre ellos, a fiscales y oficiales penitenciarios, encargados de hacer cumplir la ley, fuerzas y estructuras de seguridad. En diciembre de 2010, el Ministerio de Justicia organizó un seminario para los países que integran la Asociación para el Oriente Medio sobre reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. El seminario fue cofinanciado por la Comisión Europea. El Ministerio de Justicia tiene previsto organizar un seminario similar para los países de los Balcanes occidentales y Turquía en junio de 2011.

^a El objetivo de la misión es coordinar los esfuerzos afganos e internacionales para asegurar la paz y la seguridad para el pueblo afgano en una sociedad basada en el estado de derecho, la buena gobernanza, los derechos humanos y el desarrollo económico y social sostenible.

^b La República Checa ha aportado cinco oficiales de policía a esta Misión, que rotan una vez por año y se desempeñan como instructores, compartiendo su experiencia con candidatos locales interesados en postularse para puestos en la policía, y también con policías experimentados.

C. Equipo provincial de reconstrucción de Logar (Afganistán)

El Equipo provincial de reconstrucción checo es un proyecto conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa de la República Checa, y desde marzo de 2008 ha estado participando en Logar en una operación de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, dirigida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y establecida por el Consejo de Seguridad en su resolución 1386 (2001). El Equipo está integrado por 11 expertos civiles del Ministerio de Relaciones Exteriores y 261 efectivos del ejército checo.

El componente civil del Equipo ha ejecutado varios proyectos de fomento de la capacidad, por ejemplo, la construcción de establecimientos penitenciarios provinciales, la reconstrucción del edificio de los tribunales provinciales, y la construcción de una base de entrenamiento para la Policía Nacional y el Ejército Nacional del Afganistán. Además, la República Checa contribuye al Fondo Fiduciario para el orden público del Afganistán, establecido por el PNUD.

El componente militar del Equipo viene impartiendo capacitación a la Policía Nacional del Afganistán desde 2009. Al principio, la capacitación se ofrecía según las necesidades; en la actualidad, sin embargo, los equipos de capacitación checos cuentan con la certificación del programa de desarrollo de distritos en aspectos específicos. Los cursos incluyen instrucción básica sobre la legislación y la normativa aplicables a la labor policial, así como sobre derecho penal y constitucional. Por sugerencia del componente militar del Equipo, los cursos jurídicos son dictados por fiscales locales, con experiencia en derecho penal. La participación de esos fiscales constituye una innovación muy exitosa, pues la enseñanza se ha vuelto más eficaz y a la policía le resulta más fácil cooperar con los fiscales después del asistir al curso. El equipo de capacitación, compuesto ahora de efectivos de la policía militar checa, sigue siendo uno de los principales proveedores de formación de la Policía Nacional del Afganistán en Logar.

En 2010 los efectivos de policía checos desplegados bajo la dirección de la Misión de Policía de la Unión Europea en distintas regiones del Afganistán se concentraron en la base de operaciones de avanzada de Shank, en Logar. Esa concentración permitió que la Misión de Policía de la Unión Europea participara en la capacitación que dicta el componente militar del Equipo para la Policía Nacional del Afganistán, ofreciera orientación a administradores de nivel intermedio de la Policía Nacional del Afganistán y contribuyera al fomento del estado de derecho (el equipo de policía de la base de operaciones de avanzada de Shank cuenta con un especialista en estado de derecho). El equipo de policía de la base de Shank recibe apoyo logístico del componente militar del Equipo provincial de reconstrucción.

D. La República Checa en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad

Entre los objetivos de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad figura reducir las capacidades y la voluntad de los insurgentes y apoyar la reconstrucción y el desarrollo, lo que muestra que las cuestiones relacionadas con el estado de derecho y la justicia de transición son pertinentes a esta operación. Las unidades del ejército checo bajo las órdenes de la Fuerza ofrecen capacitación a la

Policía Nacional del Afganistán, que es en la actualidad su única tarea directamente relacionada con el estado de derecho.

Los asesores jurídicos y el personal de la policía del Equipo de Tareas Spartan, del Ejército de los Estados Unidos, que atiende las operaciones en Logar y Wardak, aplican el programa de la Fuerza sobre el estado de derecho. El Equipo de Tareas Spartan y el tercer contingente del ejército checo (este contingente, que opera bajo el mando de la Fuerza, contaba con un especialista en estado de derecho), mantienen una relación oficiosa de cooperación respecto de las reuniones celebradas con los magistrados judiciales locales, celebran consultas para mejorar la eficiencia de la administración y también sobre la capacitación de la policía local.

E. Otras actividades

La República Checa participa activamente en las misiones de observación electoral de la Unión Europea, y envía varias docenas de observadores electorales todos los años. En el marco de su programa para fomentar la transición, apoya proyectos de organizaciones checas sin fines de lucro en sociedades que han pasado por un conflicto (el Iraq, Georgia, Kosovo), por ejemplo, proyectos relacionados con la lucha contra la corrupción, el fomento de la capacidad del gobierno local y el fortalecimiento de la sociedad civil.

F. Lecciones extraídas de las actividades de la República Checa en la esfera del estado de derecho y la justicia de transición en situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto

Es esencial participar activamente en zonas en las que puede haber riesgos. La labor realizada por expertos en zonas de conflicto ayuda a estabilizar la situación de seguridad en la región, y ello a la larga favorece la situación de seguridad interna de la República Checa (pues reduce las corrientes migratorias provenientes de la región en conflicto, aumenta la capacidad del gobierno local para combatir la delincuencia organizada, etc.).

A la luz de la experiencia adquirida en el Afganistán, la República Checa estima que uno de los objetivos en la esfera del estado de derecho y la justicia de transición en situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto debería ser el fortalecimiento de los vínculos entre los sistemas de justicia oficiales y oficiosos y el aumento de la implicación nacional con arreglo a normas internacionales fundamentales.

La República Checa apoya activamente todas las medidas tendientes a mejorar el intercambio de información, experiencias y expertos entre las misiones de la Unión Europea (y los organismos responsables de estas misiones), los organismos encargados de la seguridad interna de la Unión Europea (como la Oficina Europea de Policía) y las misiones de las Naciones Unidas. La mayor cooperación ampliada es una de las formas para aumentar la eficacia de la lucha contra la delincuencia organizada, el contrabando de drogas y el terrorismo.

Dinamarca

[Original: inglés]

La promoción del estado de derecho, el acceso a la justicia y la seguridad son objetivos fundamentales de la cooperación que presta Dinamarca para el desarrollo^a. Dinamarca estima que el establecimiento de una administración de justicia que funcione bien y se sustente en los derechos humanos universales debe ser un objetivo en sí mismo. También considera que el estado de derecho es fundamental para la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible, dado que mediante él se promueven y protegen los derechos sociales y económicos, los medios de vida y los derechos personales y de propiedad. Una administración de justicia que funciona bien también permite que todos puedan exigir el respeto de sus derechos y obtener un rescarcimiento (tanto del Estado como de otras personas) cuando sus derechos hayan sido infringidos. También contribuye a la paz y la seguridad, pues proporciona mecanismos para gestionar y dirimir conflictos y controversias, y responder a recursos de queja; también constituye una forma de poner fin a la impunidad.

En este contexto, Dinamarca apoya los programas de gran escala y a largo plazo en la mayoría de los países a los que se ha asociado, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y el estado de derecho. Reconociendo que los sistemas de justicia oficiosos y los mecanismos oficiosos de solución de controversias son los que se utilizan para resolver la mayoría de las controversias en muchos de esos países, el programa a menudo aborda las estructuras, las instituciones y los procesos oficiales y oficiosos, así como los actores estatales y no estatales. El programa trata en general de una o varias de las siguientes cuestiones: la elaboración y ejecución de estrategias y planes a nivel de todo un sector o institución; la reforma constitucional o legislativa; la capacitación del personal del sector de la justicia; el desarrollo y la modernización de la infraestructura; la asistencia letrada o parajurídica; las actividades de promoción de la sociedad civil; los mecanismos alternativos y oficiosos de solución de controversias, como los sistemas jurídicos tradicionales y consuetudinarios y su vinculación al sistema de justicia oficial; y la vigilancia, la documentación y la presentación de informes sobre la situación de derechos humanos por parte de las instituciones nacionales de derechos humanos y/o las organizaciones de la sociedad civil.

Los países en conflicto o que acaban de salir de un conflicto enfrentan varios problemas puntuales de seguridad y justicia. Los países que acaban de salir de un conflicto violento necesitan resolver los problemas de su pasado iniciando procesos de reconciliación a nivel nacional y comunitario, y respondiendo de distinta manera a los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y las

^a El marco estratégico de Dinamarca para el apoyo del estado de derecho está formado por la *Estrategia general para la cooperación de Dinamarca al desarrollo* (2010), en que la libertad, la democracia y los derechos humanos constituyen uno de los cinco pilares temáticos prioritarios; la *Cooperación Internacional sobre Derechos Humanos – Estrategia para el enfoque del Gobierno* (2009); y la *Democratización y los Derechos Humanos – Prioridades Estratégicas para el Apoyo de Dinamarca a la Buena Gobernanza* (2009). La promoción de la democratización, la buena gobernanza y los derechos humanos, incluido el estado de derecho, figuran como una de las prioridades de la política de Dinamarca para con los Estados frágiles (2010).

violaciones graves de los derechos humanos. Los procesos tendientes a averiguar y documentar “la verdad”, identificar a los responsables, reconciliar a grupos opositores y obtener resarcimiento por infracciones pasadas (justicia de transición) son complejos y requieren una variedad de mecanismos de respuesta. En algunos casos, los crímenes y los conflictos jurídicos puntuales también son consecuencia, directa o indirecta, de conflictos violentos, como el aumento de la tasa de crímenes violentos en las comunidades cuya cohesión social se ha destruido; los litigios sobre tierras que enfrentan a las personas y comunidades que permanecieron en el lugar del conflicto con los desplazados; y la conversión de grupos previamente militarizados en grupos de delincuencia y violencia organizada.

Es necesario resolver estas cuestiones junto con la tarea, a menudo inmensa, de renovar los procesos para la construcción del Estado y la necesidad de impulsar el desarrollo humano y económico. El restablecimiento de los sistemas de justicia y seguridad nacionales relacionados con el estado de derecho es un componente esencial de la agenda para la construcción del Estado. Dinamarca apoya varias iniciativas para resolver cuestiones relacionadas con la justicia de transición y con el establecimiento y el fortalecimiento de los sistemas de justicia y seguridad nacionales, firmemente arraigados en los principios de la implicación nacional y la sostenibilidad.

Algunos ejemplos de este compromiso de Dinamarca con el estado de derecho, son su apoyo al proceso de paz de Juba en Uganda septentrional, en que se ha hecho gran hincapié en la justicia de transición, y se prevén la rendición de cuentas y la reconciliación y en que se ha establecido una División de Crímenes de Guerra del Tribunal Superior; la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la resolución de los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad ilegales y organizaciones de seguridad clandestinas; así como los mecanismos de solución de controversias y acceso a la justicia a nivel comunitario en el Afganistán, Sudán del Sur y Somalia. Estos últimos serán fortalecidos con nuevas iniciativas más integrales que aborden las necesidades comunitarias y de fomento de la capacidad y el desarrollo institucional de los sectores de la justicia y la seguridad, apoyando el fortalecimiento del control de fronteras, en particular los guardacostas y las fuerzas regionales de mantenimiento de la paz.

Dinamarca apoya y promueve el fortalecimiento de las actividades y la capacidad de las Naciones Unidas para apuntalar y apoyar los procesos de reconciliación nacional, los mecanismos de justicia de transición y los sistemas de justicia y seguridad nacionales. Esto es fundamental, dado que las Naciones Unidas son a menudo el primer actor internacional sobre el terreno que está en condiciones de apoyar las medidas iniciales que se adoptan en los procesos de construcción de los Estados, muchas veces penosos y difíciles, en los que es necesario que el estado de derecho, los derechos humanos, el acceso a la justicia y la seguridad ocupen un lugar central para asegurar un marco de desarrollo humano y económico.

Promoción de la capacidad nacional para juzgar crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional

Desde el establecimiento de la Corte Penal Internacional, Dinamarca ha sido una firme defensora de la institución en términos de la asistencia política, económica y práctica.

En su calidad de coordinadora dentro de la Asamblea de los Estados Partes, Dinamarca, junto con Sudáfrica, ha prestado especial atención al tema de la complementariedad positiva, es decir, a la cooperación orientada a fortalecer la capacidad nacional de los países (en desarrollo) para juzgar crímenes de competencia de la Corte, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Dado que la Corte solo enjuicia a las personas que han tenido mayor responsabilidad en la comisión de esos crímenes, es esencial fortalecer las administraciones de justicia nacionales de los países en desarrollo, para que estén en condiciones de investigar y juzgar el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por quienes no sean enjuiciados ante la Corte. Este enfoque implica apoyar el fortalecimiento de la administración de justicia en general. Si los países pueden juzgar esos crímenes por sí mismos, se evitan procesos penales ante la Corte Penal Internacional. Esta vinculación entre los mecanismos de enjuiciamiento internacionales y los sistemas jurídicos nacionales es, a juicio de Dinamarca, sumamente importante y tiene sentido desde una perspectiva tanto política como económica.

La labor sobre la complementariedad positiva ya ha generado mucho interés de los Estados, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil. Las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros, se están ocupando de las modalidades para hacer efectiva la complementariedad en su propio quehacer de desarrollo.

Finlandia

[Original: inglés]

Finlandia está profundamente comprometida con el fortalecimiento del estado de derecho en los planos nacional e internacional. El respeto del derecho internacional y en particular de los derechos humanos es un requisito indispensable para la paz y la seguridad internacionales. La promoción del estado de derecho es vital en la prevención de conflictos, así como en situaciones de conflicto y después de estos. La falta de capacidad judicial de un país no solo es una causa de conflictos sino también un impedimento para su solución sostenible. Del mismo modo, el estado de derecho es una parte integral del desarrollo sostenible. Esto ocurre en particular en situaciones posteriores a conflictos, cuando más necesidad hay de que se haga justicia pero las estructuras encargadas de aplicarla tal vez se han derrumbado o han perdido legitimidad. La cultura del estado de derecho, con tribunales independientes y un sistema jurídico que asegure la igualdad ante la ley y la responsabilidad jurídica y su funcionamiento y reforma están vinculados a la existencia de un entorno seguro y protegido y a la lucha contra la impunidad, a la aplicación de los acuerdos de paz y a la existencia de mecanismos pacíficos para la solución de controversias. Finlandia hace hincapié en la importancia que tiene el estado de derecho como un tema pertinente a diversos ámbitos de trabajo en situaciones de conflicto o posteriores a estos y participa activamente en el restablecimiento del estado de derecho en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.

La Corte Penal Internacional y otros tribunales penales internacionales tienen la importante función de defender el estado de derecho en el plano internacional luchando contra la impunidad en relación con los crímenes internacionales más graves. Finlandia, entre otras cosas, subraya la importancia de lograr la ratificación universal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y su aplicación plena, así como de cooperar de manera efectiva con la Corte. La jurisdicción de la Corte se basa en la complementariedad. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar a nivel nacional los delitos internacionales más graves y enjuiciar a los responsables. Los esfuerzos por reforzar la capacidad de los sistemas jurídicos nacionales en esa esfera también han contribuido a fortalecer el estado de derecho en el plano nacional.

Tampoco se deben ignorar los mecanismos de justicia tradicional, que son igualmente pertinentes. No obstante, la justicia no solo debe ser retributiva, sino también restitutiva. Para las víctimas de un conflicto o las personas afectadas durante largo tiempo por la exclusión social puede ser importante poder contar su historia, en pie de igualdad con los demás miembros de la sociedad, o escuchar el reconocimiento oficial de las injusticias cometidas. Un elemento del concepto del estado de derecho es que hay que oír la opinión de las víctimas. Si las víctimas no sienten que se exige responsabilidad jurídica y que se aplica la ley de manera justa, su confianza en el estado de derecho se verá seriamente disminuida.

La imposición de sanciones selectivas plantea interrogantes sobre las garantías procesales y el estado de derecho. Finlandia subraya la necesidad de garantizar que haya procedimientos justos y claros para incluir a personas y entidades en las listas de los órganos sancionadores y excluirlas de ellas.

Las Naciones Unidas están en condiciones de prestar asistencia a los Estados para que mejoren y refuercen su capacidad nacional en relación con el estado de derecho. En sus actividades de cooperación para el desarrollo, Finlandia procura apoyar, siempre que es posible, las estrategias sectoriales nacionales, y promueve la armonización de la asistencia con las prioridades nacionales. La asistencia es especialmente necesaria cuando ocurre un conflicto y después de este. El diálogo y la participación de la sociedad civil en la reforma del sector de la justicia son vitales para el éxito del proceso. Asimismo, resultan esenciales la coordinación y coherencia en la actuación de las distintas entidades de las Naciones Unidas, entre las Naciones Unidas y el Banco Mundial y con diversos agentes bilaterales. En las Naciones Unidas, el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, apoyado por la Dependencia sobre el Estado de Derecho, es un mecanismo en el que se pueden integrar y consolidar provechosamente las funciones y responsabilidades de entidades y organismos diversos de las Naciones Unidas.

Los Estados y las sociedades implicadas en conflictos tienen la responsabilidad de resolver cuestiones pertinentes a la justicia de transición, incluidas las relativas a la paz y la justicia. Debe quedar claro que las decisiones que se adopten deben contar con el apoyo de la población local. La dificultad consiste en combinar de manera equilibrada la paz y la justicia. Las violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no pueden olvidarse en aras de alcanzar la paz. En todos los acuerdos de paz debería incluirse el compromiso de defender los derechos humanos y respaldar la rendición de cuentas y una guía concreta para lograrlo. Es indispensable promover y apoyar el estado de derecho en los Estados frágiles a fin

de facilitar los procesos de consolidación del Estado y creación de instituciones. Toda situación posterior a un conflicto plantea dificultades para el desarrollo del estado de derecho, pues son muchos los problemas que hay que resolver, como la pérdida de material, instituciones y capacidad humana, la falta de un marco jurídico adecuado, la inseguridad, las violaciones de los derechos humanos y la cultura de impunidad, las amenazas a la independencia e imparcialidad de los jueces, la falta de confianza en las estructuras existentes, y las causas profundas del conflicto. En las situaciones de conflicto también es necesario ofrecer indemnización a las víctimas del conflicto. La participación de las mujeres tiene que ser una parte integral de todos los procesos de paz en consonancia con la resolución 1325 (2000) y las resoluciones posteriores 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) y 1960 (2010).

El estado de derecho es vital para el desarrollo de cualquier país. En los Estados frágiles, el estado de derecho es esencial para apoyar la consolidación del Estado y la creación de instituciones. El buen funcionamiento del sistema del estado de derecho es fundamental para el desarrollo económico pues garantiza la base jurídica en que se sustenta la actividad económica, así como las leyes y normas que guían la labor de las autoridades, previniendo así la corrupción y la arbitrariedad. El estado de derecho establece los instrumentos y medios de participación democrática y proporciona también mecanismos para presentar quejas sobre el funcionamiento de las autoridades.

Finlandia promueve la lucha contra la impunidad con el apoyo que periódicamente presta a las actividades en ese ámbito. Presta apoyo a la Corte Penal Internacional y a las distintas organizaciones relacionadas con ella, como por ejemplo la Coalición por la Corte Penal Internacional. Finlandia es un importante donante del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las Víctimas. Además, presta apoyo financiero a otros tribunales internacionales, como el Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya. Asimismo, apoya la labor que realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como las actividades de lucha contra la impunidad que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil.

Finlandia considera que la creación de capacidad y la prestación de asistencia en la esfera del estado de derecho es un sector fundamental de la asistencia para el desarrollo, sobre todo en sociedades que se recuperan de conflictos. La prestación de ese tipo de asistencia debería basarse en las necesidades de los países receptores. Finlandia asigna a este sector anualmente fondos de cooperación para el desarrollo por valor de más de 30 millones de euros.

Kenya

[Original: inglés]

A. Antecedentes

Los conflictos armados, ya sean internacionales o internos, causan gran sufrimiento a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. En una situación de conflicto no existe el estado de derecho y no se respetan los derechos humanos. No obstante las diversas medidas preventivas promovidas y aplicadas por la comunidad internacional, es inevitable que se produzcan conflictos armados debido a la

ocurrencia de cambios políticos y el surgimiento de facciones o a las disputas por el poder, lo que demuestra que las medidas preventivas por sí solas no son suficientes. En una situación grave de ese tipo es necesario recurrir a la justicia de transición para atajar las repercusiones de un conflicto armado después de que este termina, lo que a la larga propicia la adopción de medidas para prevenir el resurgimiento del conflicto armado. Sin embargo, la aplicación de la justicia de transición después de un conflicto ha resultado problemática debido a varios factores, entre los cuales se destaca el hecho de que los Estados, a fin de lograr la estabilidad política, prefieren aplicar la realpolitik y leyes de amnistía que benefician a los autores de graves violaciones de los derechos humanos. Lograr que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos rindan cuentas de sus actos sigue siendo un factor importante para el establecimiento de la justicia y la paz en situaciones posteriores a conflictos.

Los conflictos no son un fenómeno nuevo en Kenya. Hubo incidentes de violencia en las elecciones de 1992 y 1997. Más recientemente, los hechos de violencia ocurridos después de las elecciones de 2007/08 dejaron un saldo de 1.133 muertos, 3.561 heridos graves y más de 300.000 desplazados internos, según indicó un informe de la Comisión de investigación de la violencia poselectoral.

La experiencia adquirida en los dos últimos decenios ha demostrado con claridad que no es posible consolidar la paz en el período inmediatamente posterior a un conflicto ni mantenerla a largo plazo a menos que la población confíe en que se podrá obtener la reparación de las injusticias sufridas a través de estructuras legítimas encargadas del arreglo pacífico de las controversias y la correcta administración de justicia. Al mismo tiempo, la creciente vulnerabilidad de las minorías, las mujeres y los niños, los prisioneros y detenidos, las personas desplazadas, los refugiados y otros, que es manifiesta en todas las situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, añade un componente de urgencia a la necesidad de restablecer el estado de derecho.

Mientras que la justicia de transición se refiere al conjunto de actividades y procesos que pueden saldar de manera definitiva la deuda de injusticias y el recuerdo de las atrocidades cometidas en el pasado, el cambio constitucional responde a la necesidad de crear un nuevo marco de gobernanza que sea democrático y tenga en cuenta los derechos humanos. En Kenya, los dos procesos se están desarrollando simultáneamente según quedó estipulado en el programa IV del Acuerdo sobre los principios de la asociación para un gobierno de coalición (conocido popularmente como Acuerdo Nacional), con el que se puso fin a la violencia poselectoral.

El programa IV establece un proceso nacional a largo plazo de reconciliación y cicatrización de las heridas dejadas por el conflicto, que examina a profundidad el pasado del país. El programa también encomienda al Gobierno de coalición en el poder que promulgue una nueva constitución democrática antes de las siguientes elecciones generales, y que emprenda reformas amplias de las instituciones del Estado, incluidas las del sector de la seguridad y la justicia penal.

Con ese fin, a tenor de la Constitución vigente, se están llevando a cabo reformas para asegurar el fortalecimiento de las instituciones de manera que se respete en todo momento el estado de derecho. Las reformas se están realizando principalmente en los ámbitos del poder judicial, el sector de la seguridad, la oficina del Fiscal General y la oficina del Director de la Fiscalía Pública, que son

fundamentales para la administración de la justicia de transición y la promoción y protección del estado de derecho.

B. Progresos realizados en Kenya

Comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación

En julio de 2009 el Gobierno creó la Comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación para que dirigiera el proceso nacional de búsqueda de la verdad, recuperación y reconciliación. La Comisión puede llegar a ser un mecanismo importante que permita al país cambiar de manera permanente el comportamiento en materia de derechos humanos.

La Comisión está en vías de reunir y comparar las opiniones de personas de diferentes partes del país sobre sus experiencias en relación con las violaciones de los derechos humanos.

El poder judicial

La existencia de un poder judicial independiente es un elemento esencial de un sistema judicial que garantice el ejercicio de los derechos humanos de conformidad plena con las normas internacionales. Cada Estado tiene la obligación de asegurar que el poder judicial sea un brazo independiente del gobierno.

El propio poder judicial como institución y los funcionarios judiciales deben sentirse libres para desempeñar sus funciones profesionales sin injerencia de otros agentes, ya sean externos o internos. Esa independencia debe estar protegida en la legislación y en la práctica.

Con ese fin, Kenya, al amparo de la dispensa constitucional vigente, está dando pasos importantes en la reforma del poder judicial. En primer lugar, se ha reconstituido la Comisión de la Magistratura de conformidad con el artículo 172 de la Constitución. La Comisión de la Magistratura es un órgano que facilita la independencia y rendición de cuentas de los jueces y la administración de justicia de forma eficiente, eficaz y transparente.

En segundo lugar, se están haciendo trámites para nombrar al juez que, conforme a la nueva estructura, ejercerá las funciones de Presidente del Tribunal Supremo, órgano creado recientemente en virtud del artículo 163 de la Constitución. La necesidad urgente de efectuar cambios en el poder judicial queda demostrada por el hecho de que la Constitución establece, en su apéndice 6, que el magistrado que ocupaba ese cargo será el primer funcionario gubernamental de alto rango en dejar su puesto tras la promulgación de la Constitución. Ese paso ya se ha dado. Asimismo, se estableció la oficina del Vicepresidente del Tribunal Supremo.

En tercer lugar, recientemente se promulgó la Ley núm. 2 de verificación de antecedentes de jueces y magistrados, de 2011, con el objetivo de establecer mecanismos y procedimientos para investigar los antecedentes de jueces y magistrados de conformidad con el artículo 23 del apéndice 6 de la Constitución. El proceso de investigar los antecedentes de los funcionarios judiciales está encaminado a fortalecer el poder judicial, pues permite evaluar la integridad de los jueces a fin de determinar si son idóneos para ocupar cargos en el sistema judicial.

En cuarto lugar, se promulgó la Ley núm. 1 del servicio judicial, de 2011, que otorga a la magistratura la autonomía financiera necesaria para administrar con eficacia sus asuntos y programas, aplicar medidas disciplinarias y destituir a funcionarios judiciales y establecer el Consejo Nacional de Administración de Justicia, encargado de formular políticas relativas a la administración de justicia.

Se ha producido también una ampliación de los tribunales. La construcción del nuevo complejo jurídico de Milimani en Nairobi constituyó un hito en la ampliación física del sistema. Los nuevos juzgados cuentan con sistemas automatizados para agilizar los procesos judiciales y garantizar la administración de justicia para beneficio de la ciudadanía.

El sector de la seguridad

Las experiencias adquiridas en sociedades de transición y en situaciones posteriores a conflictos, como en Sierra Leona y Sudáfrica, indican que la mejora de la seguridad y la gobernanza contribuye a lograr la paz y a crear condiciones apropiadas para que tengan lugar la reconstrucción social y el desarrollo auténticos.

La crisis poselectoral reveló claramente las graves deficiencias del sector de la seguridad de Kenya, cuya imagen quedó muy empañada por los actos ilícitos y las acciones injustificables de algunos de sus miembros. Según informó la Comisión de investigación de la violencia poselectoral, la mayoría de los elementos del sector de la seguridad abandonaron toda pretensión de profesionalidad durante la crisis. El Gobierno procedió entonces a establecer el Grupo de Trabajo nacional de reforma de la policía, encargado de examinar las reformas del cuerpo policial.

A partir de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo y la Comisión, y de conformidad con la Constitución, el Gobierno presentará al Parlamento cinco proyectos de ley para reformar la fuerza de policía: un proyecto de ley sobre una entidad independiente de supervisión de la policía, un proyecto de ley sobre las medidas de reforma de la policía, un proyecto de ley sobre el servicio nacional forense, un proyecto de ley sobre la Comisión del Servicio Policial y un proyecto de ley sobre los proveedores de servicios de seguridad.

La contratación de agentes de policía en Kenya también está incluida en la reforma de la policía. Los reclutas de la policía ordinaria y de la policía administrativa se formarán juntos en consonancia con el recién revisado programa de adiestramiento, que amplía el período de formación de seis (6) a nueve (9) meses.

Oficina del Director de la Fiscalía Pública

La oficina del Director de la Fiscalía Pública fue establecida en virtud del artículo 157 de la Constitución. A diferencia de la antigua dispensa constitucional, según la cual formaba parte de la oficina del Fiscal General, la nueva dispensa la convierte en un órgano autónomo encargado de iniciar y tramitar acciones judiciales contra particulares en cualquier tribunal. Esta oficina tiene un papel fundamental en la promoción del estado de derecho.

El Organismo de protección de testigos, adscrito a la oficina del Fiscal General, está encargado de proporcionar seguridad en condiciones especiales a quienes prestan testimonio en los tribunales. El Organismo fue creado con arreglo al artículo 3A de la Ley de protección de testigos de 2006 (modificada en 2010) con el fin de responder a las dificultades que venía enfrentando el país para investigar y

enjuiciar a las personas implicadas en los incidentes de violencia ocurridos con posterioridad a las elecciones de 2007/08 y otros delitos. Su establecimiento marcó un momento importante en el sistema de justicia penal no solo de Kenya sino de África, pues Kenya es el segundo país, después de Sudáfrica, en crear un programa de ese tipo.

Sistemas de justicia no oficiales

Los mecanismos tradicionales y oficiosos de solución de controversias constituyen un medio valioso para tratar de resolver el tipo de controversia que en épocas pasadas ha dado lugar a conflictos en Kenya. Como tendencia, la violencia se ha desencadenado en regiones donde habían surgido malentendidos y conflictos entre las distintas comunidades étnicas a causa de la asignación y el uso de la tierra y de recursos naturales como los pastos y el agua.

Los mecanismos tradicionales y oficiosos de solución de controversias pueden ayudar a aliviar las tensiones oportunamente y lograr que las partes en conflicto negocien, ofreciendo así una opción distinta de la violencia y el uso de la fuerza. Esos mecanismos también pueden proporcionar un foro más accesible desde el punto de vista financiero, con el cual las partes se sientan más identificadas que con los procesos jurídicos oficiales.

La Constitución vigente se presta a aceptar los mecanismos tradicionales y oficiosos de solución de controversias y a la vez permite que se recurra a ellos de conformidad con la justicia y la Carta de Derechos. El artículo 159 2) c) de la Constitución establece que, como principio rector del ejercicio de la autoridad judicial, “se deberán promover otras formas de solución de controversias, incluidos ... mecanismos tradicionales de solución de controversias”. Además, el artículo 67, relativo a la Comisión Nacional de Tierras, encomienda a este órgano la tarea de promover el uso de mecanismos tradicionales de solución de controversias para resolver conflictos por la tierra. Aunque sea pronto para afirmarlo, el establecimiento y reconocimiento de esos mecanismos son hechos alentadores.

Justicia de transición internacional

La esfera de la justicia de transición se ha ampliado con el tiempo y ya no se limita a los mecanismos de justicia de transición nacionales. De manera general, se acepta que todos los Estados tienen la obligación de adoptar medidas razonables para prevenir la comisión de violaciones de los derechos humanos, realizar investigaciones serias de las violaciones cuando se produzcan, imponer sanciones apropiadas a los autores de esas violaciones, y asegurar que se ofrezca reparación a las víctimas de las violaciones.

Esos principios se han visto confirmados expresamente por las decisiones de diversos tribunales y refrendados en las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, como el Comité de Derechos Humanos. La creación en 1998 de la Corte Penal Internacional también fue significativa en ese sentido, pues en su estatuto se consagran las obligaciones de los Estados que son de importancia crucial para la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos de las víctimas.

Kenya promulgó la Ley de crímenes internacionales, que incorpora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su derecho interno. Además, el artículo 2 5) de la Constitución de Kenya establece que el derecho internacional consuetudinario formará parte de la legislación de Kenya. Esto significa que el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad se consideran automáticamente crímenes conforme a la legislación de Kenya.

Kenya considera que la justicia de transición internacional es necesaria como complemento de los mecanismos nacionales ya establecidos.

C. Conclusión

Kenya ha hecho esfuerzos encomiables para establecer un marco constitucional, legislativo e institucional que garantice la justicia y la paz en situaciones posteriores a conflictos. El país está en vías de aprobar leyes, establecer instituciones y aprobar nombramientos que son esenciales para la administración de la justicia de transición y la promoción y protección del estado de derecho.

Nueva Zelandia

[Original: inglés]

Nueva Zelandia, que durante mucho tiempo ha promovido el derecho internacional y el estado de derecho, sigue empeñada en fortalecer el estado de derecho en los planos tanto nacional como internacional y fue uno de los primeros países en aprobar disposiciones legislativas que establecen la obligación de los abogados de “respetar el estado de derecho”. Nueva Zelandia considera que el estado de derecho es fundamental en la esfera de la justicia de transición, en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.

En consecuencia, Nueva Zelandia acoge complacida el examen de estas cuestiones en la Sexta Comisión y desearía ofrecer al respecto las siguientes observaciones, que tienen que ver con la experiencia del país en el proceso de solución de las reclamaciones dimanantes del histórico Tratado de Waitangi. Resulta particularmente interesante el papel fundamental que desempeña el Tribunal de Waitangi, encargado de facilitar el resarcimiento en casos de violaciones retrospectivas del Tratado. La jurisdicción del Tribunal es única dentro de Nueva Zelandia y a nivel mundial no existen casos similares.

A. Antecedentes del Tribunal de Waitangi

El Tratado de Waitangi de Nueva Zelandia, firmado en 1840 por los maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelandia, y la Corona británica, está considerado uno de los documentos constitucionales fundacionales del país. El Tratado establece el marco de las relaciones entre la Corona y los maoríes.

Sin embargo, en consonancia con los principios constitucionales, el Tratado de Waitangi obliga a la Corona solo en la medida en que sus disposiciones se incorporen en la legislación. En consecuencia, los maoríes que deseaban denunciar

infracciones del Tratado tenían pocos medios de obtener resarcimiento hasta que en 1975 se estableció el Tribunal de Waitangi.

Con la Ley del Tratado de Waitangi de 1975, el Parlamento de Nueva Zelandia creó el Tribunal de Waitangi para establecer un procedimiento jurídico que permitiera investigar las reivindicaciones de los maoríes con respecto al Tratado.

La creación del Tribunal respondió al auge en las décadas de los sesenta y setenta de las protestas de los maoríes por situaciones en las que no se había respetado el Tratado de Waitangi.

El proceso de investigaciones del Tribunal ayuda a solucionar reivindicaciones retrospectivas dimanantes del Tratado y de esa forma contribuye a resolver cuestiones pendientes entre los maoríes y la Corona. El Tribunal investiga también reclamaciones contemporáneas en relación con el Tratado. Las reclamaciones solo pueden presentarse contra la Corona en su calidad de parte en el Tratado.

B. Función del Tribunal de Waitangi en el proceso de reclamaciones dimanantes del Tratado

El Tribunal de Waitangi desempeña una función importante en el proceso más amplio de solución de las reclamaciones dimanantes del Tratado entre los maoríes y la Corona. Los demandantes pueden elegir entre negociar directamente con la Corona (por conducto de la Oficina de reclamaciones dimanantes del Tratado, órgano responsable de negociar la solución de las reclamaciones entre los maoríes y la Corona) o pedir al Tribunal que examine las reclamaciones antes de entablar la negociación. Por lo general, un grupo de demandantes que desea entablar negociaciones directas con la Corona debe dejar de tramitar su reclamación o reclamaciones ante el Tribunal, aunque pueden hacerse excepciones (por ejemplo, cuando se considere que a los efectos de los registros históricos es importante disponer de un informe completo). La resolución convenida de reclamaciones dimanantes del Tratado también se hace efectiva mediante disposiciones legislativas aprobadas por el Parlamento.

El Tribunal no funciona como un tribunal de carácter contencioso sino como una comisión de investigación que determina si una reclamación está bien fundada y expone de manera resumida si se han infringido los principios del Tratado de Waitangi y en qué consiste la infracción cometida. Sus conclusiones se publican en un informe oficial que se presenta al Ministerio de Asuntos Maoríes de Nueva Zelandia. El Tribunal puede formular recomendaciones prácticas al Gobierno de Nueva Zelandia sobre lo que puede hacerse para compensar al demandante (o demandantes) o para eliminar el daño o los perjuicios que hayan sufrido. Si bien las recomendaciones del Tribunal no son vinculantes más que en determinados casos, la Corona las examina. Con ese fin, el Ministerio de Asuntos Maoríes de Nueva Zelandia prepara un informe anual en que se examinan los progresos realizados por la Corona en la aplicación de las recomendaciones del Tribunal. Es importante señalar que el Tribunal puede formular recomendaciones vinculantes en relación con determinados activos de valor comercial que sean propiedad de la Corona (como bosques y propiedades de entidades estatales). Sin embargo, por lo general la Corona y los grupos tribales se han puesto de acuerdo sobre la indemnización que debe ofrecerse por esos activos, evitando así nuevas demandas.

El Tribunal procura valorizar el proceso de solución de reclamaciones realizando investigaciones sólidas e identificando a todas las partes implicadas y a sus representantes, a fin de aclarar las cuestiones esenciales, resolver siempre que sea posible las cuestiones problemáticas y llegar al final del proceso con partes que estén dispuestas a negociar un acuerdo. Las audiencias del Tribunal también ofrecen a los demandantes la oportunidad de exponer sus casos y plantear sus reivindicaciones de manera tal que queden registradas oficialmente. Cabe considerar por tanto que el proceso ayuda a los demandantes a pasar de la etapa de presentación de la reclamación a la de solución de la reivindicación.

C. Fondo de las reclamaciones presentadas al Tribunal de Waitangi

El Tribunal puede examinar toda reclamación presentada por maoríes, ya sean particulares o grupos, que desde 1840 se hayan visto perjudicados por leyes y reglamentos o actos, omisiones, políticas o prácticas de la Corona que sean incompatibles con los principios del Tratado de Waitangi.

Las reclamaciones pueden ser retrospectivas, por ejemplo si las personas reclaman compensación por tierras ancestrales, o contemporáneas, por ejemplo si los demandantes alegan que una política, medida u omisión actual del Gobierno viola los principios del Tratado. Se considera reclamaciones contemporáneas a las que han surgido desde 1992. Aunque se ha podido presentar reclamaciones retrospectivas desde 1985, en 2006 se decidió que las reclamaciones fundadas en injusticias históricas debían presentarse al Tribunal a más tardar el 1 de septiembre de 2008. Ello se debe a que puede haber un solapamiento en el origen geográfico de las reclamaciones y es importante que el Tribunal tenga conocimiento de todas las reclamaciones presentadas cuando realice sus investigaciones (y que la Corona disponga de esa información al negociar la liquidación de las reclamaciones).

Las reclamaciones presentadas se agrupan en distintas audiencias de manera que el Tribunal conozca al mismo tiempo de las reclamaciones relativas a cuestiones similares. Por ejemplo, las reclamaciones pueden desviarse por “distrito” (por ejemplo, las relacionadas con un determinado lote de tierras o con una localidad) o pueden ser “genéricas” (si están relacionadas con asuntos de interés nacional, como la política de inmigración).

D. Principios del estado de derecho y el Tribunal de Waitangi

En sus actuaciones, el Tribunal suscribe una serie de principios fundamentales para el estado de derecho. La defensa de esos principios es esencial para que el Tribunal mantenga su legitimidad y su función en un auténtico proceso de solución de reivindicaciones.

La creación de un Tribunal especializado, con jurisdicción retrospectiva, refleja el reconocimiento por parte de la Corona de que es necesario establecer un enfoque de principios, no arbitrario y debidamente aprobado para investigar el fondo de las reclamaciones maoríes sobre infracciones retrospectivas del Tratado cometidas por la Corona.

Separación de poderes. El Tribunal de Waitangi es un tribunal especializado independiente del poder ejecutivo. Su independencia realza su legitimidad pues propicia un proceso imparcial y creíble de examen de las reclamaciones maoríes. El Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda (por conducto de la Dependencia del Tribunal de Waitangi) está encargado de proporcionar los servicios de apoyo y de otra índole necesarios para que el Tribunal lleve a cabo su labor. El Tribunal también tiene competencia (que no tienen los tribunales de Nueva Zelanda) para revisar los acuerdos de solución de reclamaciones concertados entre la Corona y los maoríes y para examinar disposiciones legislativas a fin de asegurar que sean conformes a los principios del Tratado de Waitangi.

Participación en la adopción de decisiones. La composición del Tribunal refleja el principio de asociación inherente al Tratado de Waitangi, pues en él están representados tanto maoríes como no maoríes. Los demandantes y la Corona tienen la oportunidad de ser oídos por el Tribunal, de conformidad con los principios de la justicia natural.

Transparencia en la adopción de decisiones. El Tribunal procura realizar sus investigaciones de manera pública y transparente. Las audiencias del Tribunal, que se anuncian en los periódicos locales y regionales están abiertas al público por lo que todos pueden asistir a ellas. En la mayoría de los casos, la población puede acceder al registro de reclamaciones y a documentos incluidos en los expedientes de investigación de cada reclamación. Por último, las conclusiones del Tribunal se publican en informes oficiales que se presentan al Ministerio de Asuntos Maoríes y que el público puede consultar en el sitio web del Tribunal.

Transparencia procesal y seguridad jurídica. Las actuaciones del Tribunal se publican en su “Guide to the practice and procedure of the Waitangi Tribunal” (Guía de la práctica y los procedimientos del Tribunal de Waitangi). Cuando las circunstancias lo exigen (y si facilita el proceso), el Tribunal puede modificar determinados procedimientos o prácticas incluidos en la Guía.

E. El Tribunal como órgano bicultural

Habida cuenta de que el Tribunal tiene el objetivo de conciliar las reivindicaciones de los maoríes ante la Corona, la adopción de un enfoque bicultural en su funcionamiento es importante para ganar en legitimidad. En consecuencia, el Tribunal está compuesto por maoríes y no maoríes, y en cada sesión del Tribunal debe estar presente al menos un miembro maorí. Cuando sea conveniente, el Tribunal seguirá los protocolos maoríes al examinar las pruebas y comunicaciones maoríes. Es habitual que se preste testimonio en te reo (el idioma maorí) y el Tribunal alienta a que así se haga. El Tribunal cuenta con un servicio de interpretación. Las comunicaciones también pueden presentarse en te reo.

El Tribunal, por ser una comisión de investigación permanente en lugar de un tribunal propiamente dicho, goza de relativa flexibilidad. Su régimen es más inquisitivo que acusatorio y, en particular, puede realizar sus propias investigaciones. El Tribunal con frecuencia celebra audiencias en un marae (lugar tradicional de reunión) o en salones públicos, escuelas, juzgados o salas de conferencia. El Tribunal recibe tanto las pruebas técnicas como las presentadas con arreglo al derecho consuetudinario por los tangata whenua (la población indígena).

En sus actuaciones, el Tribunal también procura centrarse en los derechos e intereses colectivos o tribales.

Omán

[Original: árabe]

El Gobierno de Omán desea expresar su gratitud y reconocimiento por los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas y todas las comisiones para instituir el principio del estado de derecho en los planos nacional e internacional. El Gobierno desea aprovechar esta oportunidad para afirmar que el estado de derecho es una de sus principales prioridades a nivel nacional. Este principio es un pilar fundamental de la legislación vigente y guía a las autoridades encargadas de aplicar la ley y a las autoridades judiciales encargadas de enjuiciar a los autores de delitos. En el plano internacional, Omán, al igual que todos los países del mundo, se esfuerza por convertir el estado de derecho en uno de los principios rectores de sus relaciones con otros Estados y con las organizaciones regionales e internacionales. Cabe señalar que Omán considera que los instrumentos internacionales, que son la fuente primaria del derecho internacional, tienen fuerza de ley una vez que son ratificados por Su Alteza el Sultán, de conformidad con las normas constitucionales (artículo 75 de la Ley fundamental del Estado). Si hubiera discrepancia entre la legislación de Omán y un instrumento internacional debidamente ratificado, este último prevalecerá, por lo que esos instrumentos se subordinan únicamente a la Ley fundamental.

Omán está de acuerdo con los países que piden la adhesión universal al estado de derecho y su aplicación en los planos nacional e internacional, ya sea en tiempos de conflicto o en situaciones posteriores a conflictos, porque ello es indispensable para lograr los nobles objetivos a los que aspira la comunidad internacional, entre ellos la estabilidad, que sienta las bases del crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la lucha contra la delincuencia, la erradicación de la pobreza, el hambre y las enfermedades y la disminución de sus consecuencias, y la mitigación de los efectos de las guerras y los conflictos armados. Omán considera que la igualdad de todas las personas ante la ley es una condición necesaria para que haya justicia para todos. Considera además que es esencial que no se utilice el estado de derecho como instrumento de chantaje político porque ello acarrearía resultados contrarios al estado de derecho.

Qatar

[Original: árabe]

Qatar se esfuerza por promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional, tanto en el marco de las Naciones Unidas como mediante la cooperación bilateral o multilateral con los Estados Miembros.

El principio del estado de derecho se afirma en la Constitución y en la legislación penal de Qatar; también es aplicado por los tribunales competentes. En ese sentido, cabe señalar lo siguiente:

Artículos de la Constitución que proclaman el principio del estado de derecho

El artículo 129 establece que el estado de derecho es la base del gobierno en el Estado. La integridad del poder judicial y la imparcialidad de los jueces permitirán garantizar los derechos y las libertades.

El artículo 6 establece que el Estado debe respetar los tratados y convenios internacionales y debe procurar aplicar todos los tratados, cartas y convenciones internacionales en los que sea parte.

El artículo 34 establece la igualdad de derechos y deberes públicos de los ciudadanos.

El artículo 35 establece que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá discriminación por motivos de sexo, raza, idioma o religión.

El artículo 36 establece que se garantizará la libertad de las personas. Ninguna persona puede ser arrestada, detenida o registrada ni su libertad de residencia y circulación limitada más que de conformidad con la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas o a tratos degradantes. La tortura se considerará un delito punible por la ley.

El artículo 39 establece que se presumirá la inocencia del acusado mientras no se pruebe su culpabilidad en un tribunal, en un juicio en el que se respete el derecho del acusado a defenderse.

El artículo 40 establece que en la legislación se tipificarán todos los delitos y se establecerán todas las sanciones, que se aplicarán de conformidad con esas definiciones.

Código Penal

En cumplimiento del artículo 40 de la Constitución Permanente de Qatar, en el Código Penal se tipifican y categorizan los delitos y se establecen las sanciones correspondientes.

Código de Procedimiento Penal

El Código de Procedimiento Penal establece procedimientos bien definidos para celebrar juicios penales y garantizar el ejercicio de los derechos del acusado y proporcionarle acceso a todo tipo de medios de defensa. En virtud del Código de Procedimiento Penal, el sistema de los tribunales se divide en tres niveles: las salas de primera instancia, las salas de apelaciones y la sala de casación.

El Código de Procedimiento Penal dedica gran atención a la cuestión de las sanciones. El artículo 323 del Código establece que no podrá ejecutarse una sanción o medida prescrita por ley si un tribunal competente no ha emitido un fallo al respecto.

Cooperación judicial internacional

El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 407, establece que, sin perjuicio de los instrumentos internacionales vigentes en Qatar y sobre la base de la reciprocidad, las autoridades judiciales qataríes cooperarán con autoridades jurídicas

extranjeras e internacionales en relación con asuntos penales, de conformidad con las disposiciones del Código.

Eslovenia

[Original: inglés]

Eslovenia apoya plenamente el debate y las actividades de las Naciones Unidas en relación con el estado de derecho, en particular la labor del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y de la Dependencia sobre el Estado de Derecho. El respeto del estado de derecho es la base de la actuación de Eslovenia en los asuntos nacionales e internacionales. Eslovenia presentó anteriormente un informe sobre el estado de derecho, que fue incluido en el informe del Secretario General (A/65/318).

Esta respuesta se centra por tanto en la importancia del estado de derecho en sociedades devastadas por los conflictos y en el contexto de la justicia de transición. El establecimiento del estado de derecho en los países que acaban de salir de un conflicto, es esencial para asegurar una futura coexistencia pacífica en toda sociedad afectada por un conflicto. Es importante asegurar que las actuaciones judiciales sean justas e imparciales y que en ellas se determine la responsabilidad por graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, pues solo la justicia puede propiciar una paz duradera. Eslovenia, como Estado parte en el Estatuto de Roma, apoya activamente la labor de la Corte Penal Internacional, que es uno de los instrumentos internacionales más importantes para el enjuiciamiento de los crímenes más graves, y exhorta a todos los Estados a que cooperen plenamente con la Corte. Las actividades que llevan a cabo la Corte Penal Internacional y otros tribunales penales internacionales (para la ex Yugoslavia y Rwanda, entre otros) demuestran que la comunidad internacional no tolerará la impunidad por graves violaciones del derecho internacional humanitario. Eslovenia periódicamente hace contribuciones financieras a los tribunales, así como contribuciones voluntarias adicionales (por ejemplo al Tribunal Especial para Sierra Leona). Asimismo, presta especial atención a las víctimas de crímenes internacionales y es uno de los 10 principales donantes del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las Víctimas, al que ha aportado en total 51.500 euros.

Eslovenia está convencida de que se debe garantizar el estado de derecho en todos los niveles de las instituciones gubernamentales, así como su fiscalización eficaz por las organizaciones no gubernamentales. El funcionamiento transparente e imparcial de la administración pública es la base del desarrollo de las sociedades.

Eslovenia considera que la comunidad internacional está obligada a proporcionar asistencia a las sociedades afectadas por conflictos en consonancia con sus necesidades y solicitudes. Apoya firmemente los esfuerzos que despliegan las organizaciones internacionales para ejecutar programas de asistencia a las sociedades afectadas por conflictos, pues representan un paso importante en el empeño por lograr un mundo mejor en el futuro. Además, Eslovenia apoya las actividades de las organizaciones no gubernamentales, en las que muchas personas trabajan diligentemente para prestar asistencia a las sociedades afectadas en todos los ámbitos de la recuperación posterior a un conflicto. Eslovenia también está

tratando de prestar asistencia activa como miembro de la Unión Europea, así como asistencia bilateral directa a los países afectados.

Eslovenia está haciendo esfuerzos especiales para prestar asistencia a los países vecinos de los Balcanes occidentales en el ámbito de los asuntos de justicia e interior.

En el marco del proyecto de la Unión Europea sobre los instrumentos de justicia penal de la Unión, que tiene una duración de tres años, el Centro de Educación para la Justicia del Ministerio de Justicia de Eslovenia cooperó con la Academia de Justicia de Croacia. Veintisiete jueces y fiscales croatas asistieron a varios seminarios celebrados en Eslovenia, y el Centro de Educación para la Justicia organizó en Rijeka y Zagreb dos talleres sobre Eurojust y la Red Judicial Europea. Sobre la base del programa regional de preadhesión sobre protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los Balcanes occidentales, el Centro también organizó cursos de formación de jueces de Macedonia, en cooperación con la Oficina Europea de Patentes. El Ministerio de Justicia de Eslovenia y la República de Macedonia concertaron un memorando de cooperación que incluye la educación en materia de justicia. El “proceso Brdo” es una iniciativa eslovena puesta en marcha en marzo de 2010 con el objetivo de mejorar, entre otras cosas, la cooperación judicial en asuntos penales entre los Estados de los Balcanes occidentales.

El Ministerio del Interior de Eslovenia está tratando de transferir a los países de los Balcanes occidentales las normas de la Unión Europea y el espacio Schengen en los ámbitos de la migración y la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo mediante la ejecución de proyectos de cooperación interinstitucional y programas bilaterales de asistencia técnica. Dado que los países de los Balcanes occidentales ya forman parte del proceso de integración de la Unión Europea, se les debe asegurar asistencia técnica profesional y la transferencia de conocimientos técnicos y de experiencias. Tras la culminación exitosa del proceso de liberalización de visados para los países de los Balcanes occidentales, el Ministerio del Interior y la Comisión Europea han iniciado actividades para seguir impulsando reformas en los asuntos internos de los países de los Balcanes occidentales en el marco del “proceso Brdo”. Esos países recibirán así instrucciones claras sobre las reformas necesarias para que cada país alcance un nivel superior de armonización de su legislación nacional con la legislación de la Unión Europea antes de comenzar las negociaciones sobre el ingreso a esta organización. Se llevarán a cabo misiones de evaluación dos veces al año, en las que participarán expertos del Ministerio y de la Policía de Eslovenia; las primeras misiones tendrán lugar a fines de 2011.

Eslovenia también apoya la labor de las instituciones que prestan asistencia a sociedades afectadas por conflictos para que puedan establecer el estado de derecho en su sentido más amplio, sobre todo mediante la educación y la creación de un entorno de vida seguro y pacífico.

El Gobierno de Eslovenia, la organización no gubernamental Slovene Philanthropy y la municipalidad de Liubliana establecieron en 2002 la Fundación “Together” – Centro regional para el bienestar psicosocial de los niños, con el objetivo de proteger y mejorar el bienestar psicosocial de los niños de zonas afectadas por la guerra, conflictos armados, ataques terroristas, desastres naturales o accidentes tecnológicos. La misión de la Fundación consiste en ofrecer a los niños un futuro mejor y contribuir a la paz y la estabilidad de la región y más allá de sus

fronteras. Con ese fin, la Fundación moviliza expertos y recursos materiales eslovenos e internacionales. Los programas que ejecuta están ganando reconocimiento como una forma de asistencia para el desarrollo que tiene gran demanda. La Fundación ejecuta programas en Europa sudoriental, el Iraq, el Afganistán, Palestina y el Cáucaso del norte. Ha organizado numerosas conferencias internacionales, consultas y campamentos para voluntarios. La Fundación participa en conferencias internacionales y consultas aportando artículos profesionales y contribuciones. Envía contribuciones a publicaciones profesionales y publica material informativo que se ha traducido a otros idiomas.

Han pasado 13 años exactamente desde que en marzo de 1998 el Gobierno de Eslovenia decidió establecer el Fondo Fiduciario Internacional de remoción de minas y asistencia a las víctimas de minas en Bosnia y Herzegovina. Su objetivo principal era ayudar en la aplicación del Acuerdo de Dayton mediante la recaudación de fondos, la prestación de servicios y la administración de proyectos relativos a las minas. Con el tiempo, el Fondo ha ampliado sus actividades a otros países de los Balcanes occidentales afectados por las minas y contribuido a que se terminara la remoción de minas terrestres en Macedonia, Montenegro, Albania y Serbia. Se siguen ejecutando grandes proyectos relativos a las minas en Bosnia y Herzegovina y en Croacia. En este contexto, cabe puntualizar que la cooperación regional en los Balcanes occidentales, promovida y facilitada por el Fondo Fiduciario Internacional, ha resultado ser una importante medida de fomento de la confianza entre esos países. El Fondo Fiduciario Internacional se ha convertido en un centro de excelencia para la cooperación regional en lo que concierne a las actividades relativas a las minas. Los buenos resultados obtenidos en los países de la región fueron un incentivo para realizar actividades en otras partes del mundo. Aunque el Fondo Fiduciario Internacional sigue centrando su labor en los Balcanes, también está llevando a cabo proyectos relativos a las minas en otras regiones, como el Cáucaso meridional, el Asia central y el Oriente Medio. Desde su creación en 1998, ha organizado el desminado de más de 100 millones de metros cuadrados, facilitó el tratamiento de más de 1.000 sobrevivientes de accidentes con minas y apoyó el desarrollo de la capacidad de rehabilitación nacional y local en 12 países afectados por el problema de las minas. Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin la generosa asistencia de la comunidad internacional de donantes. Desde 1998 los donantes han aportado más de 330 millones de dólares de los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados Unidos de América, que es el mayor donante, ha contribuido más de 141 millones de dólares, y el Gobierno de Eslovenia, más de 7,7 millones de dólares.

Eslovenia desea llamar la atención sobre una cuestión particular. En muchas situaciones posteriores a conflictos, la comunidad internacional proporciona asistencia para la recuperación en el ámbito del estado de derecho, ayudando a establecer un nuevo sistema jurídico. En este contexto, los expertos internacionales acuden al país en cuestión con el propósito de facilitar la reconstrucción de la sociedad, pero con frecuencia las leyes que implantan se basan en modelos que están completamente desconectados de la estructura social, cultural y económica del Estado y, especialmente, de sus necesidades. En esos casos, las leyes no están integradas socialmente y son entregadas a la sociedad sin que haya una comprensión real de la forma en que deben aplicarse. Si bien en algunas ocasiones esa puede ser una buena solución a corto plazo, este enfoque suele crear problemas a largo plazo porque no se entienden bien las nuevas leyes, pues están desvinculadas del contexto

social en el que se han de aplicar. Además, es posible que el examen de la capacidad y competencia de las personas para identificar los problemas de la sociedad y resolverlos mediante disposiciones legislativas se aplase para un momento futuro, cuando la comunidad internacional ya se habrá ido y el país tendrá que arreglar sus problemas por su propia cuenta.

Eslovenia, con arreglo a su capacidad, seguirá contribuyendo a los esfuerzos de la comunidad internacional por ayudar en la recuperación de sociedades afectadas por conflictos, sobre todo en el establecimiento del estado de derecho.

Suecia

[Original: inglés]

Durante los conflictos armados se suelen cometer graves abusos contra la población civil. En algunos casos son tan graves que son caracterizados como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, lo que significa que sus autores no pueden recibir amnistía y que la Corte Penal Internacional puede intervenir para impartir justicia cuando los tribunales internacionales no pueden o no quieren hacerlo. Sin embargo, la mayoría de los autores de abusos no son llevados a la Corte Penal Internacional y a menudo escapan a toda forma de castigo. Ello se debe con frecuencia a la falta de voluntad política. Puede obedecer también a que el sistema nacional de justicia no es independiente o no es capaz de entablar acciones judiciales y llevar a los sospechosos a los tribunales. También es posible que se conceda amnistía a los responsables.

En ocasiones ocurre que se toman decisiones que a corto plazo parecen promover la paz en detrimento de la justicia. La concesión de amnistía es uno de esos casos. Sin una amnistía tal vez no se logre un acuerdo de paz. Al propio tiempo, cabe alegar que hacer justicia a las víctimas es importante para lograr una paz sostenible. No cabe duda alguna de que la impunidad que a menudo reina durante un conflicto armado y después de este debe cesar para que la sociedad pueda avanzar en una dirección democrática y sostenible.

Suecia promueve la justicia tanto en situaciones de conflicto como después de un conflicto. La elección nunca debe ser entre la paz y la justicia; solo las soluciones que satisfagan ambos intereses son compatibles con la política de Suecia. Más bien habrá que decidir entre distintos métodos (legislación nacional, legislación internacional, híbridos, etc.) y determinar el momento apropiado para adoptar una decisión. Suecia se ocupará de:

- Asegurar que quienes cometan graves delitos durante un conflicto sean llevados a la justicia y sancionados. Si no es posible hacerlo inmediatamente después del acuerdo de paz porque ello supondría una seria amenaza para la paz, deberá ser una prioridad tan pronto la paz se haya hecho más sostenible;
- Alentar a que se dé al propio Estado afectado la oportunidad de asumir la responsabilidad de hacer justicia a las víctimas de crímenes cometidos durante un conflicto, establecer sistemas viables y apropiados de justicia de transición y, en ambos casos, actuar de conformidad con las normas internacionales y con el sistema complementario en que se sustenta la Corte Penal Internacional. Se debe recurrir a la justicia nacional como primer recurso en el empeño por

determinar responsabilidades. Solo cuando los sistemas de justicia penal nacionales no logren hacer rendir cuentas de sus actos a los autores de crímenes, ya sea por incapacidad del sistema o por falta de voluntad de las autoridades locales, deberá entonces intervenir la comunidad internacional.

- Promover un sólido apoyo internacional al establecimiento y fortalecimiento de sistemas de justicia nacionales, por ejemplo, mediante la implantación de mecanismos de justicia de transición y mecanismos de justicia permanentes que puedan impedir que la sociedad vuelva a verse inmersa en un conflicto. Cabe a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar un importante papel en esos procesos.

Política de desarrollo de Suecia

En los últimos años Suecia ha prestado mayor atención a la interrelación entre las cuestiones de desarrollo y las cuestiones relativas a la gestión de los conflictos, la consolidación de la paz y el estado de derecho. Las guerras y los conflictos armados se cuentan entre los mayores obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza. El apoyo que Suecia presta en el contexto de la seguridad y el desarrollo como parte de sus actividades de cooperación internacional para el desarrollo tiene por tanto el objetivo general de contribuir al logro de una paz duradera que haga posible el desarrollo. El Gobierno de Suecia adoptó recientemente una política denominada “Paz y seguridad para el desarrollo”, en la que se esclarecen las aspiraciones del Gobierno en lo que respecta a la cooperación para el desarrollo en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos en el período 2010-2014. La política se aplica a iniciativas en todos los niveles, a saber, bilateral, regional y mundial, y orienta la actuación de Suecia en foros multilaterales. En ella se han designado tres esferas de acción prioritarias: a) la promoción de la paz (incluidas las instituciones del estado de derecho, principalmente las de justicia de transición), b) la promoción de la seguridad, y c) los dividendos de la paz.

Esa política pone de relieve la importancia de la consolidación de la paz y la construcción del Estado y define los obstáculos particulares con que tropieza la cooperación para el desarrollo en los países que sufren o han sufrido recientemente un conflicto. Después de un conflicto suele plantearse la necesidad, y también la oportunidad, de contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia de un país. En una situación de ese tipo, es especialmente importante ayudar a establecer un sistema de justicia que contrarreste la impunidad de los autores de graves crímenes. Con ello también se sientan las bases para contar, a largo plazo, con un sistema basado en el estado de derecho que funcione bien.

En las comunidades donde se han cometido abusos de consideración es importante crear mecanismos adaptados a cada situación dentro de los marcos judiciales nacionales e internacionales establecidos para exigir responsabilidades, marcos que gozan de amplia legitimidad entre los más afectados por las violaciones cometidas. Los mecanismos de ese tipo, que a menudo tienen un componente de reconciliación y fomento de la confianza, se han dado en llamar de “justicia de transición” en los contextos internacionales.

Agentes del estado de derecho: Organismo Sueco de Cooperación de Desarrollo Internacional y Academia Folke Bernadotte

El principal agente de la cooperación sueca para el desarrollo en el ámbito del estado de derecho es el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional, un organismo gubernamental adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Academia Folke Bernadotte es otro organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que trabaja por mejorar la coordinación y coherencia de las actividades de asistencia técnica y fomento de la capacidad mediante políticas, investigaciones, programas de formación y proyectos sobre el terreno.

Desde 2006, el estado de derecho en la administración pública ha sido un tema destacado en disciplina de investigaciones y políticas del programa del estado de derecho de la Academia Folke Bernardotte. En 2008, la Academia publicó un informe titulado “El estado de derecho en la administración pública: problemas y vías para avanzar en la consolidación de la paz y el desarrollo”. Basándose en estudios hechos sobre el terreno y en una serie de consultas con agentes internacionales, el informe señala que en la consolidación de la paz y la gestión de crisis la reforma del sector público raras veces se enfoca desde la perspectiva del estado de derecho. Ello afecta negativamente las actividades de reconstrucción, así como a las personas y grupos vulnerables que dependen de que la administración respete las leyes y proporcione acceso a los servicios en pie de igualdad y de forma transparente con un nivel mínimo de seguridad jurídica. El fortalecimiento del estado de derecho en el sector público permite proteger los derechos de las personas, facilita las actividades de reconstrucción y la estabilización y transición y aumenta la eficacia de la ayuda y asistencia internacionales. Como una actividad relacionada con el estado de derecho en la administración pública, la Academia Folke Bernardotte también ha iniciado investigaciones sobre nuevas constituciones en sociedades en crisis, haciendo especial hincapié en el control de las fuerzas de seguridad.

Participación de Suecia en las iniciativas de justicia de transición y estado de derecho

Suecia apoya a una amplia gama de agentes que participan en las iniciativas relacionados con la de justicia de transición y el estado de derecho. El Centro Internacional para la Justicia de Transición es una organización no gubernamental internacional líder en la esfera de las cuestiones normativas de la justicia de transición. El Centro trabaja en sociedades que salen de regímenes represivos o de un conflicto armado, así como en sociedades que han heredado problemas derivados de abusos cometidos en el pasado y que aún no se han resuelto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia ha prestado apoyo básico al Centro desde su creación.

El Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional ha apoyado los procesos de justicia de transición en muchos países, como Guatemala, El Salvador, el Perú, Colombia, Sudáfrica, Rwanda, la República Democrática del Congo, Liberia, Timor-Leste y Bosnia y Herzegovina. El apoyo prestado incluyó diversas iniciativas, como el apoyo a comisiones de la verdad, actividades con la sociedad civil en el marco de la justicia de transición, mecanismos de justicia,

incluidos los tradicionales y de derecho consuetudinario, entre otras actividades^a. Asimismo, expertos suecos han trabajado en régimen de adscripción en comisiones de la verdad y tribunales, por ejemplo, en Sudáfrica.

Además, Suecia participa en misiones y operaciones de la Unión Europea relacionadas con el estado de derecho en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), incluida la Misión de Policía de la Unión Europea en el Afganistán, que imparte formación a la Policía Nacional del Afganistán con el objetivo de ayudar a crear un cuerpo de policía sostenible y eficaz; la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, que apoya al sistema de justicia penal iraquí impartiendo formación relativa a la gestión de alto nivel y la investigación penal a funcionarios iraquíes de grado medio y superior; y la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, que supervisa, orienta y asesora a las autoridades de Kosovo específicamente a las de policía, del poder judicial y la aduana, en la esfera del estado de derecho. En esas misiones han participado jueces, agentes de policía, asesores políticos y expertos jurídicos de Suecia.

Experiencia adquirida: la función y el futuro de la justicia de transición nacional e internacional

No existe un modelo único para las iniciativas relativas al estado de derecho y la justicia de transición en sociedades que se encuentran en situaciones de conflicto o han salido de un conflicto. Las Naciones Unidas han reconocido que las soluciones prefabricadas no son aconsejables. Hay que seleccionar los enfoques más idóneos y adaptarlos a cada conflicto concreto y a los delitos específicos cometidos, teniendo en cuenta el contexto nacional y la información recabada en consultas nacionales celebradas con la sociedad civil y las víctimas. La experiencia adquirida por otros países puede utilizarse como punto de partida para el debate y la adopción de decisiones a nivel nacional. No obstante, la experiencia ha demostrado que al formular los procesos nacionales e internacionales de justicia de transición deben tomarse en consideración los aspectos generales siguientes:

- a) El liderazgo y la implicación nacionales en un mecanismo de justicia de transición tienen una importancia primordial. Toda impresión de dominio o control por la comunidad internacional puede disminuir la aceptación pública de la labor de la comisión y afectar su legado;
- b) Debe hacerse énfasis en el desarrollo de la capacidad nacional. La justicia de transición es un importante proceso nacional y, dada las deficiencias existentes en muchos países en materia de recursos humanos, se deben hacer esfuerzos por contratar personal a nivel local;
- c) Debe promoverse reconciliación mediante actividades nacionales dirigidas a garantizar el estado de derecho y la buena gobernanza en oposición a un pasado caracterizado por violaciones de los derechos humanos y una gobernanza

^a Para tener un panorama general de la ayuda que presta el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, sírvase consultar: Organismo Sueco de Evaluación del Desarrollo (SADEV), *Sidas insatsberedning och uppföljning av stöd till rättsskipning i samband med försoningsprocesser*, disponible en www.sadev.se/Documents/Publikationer%202010/SADEV%20Report%202010_1.pdf.

deficiente. Una labor de reconciliación que no incluya esfuerzos por cambiar las condiciones materiales de la población es insuficiente;

d) El enfoque incluyente y participativo es importante. Los enfoques que se centran únicamente en una u otra institución o que ignoran a la sociedad civil o a las víctimas no resultan eficaces. Las experiencias más satisfactorias en materia de justicia de transición deben gran parte de su éxito a la cantidad y calidad de las consultas celebradas con la población y las víctimas. Las consultas locales permiten comprender mejor la dinámica del conflicto pasado, las pautas de discriminación y los tipos de víctimas;

e) La justicia de transición es un proceso costoso. Las medidas que se adopten no pueden quedarse a medio camino. Deben asignarse recursos suficientes para llevar las iniciativas a buen término, en particular porque contribuyen a la consolidación de la paz en el país.

Suiza

[Original: inglés]

El fortalecimiento de la relación entre el estado de derecho y la justicia de transición en la esfera de la promoción de la paz y la seguridad humana ha sido un objetivo importante de la política exterior de Suiza en los últimos años. Suiza acogió complacida el informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616) cuando se publicó en 2004.

Desde entonces, Suiza ha participado en diversas iniciativas para fortalecer el marco normativo de la justicia de transición en el nivel multilateral y fomentar la capacidad y los conocimientos especializados en esferas específicas de la justicia de transición en los niveles nacional y regional.

Suiza desea plantear como cuestión de prioridad dos problemas principales, a saber, la necesidad de adoptar un enfoque unificado en el nivel multilateral y la necesidad de elaborar estrategias de aplicación de las normas y los criterios en este ámbito.

Aunque la Asamblea General aprobó los “principios sobre las reparaciones” elaborados por Theo Van Boven^a, la Asamblea debería aprobar también los principios Joinet/Ohrentlicher a fin de consolidar un enfoque común.

En las observaciones que siguen Suiza presenta un breve panorama de su enfoque conceptual y de sus propias actividades en ese sentido. El informe incluye una reflexión crítica sobre algunos de los obstáculos actuales en esa esfera.

^a Véase la resolución 60/147 de la Asamblea General y los informes presentados por Theo Van Boven (E/CN.4/Sub.2/1993/8; E/CN.4/Sub.2/1996/17; E/CN.4/1997/104) y Cherif Bassiouni (E/CN.4/2000/62).

A. Los principios para la lucha contra la impunidad como marco para analizar el pasado^b

Aunque no hay un modelo estándar para analizar el pasado, en los últimos años se han hecho progresos mediante la labor de los relatores especiales y los expertos de las Naciones Unidas sobre las cuestiones de las reparaciones, la impunidad y las mejores prácticas en la justicia de transición^c.

El informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, publicado en agosto de 2004, fue un hito en esa evolución. En ese documento, el Secretario General plantea que las estrategias de justicia de transición eficaces deben ser a la vez de alcance amplio y naturaleza incluyente y deben dar cabida a todos los agentes pertinentes, tanto entidades del Estado como organizaciones no gubernamentales, en la elaboración de un plan estratégico único “controlado y dirigido desde el país”^d. El informe destaca además que la definición práctica de justicia de transición debería ampliarse de manera que incluya mecanismos que “pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”^e.

Más recientemente se han elaborado algunos elementos específicos de esas normas. En diciembre de 2005, la Asamblea General aprobó los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (resolución 60/147, anexo). Cabe señalar que en este documento se esbozan las obligaciones de los Estados con respecto a las violaciones graves de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario y se define el término “víctima”. Un año después, la Asamblea aprobó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (resolución 61/177, anexo), que especifica los derechos de las partes con un interés legítimo, como los familiares de desaparecidos, acceder a información sobre la suerte de las víctimas de desapariciones forzadas y, en su caso, recibir reparación por los daños materiales y morales sufridos. Además, durante los últimos años, el Consejo de Derechos Humanos ha abordado la cuestión del derecho a la verdad en una serie de

^b Suiza emplea la frase “análisis del pasado” en lugar de “justicia de transición” porque a menudo la justicia de transición se identifica de manera muy estrecha únicamente con los mecanismos jurídicos y porque considera que el análisis del pasado es un proceso a largo plazo que no se limita solo al período de transición.

^c Véanse los informes presentados por Theo Van Boven (E/CN.4/Sub.2/1993/8; E/CN.4/Sub.2/1996/17; E/CN.4/1997/104) y Cherif Bassiouni (E/CN.4/2000/62) sobre las reparaciones. En relación con las mejores prácticas en materia de justicia de transición, véase el estudio analítico sobre los derechos humanos y la justicia de transición (A/HRC/12/18 y Add.1), preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2009. En relación con los informes sobre la impunidad, véase más adelante la nota g.

^d S/2004/616, párr. 23.

^e *Ibid.*, párr. 8.

resoluciones dirigidas a fortalecer ese derecho como un principio del derecho internacional^f.

En esas circunstancias, Suiza decidió utilizar los “principios para la lucha contra la impunidad” como marco conceptual para el análisis del pasado.

Los principios para la lucha contra la impunidad fueron formulados inicialmente por Louis Joinet en el informe final sobre la cuestión de la impunidad que presentó en 1997 a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías y que fueron revisados por Diane Orentlicher en 2005 a instancias de la Comisión de Derechos Humanos^g. La importancia de los principios “Joinet/Orentlicher” no reside en la formulación de los principios propiamente dichos, sino en el hecho de que se basan en los preceptos de la responsabilidad del Estado y el derecho inherente de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos a obtener reparación. Como tal, los principios para la lucha contra la impunidad no implican nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, pero definen los mecanismos, las modalidades y los procedimientos de aplicación de las obligaciones jurídicas establecidas en virtud del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos^h.

Desde una perspectiva tanto normativa como jurídica, los principios para la lucha contra la impunidad constituyen un marco valioso para conceptualizar el análisis del pasado. Estos principios identifican cuatro esferas clave de la lucha contra la impunidad, que, a su vez, proporcionan un método amplio para analizar el pasado: a) el derecho a saber (el derecho de las víctimas y de la sociedad en general a saber la verdad; el deber de recordar que incumbe al Estado para preservar la memoria colectiva); b) el derecho a la justicia (el derecho de las víctimas a un recurso equitativo y efectivo; el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar debidamente); c) el derecho a obtener reparación (el derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el deber del Estado de reparar); y d) las garantías de no repetición de las violaciones (el derecho de las víctimas y de la sociedad en general de gozar de protección contra nuevas violaciones; el deber del Estado de garantizar la buena gobernanza y el estado de derecho).

^f En 2006 y 2007, el Consejo celebró la publicación de dos estudios preparados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad como norma e instrumento jurídico (E/CN.4/2006/91 y A/HRC/5/7, respectivamente). En 2009, se hizo una investigación más concreta sobre la función de los archivos y los programas de protección de testigos en el ejercicio del derecho a la verdad (A/HRC/12/19).

^g E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 y E/CN.4/2005/102/Add.1, respectivamente. La revisión hecha por Orentlicher se centró en determinar las mejores prácticas en la lucha contra la impunidad y no constituyó una reformulación significativa de los principios.

^h Véase también el preámbulo de los Principios y directrices básicos, que figuran en el anexo de la resolución 60/147.

B. El análisis del pasado desde una perspectiva holística: diagrama e instrumento de mediciónⁱ

En situaciones posteriores a conflictos o en otras situaciones de violencia hay muchas necesidades y es difícil determinar a cuáles dar prioridad. Las necesidades definidas en el informe del Secretario General (S/2004/616) no siempre se abordan de manera holística o se abordan sin que haya coordinación entre los agentes y los donantes. No se suele prever la continuidad de las actividades. Además, cuando los Estados son frágiles, existe el peligro de que no se planifiquen las medidas de transición con una visión del estado de derecho a largo plazo y de que las iniciativas de transición se vuelvan permanentes, reemplazando a las instituciones del estado de derecho.

Ante esas dificultades, Suiza, en colaboración con la Fundación Suiza para la Paz, ha elaborado un diagrama (que figura al final de la presente comunicación) que ilustra algunos de los principales mecanismos y procedimientos asociados con los cuatro principales citados más arriba.

A partir de un círculo interior que refleja la responsabilidad de atender las necesidades de las víctimas y hacer rendir cuentas de sus actos a los autores de las violaciones, el diagrama se centra en los vínculos entre las distintas esferas de actividad que comprende el análisis del pasado, considerando que, en dependencia del contexto y las circunstancias, cualquiera de las cuatro esferas clave puede ser el punto de partida para la intervención.

Con el diagrama también se pretende ilustrar la dimensión transformadora del análisis del pasado como parte de un proceso a largo plazo de democratización de las sociedades que han sufrido conflictos. Todo progreso sustancial que se haga en una o más de esas cuatro esferas, como el establecimiento de una comisión de la verdad en la esfera del derecho a saber, o la introducción exitosa de reformas en el sector de la seguridad como parte de las garantías de no repetición de las violaciones, proporcionará satisfacción, asegurará la rendición de cuentas y fortalecerá la confianza del público en las instituciones del Estado.

Los progresos realizados en el análisis del pasado, por ejemplo, fortalecen el estado de derecho y, a la larga, podrían contribuir a la reconciliación entre comunidades divididas. Un factor clave de este proceso es la transformación de las identidades. Si las personas se identifican predominantemente como víctimas o como autores al principio del proceso de análisis del pasado, esto podría cambiar gradualmente con el tiempo. Ser víctima o autor puede seguir siendo una experiencia personal, pero las identidades sociales y políticas se fundan principalmente sobre la base del sentimiento de ciudadanía, con los derechos y los deberes que le son inherentes, como parte del nuevo contrato social. El fortalecimiento de la confianza cívica es un objetivo esencial del proceso de justicia de transición.

ⁱ El diagrama de análisis del pasado formulado por Suiza figura al final de la presente comunicación. Para consultar una descripción más detallada del enfoque suizo sobre el análisis del pasado y el uso del diagrama, véase Jonathan Sisson, "A conceptual framework for dealing with the past" en Mô Bleeker (ed.), "Dealing with the past", *Politorbis* núm. 3, 2010, págs. 11 a 15.

Cabe añadir que el diagrama de análisis del pasado también puede utilizarse como un instrumento analítico para identificar las actividades de agentes internacionales, nacionales y locales en las cuatro esferas principales. En dependencia del contexto, el análisis de una esfera, como la del derecho a saber o la del derecho a la justicia, puede revelar una variedad de agentes en distintos niveles, mientras que en otras esferas, como la del derecho a obtener reparación, apenas se observa actividad. Por consiguiente, el diagrama es útil no solo con fines de evaluación, sino también como instrumento estratégico para determinar los puntos de entrada y posibles asociados en relación con cuestiones concretas del análisis del pasado. Sobre la base de este análisis, se puede elaborar una estrategia amplia y realista para analizar el pasado, que refleje las circunstancias imprevistas del contexto político, la cultura local, el sentido de pertenencia, la secuencia de actividades y las prioridades presupuestarias.

Resulta interesante señalar que el *Informe sobre el desarrollo mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo* apoya en gran medida el enfoque transformativo e integrado formulado por Suiza. A este respecto, demuestra la pertinencia de ese enfoque no solo para la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, sino también para crear condiciones propicias para el desarrollo sostenible. En el informe se aboga firmemente por los enfoques que combinan instrumentos diplomáticos y de desarrollo, justicia y seguridad.

C. Actividades de Suiza en el ámbito del estado de derecho y la justicia de transición

Desde 2004, Suiza ha participado en numerosas actividades encaminadas a fortalecer los criterios normativos y las normas jurídicas de la justicia de transición y seguir desarrollando su propia capacidad institucional y su reserva de expertos en esos ámbitos.

1. Criterios normativos y normas jurídicas

Consejo de Derechos Humanos. Como se mencionó anteriormente, los relatores especiales y expertos de las Naciones Unidas, sobre todo del Consejo de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han realizado estudios a largo plazo que han resultado fundamentales para elaborar los principios básicos en la esfera de las reparaciones y la lucha contra la impunidad y para formular las mejores prácticas en la justicia de transición. Desde 2006, Suiza, en colaboración con otros países, especialmente con Argentina, ha patrocinado periódicamente resoluciones del Consejo de Derechos Humanos relacionadas con los derechos humanos y la justicia de transición, alentando a que se elaboren distintos elementos de la justicia de transición como la reparación, las comisiones de la verdad, los archivos y los programas de protección de testigos. En la última resolución de ese tipo, el Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que hiciera un análisis de la relación entre el desarme, la desmovilización y la reintegración y la justicia de transición. El informe se

publicará en septiembre de 2011^j. Suiza también hizo aportes a la redacción de la Declaración de Nuremberg sobre Paz y Justicia^k.

El análisis del pasado y la mediación. En la actualidad por lo general se acepta que la paz, la justicia, los derechos humanos y el desarrollo son interdependientes y se refuerzan mutuamente y que la tarea de hacerlos realidad debe realizarse de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional, como el derecho internacional humanitario o el derecho penal internacional. Su aplicación, sin embargo, sigue siendo un desafío para todas las partes involucradas. Con el propósito de superar esas dificultades, Suiza propugna la adopción de un enfoque pragmático. No se trata de decidir si hay que incluir medidas de justicia de transición en los procesos de paz, sino más bien cómo y cuándo pueden incorporarse en esos procesos de manera constructiva. Tomando en consideración los principios de Joinet, debería perfeccionarse ese enfoque, prestando especial atención a las medidas extrajudiciales.

2. Capacidad y conocimientos especializados a nivel institucional

Grupo de trabajo sobre el análisis del pasado y la prevención de atrocidades masivas. Como un medio de fortalecer su capacidad institucional a mediano y largo plazo en el ámbito de la justicia de transición, Suiza creó un Grupo de trabajo interinstitucional sobre el análisis del pasado y la prevención de atrocidades masivas, integrado por expertos en la promoción de la paz, la justicia y el desarrollo, que trabajará como coordinador nacional en esa esfera y consolidará el enfoque a nivel de todo el Gobierno. Suiza, por conducto del Grupo de Trabajo, centra su atención en los vínculos entre el análisis de los abusos cometidos en el pasado y la labor dirigida a impedir que se repitan las atrocidades masivas, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Centro de archivos y análisis del pasado. Suiza se propone ayudar a proteger los archivos sobre violaciones de los derechos humanos mediante su Centro de archivos y análisis del pasado establecido en mayo de 2011.

Grupo de expertos suizos para proyectos civiles de consolidación de la paz. Durante los últimos años y a solicitud de los interesados, Suiza ha enviado expertos en régimen de adscripción a países que se encuentran en situaciones de conflicto o que han salido de un conflicto, para desempeñar funciones relacionadas con el estado de derecho y la justicia de transición. Las solicitudes de personal que ha recibido van desde expertos forenses y asesores jurídicos hasta agentes de policía y funcionarios de aduana. Además, en varias de sus embajadas en países que sufren o han sufrido conflictos Suiza estableció un puesto de asesor sobre consolidación de la paz, cuyo titular también se encarga de las estrategias de análisis del pasado, así como un puesto de asesor regional para Europa oriental.

Curso sobre análisis del pasado. A fin de asegurar la creación de capacidad a mediano plazo, Suiza estableció un curso de formación avanzada en análisis del pasado, que se imparte a funcionarios, miembros del grupo de expertos de reserva y profesionales de alto nivel de otros organismos gubernamentales y multilaterales y organizaciones de la sociedad civil en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.

^j Véase A/HRC/12/50, cap. I, resolución 12/11, párr. 21.

^k www.peace-justice-conference.info/declaration.asp.

Intervención rápida al servicio de la justicia. Suiza es miembro del grupo de coordinación de Justice Rapid Response (www.justicerapidresponse.org), mecanismo de reserva multilateral que permite desplegar rápidamente expertos en justicia penal y profesionales en disciplinas afines, capacitados para realizar investigaciones internacionales a solicitud de Estados e instituciones internacionales. Los expertos de Justice Rapid Response pueden desplegarse rápidamente con el objetivo de identificar, reunir y preservar información sobre delitos que constituyen crímenes según el derecho internacional y sobre violaciones masivas de los derechos humanos y comunicar los resultados de su labor a la autoridad solicitante. Los expertos de Justice Rapid Response también están en condiciones de formular, según solicitud, recomendaciones sobre las medidas más apropiadas del caso. Con esta iniciativa también se procura llenar una laguna identificada en el informe del Secretario General sobre la consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos (A/63/881-S/2009/304) y en el informe posterior sobre el examen de la capacidad civil internacional (A/65/747-S/2011/85).

D. Desafíos actuales en el ámbito del estado de derecho y la justicia de transición

Cuando se inician procesos de desarme, desmovilización y reintegración, muy a menudo no se ha elaborado una estrategia coherente de análisis del pasado o de justicia de transición. Se pierden testimonios valiosos y fundamentales de soldados y combatientes desmovilizados que podrían contribuir a la labor de una comisión de la verdad o de investigación o a procesos judiciales.

El componente de reintegración del proceso con frecuencia no se prepara bien, no se tienen suficientemente en cuenta las cuestiones de género, y los excombatientes pueden volver a movilizarse. Como han demostrado las experiencias vividas en la región de los Grandes Lagos y en Colombia, esa situación puede convertirse en un importante obstáculo para la paz y la seguridad. A ese respecto será muy pertinente el análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el proceso de desarme, desmovilización y reintegración y la justicia de transición, que se publicará en septiembre de 2011.

Desde 2004 se han producido numerosos acontecimientos en relación con el derecho a la justicia. Lo mismo puede decirse en relación con el derecho de las víctimas a un recurso justo y efectivo, lo que supone que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos pueden hacer valer sus derechos y recibir una reparación justa y efectiva. Asimismo, se ha llevado adelante el procesamiento penal de los principales responsables de graves violaciones de los derechos humanos: la Corte Penal Internacional ha comenzado a investigar situaciones de ese tipo y ha iniciado causas¹. El Estatuto de Roma ha sido ratificado por 114 Estados y el Consejo de Seguridad ha remitido dos situaciones a la Corte. Suiza ha apoyado a la Corte con dedicación y firmeza desde su creación. Pero la Corte solo puede llevar ante la justicia a los principales responsables y su jurisdicción y recursos son limitados. Aún no tiene reconocimiento universal y enfrenta problemas de aceptación y credibilidad en algunas regiones del mundo. Habida cuenta de esas

¹ La Corte Penal Internacional está investigando seis situaciones y ha abierto oficialmente 12 causas.

limitaciones, Suiza subraya la importancia de los enjuiciamientos a nivel nacional. El principio de la complementariedad consagrado en el artículo 17 del Estatuto de Roma debe reforzarse aún más, y se debe alentar a los Estados a que adapten su legislación para que puedan enjuiciar a quienes cometan actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El principio de la jurisdicción universal como un instrumento para combatir la impunidad debe promoverse más, y debe ser utilizado más activamente, sobre todo por los Estados partes en el Estatuto de Roma. En 2011, Suiza adaptó su legislación en ese sentido^m. Muchos países introdujeron nuevas disposiciones legislativas de igual índole y han hecho progresos considerables en la eliminación de las restricciones jurídicas que obstaculizan el procesamiento de los autores de crímenes de conformidad con la legislación nacional, como la prescripción, la amnistía, la extradición, el principio *non bis in idem*, la obediencia debida, la inmunidad de los Jefes de Estado del propio país y la responsabilidad del superior jerárquico.

De todas formas, son pocos los casos que son investigados y llevados a los tribunales nacionales. Pocos Estados llevan a cabo procesos penales auténticos contra ciudadanos de sus países responsables de crímenes fundamentales. En los casos en que sí se tramitan causas de ese tipo, suele tratarse de personas con menor responsabilidad y no de funcionarios de alto nivel. Por otra parte, la protección de testigos sigue siendo poco eficaz en la mayoría de los países. El acceso de las víctimas a la justicia es insuficiente, y pocas veces se establecen medidas de reparación e indemnización asociadas a los procesos judiciales.

Si bien los tribunales híbridos e internacionales han trabajado arduamente para enjuiciar a los principales responsables de crímenes internacionales, todavía queda mucho por hacer en materia de mecanismos residuales, sobre todo en relación con el traslado de causas pendientes a los Estados interesados de conformidad con las normas internacionales relativas a las garantías de un juicio justo, los programas de protección de testigos y víctimas y la ubicación, gestión y protección de los archivos y registros. También existen deficiencias en la traducción de las actas judiciales a los idiomas de los países interesados, el uso compartido de las bases de datos y el uso de la información reunida por los tribunales internacionales e híbridos para los procesos de verificación de antecedentes y las reformas institucionales.

Debe abordarse también la cuestión del doble rasero y de la responsabilidad de terceras partes a fin de fortalecer la credibilidad y legitimidad de las iniciativas contra la impunidad.

Los vínculos antes mencionados no solo están ausentes en este ámbito: a menudo se descuida el legado de las instituciones judiciales internacionales y es ínfimo el apoyo y fortalecimiento de los programas de reforma del sistema judicial nacional y de las instituciones en general. Los mecanismos internacionales de justicia de transición con frecuencia están desvinculados de la realidad existente en los Estados en cuestión en lo tocante al idioma, la aceptación por la población, la divulgación, la influencia en la buena gobernanza y las iniciativas relativas al estado de derecho. Esos mecanismos pueden tener un carácter de transición tan extremo

^m La legislación de aplicación del Estatuto de Roma entró en vigor en enero de 2011. Con ella se modificó el Código Penal suizo en lo que respecta al genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. La nueva legislación puede consultarse, en francés, en: www.admin.ch/ch/f/as/2010/4963.pdf.

que sus repercusiones son escasas. Existe incluso el peligro de que se creen sistemas de justicia paralelos, que funcionen con arreglo a normas diferentes y entiendan la justicia de una manera diferente a la que sirve de base a los sistemas locales. Determinados riesgos asociados a los mecanismos de justicia de transición no contribuyen a un sistema judicial nacional eficiente. A largo plazo, los delitos relacionados con conflictos pueden resurgir en el contexto de la delincuencia organizada.

Cuando reina la impunidad, suelen crearse alianzas entre los autores de atrocidades pasadas y miembros de la delincuencia organizada. Ese fenómeno puede dar lugar a situaciones muy peligrosas y perjudiciales que suelen ir acompañadas de un profundo deterioro de las condiciones de seguridad en el país y ponen en peligro toda perspectiva de desarrollo. Esta es otra razón para elaborar estrategias racionales y sólidas para la justicia de transición y el estado de derecho. Esas estrategias deberían ayudar a fortalecer una estructura institucional controlada a nivel nacional y un Estado legítimo, con capacidad de adaptación y que funcione después de que los agentes internacionales abandonen el país. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un buen ejemplo de cómo una iniciativa internacional de ese tipo puede cooperar con las instituciones nacionales y contribuir a la reforma institucionalⁿ. Es necesario y fundamental que aumente la cooperación de los mecanismos de justicia de transición con las instituciones nacionales e internacionales que luchan contra la delincuencia organizada.

En relación con la antropología forense, disciplina importante para el derecho a saber y el derecho a la justicia, se han logrado mejoras desde 2004. Sin embargo, aunque se han puesto en marcha muchas iniciativas internacionales^o, en los países con un elevado número de desaparecidos no suele haber capacidad local y a menudo no se aplican las normas internacionales. Suiza firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y apoya iniciativas en el campo de la medicina forense para determinar la suerte de personas que aún están desaparecidas, como por ejemplo la División de Medicina Forense, que trabaja bajo supervisión conjunta del Ministerio de Justicia de Kosovo y la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo.

En cuanto a los derechos de las víctimas a obtener reparación, los programas de indemnización y reparación podrían coordinarse mejor con otros mecanismos de justicia de transición, como los mecanismos judiciales y las comisiones de la verdad. Por lo general no se dispone de mecanismos de consulta y participación y las víctimas consideran que la reparación que se les ofrece es deficiente en términos de calidad y no tiene el efecto rehabilitador que debería tener. Los programas de reparación de la Organización Internacional para las Migraciones son ejemplos interesantes de cómo la reparación puede servir para proporcionar un apoyo más sostenible^p. Debe reflexionarse más acerca del solapamiento entre ese tipo de medidas de reparación y la cooperación para el desarrollo, o incluso acerca de las

ⁿ Véase <http://cicig.org/index.php?page-home-page>. Véase también Andrew Hudson y Alexandra W. Taylor, "The International Commission against Impunity in Guatemala: a new model for international criminal justice mechanisms", *Journal of International Criminal Justice*, vol. 8, núm. 1, págs. 53 a 74.

^o Por ejemplo, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas: <http://www.icmp.org/about-icmp/>.

^p Véase www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/organizational-structure/reparation-programmes/lang/en:jsessionid=2E0C3F182BB9A9F4E358BFD195849E04.worker02.

sinergias que podrían existir entre el desarrollo y las prioridades en el ámbito de las reparaciones. Es indispensable contar con fondos suficientes para los programas de reparación: en algunos casos, otras formas de justicia de transición, como tribunales, han recibido mucho más apoyo financiero que los programas de indemnización de las víctimas. En otros casos, en el marco de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración se ofreció apoyo financiero a excombatientes, algunos de los cuales habían cometido crímenes atroces, mientras que las víctimas tuvieron que esperar muchos años para recibir alguna forma concreta de apoyo de los programas de reparación. Esta sucesión de hechos, unida a la falta de coordinación, está perjudicando el proceso de transformación del conflicto; es una situación que las personas afectadas no entienden, y podría obstaculizar el logro de los objetivos de la justicia de transición en general.

E. Conclusiones y recomendaciones

Un mecanismo de las Naciones Unidas para apoyar y asesorar a los países que estén desarrollando procesos relativos al estado de derecho y la justicia de transición

Las normas y los criterios relativos al estado de derecho y la justicia de transición han evolucionado considerablemente desde mediados de la década de 1990. Su aplicación dista mucho de ser satisfactoria debido a la falta de un enfoque uniforme y de coordinación de las actividades. Las respuestas deben elaborarse de manera tal que se asegure la implicación nacional. Los países en que tienen lugar procesos de promoción del estado de derecho y la justicia de transición podrían beneficiarse del apoyo y la orientación que proporcione un mecanismo de las Naciones Unidas establecido expresamente con ese propósito.

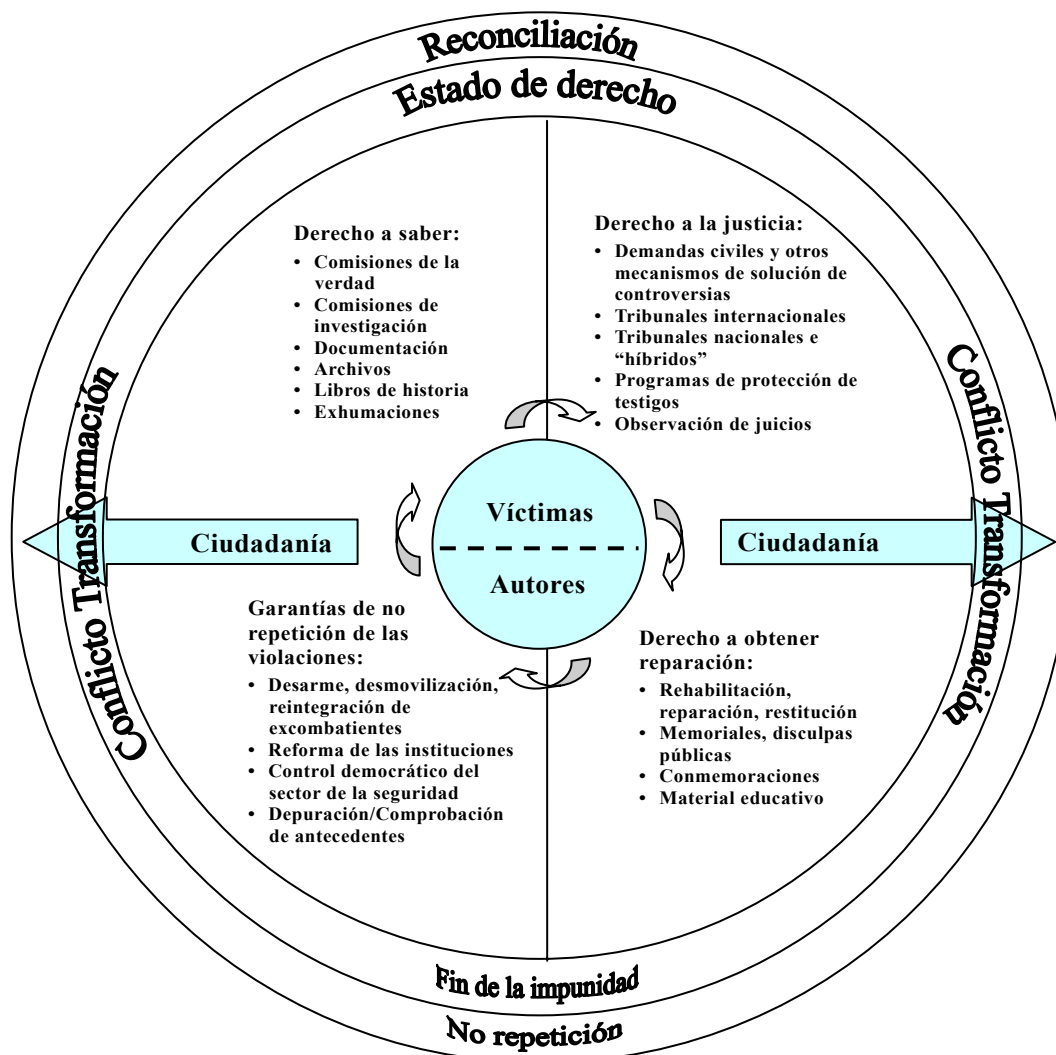
Aprobación por la Asamblea General de los principios Joinet/Orentlicher para la lucha contra la impunidad

Al igual que la Asamblea General aprobó los principios sobre las reparaciones, sería útil que la Asamblea aprobara los principios Joinet/Orentlicher para la lucha contra la impunidad. Así podría hacerse una importante contribución a la formulación de normas y criterios en esa disciplina.

Interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales

La interdependencia de los derechos civiles y políticos por una parte y los derechos económicos, sociales y culturales, por la otra, fue abordada en el primer documento de trabajo preparado por El Hadji Guissé y Louis Joinet (E/CN.4/Sub.2/1992/18). Otros documentos, sin embargo, se limitaron a tratar los derechos civiles y políticos (véase E/CN.4/Sub.2/1997/8). No obstante, es inevitable incluir la interdependencia de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en el enfoque global del estado de derecho y la justicia de transición. Ello podría conducir a la preparación en los próximos años de un nuevo informe de las Naciones Unidas que contribuyera a aumentar la coordinación entre todos los agentes que se ocupan del estado de derecho y la justicia de transición en situaciones posteriores a conflictos, incluidos los donantes.

Diagrama de análisis del pasado inspirado en los principios Joinet/Orentlicher



Fuente: Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza y Fundación Suiza para la Paz, inspirado en los principios Joinet/Orentlicher.

Turkmenistán

[Original: ruso]

En consonancia con el programa de reforma y transformación radical de Turkmenistán, el Presidente Gurbanguly Berdimuhamedov ha señalado que una de las tareas prioritarias de su Gobierno será mejorar el régimen jurídico del Estado y armonizar la legislación nacional con las normas internacionales universalmente reconocidas. El proceso de actualización legislativa de Turkmenistán está ahora en marcha.

Ese proceso de actualización es una parte importante de una campaña de reforma del ordenamiento jurídico del país, que realiza sistemáticamente una comisión especial establecida para examinar y mejorar el marco legislativo nacional e incorporar al derecho interno de Turkmenistán las normas de derecho internacional universalmente reconocidas.

Además, una comisión interinstitucional, establecida por decreto especial del Jefe de Estado, vela por asegurar el cumplimiento por Turkmenistán de los compromisos asumidos por el país al plano internacional en la esfera de los derechos humanos. Esa comisión está coordinando la labor de los ministerios y los departamentos relativa a la observancia de las obligaciones internacionales de derechos humanos y a la elaboración de recomendaciones sobre formas de incorporar al derecho interno del país tanto las normas internacionales como las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas.

La legislación de Turkmenistán establece un elaborado sistema para asegurar el respeto de la ley y la protección de los derechos humanos y civiles consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Turkmenistán ha ratificado más de 120 instrumentos internacionales, de los cuales alrededor de 40 se refieren a derechos humanos.

En la actualidad los siguientes tratados se suman a la lista de instrumentos internacionales a los que se ha adherido Turkmenistán: la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (25 de septiembre de 2010), el Convenio núm. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (25 de septiembre de 2010), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (25 de septiembre de 2010) y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (26 de marzo de 2011).

Para cumplir con sus obligaciones, Turkmenistán está incorporando las disposiciones y los principios básicos de esos instrumentos a su derecho interno y vigilando de cerca su aplicación. Tanto el Gobierno como la sociedad tienen puesta su atención de forma permanente en la esfera de los derechos humanos.

El 26 de septiembre de 2008 se aprobó la nueva Constitución de Turkmenistán, que incorpora casi todas las disposiciones fundamentales de las convenciones y las declaraciones internacionales de derechos humanos, en particular las relacionadas con el estado de derecho, lo que constituye un ejemplo de la aplicación en la práctica de la política del Gobierno de cumplir con las obligaciones de derechos humanos internacionales de Turkmenistán, en relación con la protección integral de los derechos humanos.

En 1998 Turkmenistán aprobó sobre los actos de los funcionarios públicos, las asociaciones voluntarias, las autoridades locales y los funcionarios que infringen los derechos constitucionales y las libertades de los ciudadanos (Tribunal de Apelación), que constituye la base jurídica para que los ciudadanos puedan acudir ante la justicia para recurrir contra los actos y las decisiones de los funcionarios públicos, las asociaciones voluntarias y las autoridades locales y los funcionarios que infringen sus derechos constitucionales, y que establece también el

procedimiento para que los tribunales entiendan en esos recursos. El 14 de enero de 1999, Turkmenistán aprobó la Ley de procedimiento para el examen de las apelaciones de los ciudadanos, que estipula las circunstancias en las que estos pueden ejercer su derecho de apelar ante el Estado, las autoridades públicas y otras autoridades, empresas, organizaciones e instituciones, independientemente de quién sea su propietario, y establece el procedimiento para el examen de esos recursos de los ciudadanos.

La comisión del Estado encargada de examinar los recursos de los ciudadanos contra los actos de la fuerzas de seguridad es un órgano permanente que continúa su labor para asegurar la protección de los derechos y las libertades de las personas.

En los últimos años, como parte del proceso de reforma jurídica que se está llevando a cabo en Turkmenistán, se han aprobado varios instrumentos legislativos para la protección de los derechos humanos, entre ellos, las siguientes leyes: la Ley de tribunales (15 de agosto de 2009), la Ley del Ministerio Fiscal (15 de agosto de 2009), la Ley del cuerpo de defensores oficiales y la labor de defensa pública (10 de mayo de 2010), el Código de Procedimiento Penal (18 de abril de 2009), el Código del Trabajo (18 de abril de 2010), el Código Penal (10 de mayo de 2010), el Código de ejecución de la ley penal (26 de marzo de 2011) y la Ley de extranjería (estatuto jurídico de los extranjeros) (6 de marzo de 2011).

Según la Ley de tribunales, del país gozan del derecho a la protección judicial contra los actos ilícitos de las autoridades del Estado, los funcionarios y las asociaciones voluntarias, contra toda afrenta a su honor y dignidad y contra todo acto abusivo contra su vida, su salud, y los derechos y las libertades individuales, políticos, humanos y civiles consagrados en la Constitución de Turkmenistán. El procedimiento de protección de los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos solo puede modificarse mediante una reforma legislativa.

Los extranjeros y apátridas gozan en el territorio de Turkmenistán del mismo derecho a la protección de los tribunales que los ciudadanos de Turkmenistán con arreglo a las leyes del país y los tratados internacionales. Una nueva ley, la Ley de extranjería (estatuto jurídico de los extranjeros), ha ampliado aún más los derechos de los extranjeros a fin de que sus intereses cuenten con protección judicial, entre otras.

Con arreglo al artículo 7 de la Ley del Ministerio Público los funcionarios de ese Ministerio, en el desempeño de su labor, deben velar por la observancia de los derechos humanos y las libertades civiles garantizados por el Estado, con independencia de su grupo étnico, raza, sexo, origen, situación económica, posición oficial, lugar de residencia, idioma, religión, convicción o afiliación política.

Los ciudadanos tienen derecho a recibir explicaciones e información sobre las restricciones que se impongan a sus derechos y libertades, así como a conocer el material que obre en las actuaciones judiciales en relación con causas que los afecten, cuando concluyan las inspecciones o las investigaciones pertinentes. Toda persona que crea que sus derechos, libertades o intereses legítimos hayan sido vulnerados por los actos de un funcionario del Ministerio Fiscal, tiene derecho a recurrir contra esos actos ante un funcionario de nivel superior de ese Ministerio.

La Constitución de Turkmenistán garantiza el derecho a la asistencia de un letrado cualificado en cualquier etapa del proceso judicial (artículo 108).

De conformidad con la Ley del cuerpo de defensores oficiales y la labor de defensa pública, el cuerpo de defensores oficiales es una asociación profesional de abogados, basada en el principio de la autorregulación y establecida para prestar servicios de defensa pública. Funciona como una institución jurídica de la sociedad civil y no forma parte del poder ejecutivo o administrativo del Estado. El Estado se compromete a proporcionar a todos los ciudadanos la asistencia jurídica y profesional necesaria, garantiza a todas las personas físicas y jurídicas en el territorio de Turkmenistán el mismo derecho a recibir asistencia letrada e información sobre la naturaleza de dicha asistencia, así como la forma de obtenerla y de recibir asesoramiento jurídico gratuito. Asimismo asegura la protección de los derechos de determinadas personas en los casos estipulados por la ley.

Un hito importante en la historia del progreso social y político de Turkmenistán fue la aprobación del nuevo Código de ejecución de la ley penal, que regula cuestiones jurídicas relativas al sistema penitenciario del país. La legislación sobre la ejecución de la ley penal de Turkmenistán se funda en principios reconocidos internacionalmente, como el respeto de las garantías procesales (el estado de derecho), el humanitarismo, la democracia, la igualdad ante la ley para los condenados, el trato diferencial y la consideración de circunstancias particulares en la imposición de sanciones, así como la defensa del derecho de todas las personas privadas de libertad al trato humanitario y el respeto de la dignidad inherente al ser humano.

En un capítulo separado de dicho Código se abordan aspectos específicos de la ejecución de las sentencias dictadas contra menores, con la debida consideración de su edad, su desarrollo psicológico y emocional, entre otras circunstancias. También se establece la posibilidad de que los menores infractores tengan más contacto con el mundo exterior, y se prevé su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

El Código también estipula que los condenados deben recibir asistencia una vez que recuperan su libertad tras haber cumplido penas privativas de la libertad.

Turkmenistán, que ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y que cumple estrictamente con las obligaciones internacionales establecidas en ellos, sigue trabajando para reformar su sistema de protección interna de los derechos humanos, respetando de manera sistemática y persistente las obligaciones que ha asumido ante la comunidad internacional.

Al propio tiempo, Turkmenistán sigue cooperando activa y fructíferamente con organizaciones internacionales y cumple resueltamente sus obligaciones internacionales.

El país está poniendo en marcha la próxima etapa del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el período 2010-2015, que implica cooperación entre el Gobierno de Turkmenistán y los organismos de las Naciones Unidas acreditados ante el país. Se está prestando colaboración en materia de políticas económicas y sociales, asuntos jurídicos y protección ambiental. Asimismo, se ha dado suma prioridad a proyectos progresistas sobre el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, la promoción del desarrollo humano para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la consecución de mejoras en la esfera del desarrollo sostenible y el fomento de la paz y la seguridad.

El Gobierno de Turkmenistán, la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo están llevando a cabo un proyecto conjunto para fortalecer la capacidad nacional de Turkmenistán a fin de promover y proteger los derechos humanos (2009-2012), con objeto de intensificar el diálogo constructivo sobre ese tema, promover los procesos democráticos y facilitar la elaboración oportuna de los informes nacionales del país.

Hasta la fecha, la comisión interinstitucional establecida para asegurar el cumplimiento por Turkmenistán de sus compromisos internacionales en la esfera de los derechos humanos ha redactado y presentado informes nacionales ante los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados en relación con la aplicación por Turkmenistán de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, con arreglo al calendario debidamente ratificado.

La política de reforma radical iniciada por el Jefe de Estado se está aplicando con diligencia. Se trata de una política que promueve el desarrollo dinámico y continuo de la legislación nacional actual y de todas las esferas de la vida pública, social y económica del país.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

[Original: inglés]

En el Reino Unido el estado de derecho es la piedra angular de su constitución no escrita y de su política exterior. El Reino Unido considera que el desarrollo del estado de derecho es un principio de importancia fundamental tanto para las relaciones internacionales como para el desarrollo. El respeto del estado de derecho a nivel internacional es central para prevenir y solucionar controversias. A nivel nacional, el restablecimiento y el fortalecimiento del estado de derecho y las instituciones son esenciales para ayudar a crear y mantener las condiciones necesarias para que se lleven a cabo actividades como la consolidación de la paz en una sociedad que ha pasado por un conflicto. El respeto del estado de derecho y los derechos de propiedad, y en particular, el empoderamiento económico y los regímenes normativos y regulatorios son fundamentales para lograr un desarrollo equitativo y efectivo. Sin embargo, el estado de derecho a nivel internacional y el estado de derecho a nivel nacional son temas bastante distintos, con objetivos y agentes diferenciados.

El Reino Unido considera que es importante que todos los Estados arreglen sus controversias de forma pacífica. No obstante, la decisión sobre cuál será el medio que se utilice para la solución pacífica de las controversias debe corresponder a las partes, que podrán recurrir a medios judiciales o extrajudiciales, como la mediación. A nivel internacional, los medios judiciales para el arreglo de controversias siguen constituyendo una parte esencial del mecanismo de solución pacífica de controversias y la promoción del estado de derecho.

La Corte Internacional de Justicia se encuentra en la cúspide de la estructura internacional y realiza una enorme contribución al arreglo pacífico de controversias y la promoción del derecho internacional. El Reino Unido observa y celebra que en los últimos años se ha recurrido cada vez más a la Corte. Muchas de las causas se

inician ante la Corte en virtud de tratados o acuerdos específicos entre las partes. Sin embargo, los Estados Miembros también tienen la opción de aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 de su Estatuto. El Reino Unido es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que ha aceptado someterse a la jurisdicción general de la Corte de esta forma. Instamos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aún no lo hayan hecho a considerar la adopción de una medida similar.

El Reino Unido cumple un papel único y central en las cortes y los tribunales penales internacionales, al ser Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y —en lo que respecta al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda—, al ser miembro del Consejo de Seguridad; además, contribuye en gran medida a los comités de administración de los otros tres tribunales: el Tribunal Especial para el Líbano, el Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, y es miembro de esos comités. El Reino Unido está comprometido a asegurar que esos órganos reciban todo el apoyo del Consejo de Seguridad en el cumplimiento de sus mandatos como instrumentos eficaces y efectivos para la aplicación de la justicia internacional.

El Reino Unido desempeña un papel rector al velar por que se ponga fin a la impunidad en todos los casos en que sea posible. Desde hace tiempo ha defendido la necesidad de mejorar los procedimientos para la inclusión y exclusión de personas y entidades de la lista de sanciones como instrumento fundamental en la lucha contra terroristas y otras personas que han transgredido las normas internacionales de justicia, y celebra las mejoras introducidas recientemente en el régimen de sanciones. Ante una situación cada vez más grave en Libia, cuyo Gobierno atacaba sus propios ciudadanos, el Reino Unido participó activamente en la redacción de la resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad y en la remisión de la causa sobre la situación en ese país a la Corte Penal Internacional.

El Reino Unido entiende la justicia de transición como el conjunto de mecanismos empleados en las sociedades embarcadas en una transición hacia la democracia. Ese proceso suele tener lugar tras un conflicto armado (nacional o internacional) o una prolongada dictadura la que ha violado persistentemente los derechos humanos y/o el derecho internacional o humanitario. El objetivo de la justicia de transición es impartir justicia y lograr la reconciliación combatiendo la impunidad. Los mecanismos para asistir en el proceso de reforma política pueden ser judiciales, extrajudiciales o una combinación de ambos.

Los mecanismos más comunes de justicia de transición son los siguientes:

a) *Poder judicial (mecanismos de justicia del Estado y mecanismos de justicia no tradicionales)*. Los mecanismos que se han utilizado van desde procesos penales ante tribunales nacionales —mediante el sistema de justicia penal “ordinaria” o el establecimiento de divisiones especializadas o tribunales que investigan y juzgan la comisión de atrocidades en masa— hasta tribunales penales híbridos e internacionales;

b) *Averiguación de la verdad (comisiones de averiguación de la verdad, de investigación y/o de memoria histórica)*. Esta función está a cargo en general de comisiones para la averiguación de la verdad (nacionales o internacionales), comisiones de investigación (locales, nacionales o internacionales) y/o grupos para

la preservación de la memoria histórica. Algunos mecanismos de averiguación de la verdad también poseen a veces importantes facultades para investigar las violaciones de los derechos humanos, como ocurrió con el Comité para la investigación de violaciones de derechos humanos de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica;

c) *Reparación*. La reparación puede darse a nivel nacional o internacional. Las medidas de este tipo pueden ser ordenadas por un tribunal en el marco de un procedimiento civil o penal o consistir en un programa nacional de reparación, de tipo administrativo;

d) *Reforma institucional*. Se refiere a la reforma de todos los organismos que participan en la administración de justicia, como la policía y el poder judicial, y la reforma de la legislación, incluida la constitución nacional. El proceso puede comprender mecanismos de investigación y depuración, un procedimiento para evaluar la integridad de ciertas personas por haber participado en la represión en el pasado o cometido actos de corrupción. Estos procedimientos tienen por finalidad purgar las instituciones públicas de funcionarios incompetentes o carentes de ética.

Todos estos procesos deben aplicarse de conformidad con el derecho internacional.

La eficacia de la justicia de transición depende en mayor o menor medida, de varios factores, con independencia de que se reciba asistencia internacional o se utilicen recursos internos. Esos factores son su legitimidad, la implicación de la comunidad, el compromiso del gobierno, la participación de la sociedad civil, las actividades de divulgación, el fomento de la capacidad, la oportunidad de su aplicación, y la utilización de una combinación de mecanismos.

En opinión del Reino Unido es conveniente ver a la justicia de transición como un proceso de transformación complejo y continuo. Los conflictos o la represión no suelen terminar en una fecha cierta ni con un hecho determinado. Se considera que un país ha iniciado un proceso de transición cuando dejan de cometerse atrocidades y comienzan a realizarse serios esfuerzos por afrontar las violaciones de los derechos humanos, lograr la paz y salir adelante. Un proceso de justicia de transición puede iniciarse mientras se sigue librando un conflicto y, aunque esto quizás dé visibilidad a las necesidades y el sufrimiento de las víctimas y genere una presión en los responsables de la violencia que los mueva a participar en un verdadero proceso de paz, es de presumir que será menos eficaz desde el punto de vista de la democratización. Las medidas de justicia de transición que han evolucionado durante un período más prolongado y que tienen un fuerte componente de implicación nacional tienden a propiciar una mayor estabilidad política interna.

El Reino Unido considera también que es importante equilibrar el anhelo de ofrecer una combinación de mecanismos de justicia de transición, como procesos judiciales, amnistías o comisiones para la averiguación de la verdad (según lo que convenga a cada situación específica posterior a un conflicto y las preferencias locales), con la necesidad de asegurar que ninguna de esas combinaciones implique una superposición de funciones ni exista una contradicción entre estas, como sucedió en Sierra Leona cuando algunos de los autores de crímenes cometidos no declararon la verdad ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación por temor a ser juzgados por el Tribunal Especial para Sierra Leona, que funcionaba al mismo tiempo.

El Reino Unido alienta la incorporación de mecanismos de consulta y participación locales en todo mecanismo de justicia de transición que reciba apoyo internacional a fin de asegurar que el mecanismo elegido sea el adecuado para el contexto y la cultura del lugar. Los mecanismos de consulta local, si son transparentes y generalizados, ayudarán a generar un sentimiento de implicación y participación que debería hacer menos probable la reiniciación del conflicto.

A nivel nacional, es fundamental que el gobierno esté comprometido y aplique cambios estructurales para lograr una paz sostenible y generar una cultura de respeto por el estado de derecho. Sin embargo, los gobiernos que surgen de sociedades que han pasado por un conflicto carecen muchas veces de los antecedentes o la experiencia de la acción en un entorno positivo de derechos humanos. En esos casos, el papel de la sociedad civil se vuelve más importante para asegurar el éxito de cualquier mecanismo de justicia de transición. En la opinión del Reino Unido es esencial que la comunidad internacional colabore, no solo con todo gobierno que surja con posterioridad a un conflicto, sino también con la sociedad civil, dado que es esta última la que se encuentra muchas veces en mejor posición para proporcionar información sobre la cultura y el contexto locales, que permitan determinar cuáles serán los objetivos y el diseño de proyecto más pertinentes. A menudo es la sociedad civil la que se encuentra en mejores condiciones para prestar asistencia en relación con cuestiones como la reunión de datos, la celebración de consultas públicas, las actividades de reparación y la asistencia a las víctimas.

Con frecuencia las víctimas más afectadas por un conflicto son también las personas de más difícil acceso para la comunidad internacional: poblaciones rurales que viven en zonas remotas, mujeres y niños. Para que los mecanismos de justicia de transición les ofrezcan algún grado de reparación, es necesario que se adopten métodos de divulgación adecuados, que sean innovadores, y probablemente convenga que su aplicación esté a cargo de la sociedad civil. Si se quiere que tengan efectos positivos duraderos, los mecanismos de justicia de transición deben ser transparentes y estar a disposición de todos los que han sufrido.

Es fundamental que se restablezca el estado de derecho a nivel nacional después de un conflicto como función primordial del Estado. Los mecanismos de justicia de transición deberían contribuir al estado de derecho en el plano interno. Es probable que los sistemas ordinarios nacionales no puedan atender a las demandas de justicia durante el proceso de transición, posiblemente porque el sistema judicial haya sido drenado de recursos durante el conflicto y requiera una reforma para poder cumplir con sus funciones con justicia e independencia. También es probable, como ocurre en el caso de Rwanda, que los sistemas nacionales encuentren muy difícil hacer frente a la magnitud y la gravedad de los crímenes, así como al enorme número de víctimas. Puede faltar voluntad política para investigar y juzgar esos delitos, lo que tendrá como consecuencia intentos de administración de la justicia que den resultados deficientes y que no se imparta una justicia verdadera. Como forma de fortalecer la capacidad y la experiencia judiciales del país, el Reino Unido apoya, entre otras cosas, la capacitación de abogados locales a fin de reemplazar a los extranjeros en los procesos por genocidio o ayudar a generar una cultura de derechos humanos introduciendo conceptos como el derecho del imputado a un proceso judicial gratuito y justo y a un trato humano en prisión.

La capacidad de la comunidad internacional de promover el estado de derecho a nivel nacional sigue siendo deficiente. La aplicación de las recomendaciones del

informe del Secretario General de 2009 sobre la consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos (A/63/881-S/2009/304) es fundamental para asegurar que se adopte un enfoque internacional más eficaz y coherente para la consolidación de la paz. Es necesario que se perciban mejoras tangibles sobre el terreno en esferas como el estado de derecho, lo que requiere un apoyo más predecible y una coordinación más eficaz entre las Naciones Unidas y otros actores. Es necesario acercar a donantes y Estados anfitriones y asegurar la coordinación estratégica entre los organismos donantes para apoyar a las autoridades nacionales. El examen de la capacidad civil es importante en este caso, pues es necesario deslindar las funciones y las responsabilidades de las distintas partes de las Naciones Unidas y asegurar una planificación integrada. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional enfrentarán duras pruebas en el mundo real en lugares como Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Côte d'Ivoire en un futuro cercano, y el Reino Unido estima importante que la comunidad internacional comience, lo antes posible, a planificar su respuesta de forma coordinada y eficaz.

En lo que respecta a la promoción del estado de derecho a nivel nacional, el Reino Unido considera que el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y la Dependencia del Estado de Derecho pueden desempeñar un papel importante. En vez de crear nuevas estructuras y mecanismos, el Reino Unido favorece el fortalecimiento y el desarrollo de las estructuras existentes bajo la decidida dirección de la Vicesecretaria General. Como ocurre con una estructura complicada de gran tamaño, la comunidad internacional se compone de numerosas piezas móviles que operan en esta esfera. Para el Reino Unido, la respuesta no radica en el diseño y la creación de nuevos componentes, sino en cooperar con las Naciones Unidas para que esos componentes del sistema de las Naciones Unidas que ya existen funcionen juntos con mayor eficacia.
